



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

ESCUELA DE POSGRADO

**PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN
PÚBLICA**

**Impacto del procedimiento administrativo durante el estado
de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020**

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestra en Gestión Pública

AUTORA:

Montañez Paucar, Jacqueline Deysy (ORCID: 0000-0001-5734-2122)

ASESORA:

Dra. Soria Pérez, Yolanda Felícitas (ORCID 0000-0002-1171-4768)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Reforma y Modernización del Estado

LIMA - PERÚ

2021

Dedicatoria:

Dedico esta tesis a nuestro señor Jesucristo, a mi familia, a mi amada hija Luciana, así como a mis padres Brígida y Octavio, por el apoyo y fortaleza incondicional que me brindaron toda esta etapa de preparación académica y con sacrificio y dedicación me han guiado por el camino de la verdad y honestidad.

Agradecimiento:

Agradezco, a mi familia por todo su apoyo brindado hacia mi persona, y en especial a mi asesora, Dra. Yolanda Soria Pérez, así como el docente revisor Mg. Gilmer Iglesias Martínez, que han tenido paciencia y dedicación en sus asesoramientos, asimismo, la ilusión de ver en mí una Maestra en Gestión Pública.

Índice de contenidos

Carátula	
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice de contenidos	iv
Índice de tablas	v
índice de figuras	vi
Resumen	vii
Abstrac	viii
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	5
III. METODOLOGÍA	16
3.1. Tipo y diseño de investigación	17
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización	18
3.3. Escenario de Estudio	19
3.4. Participantes	20
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	21
3.6. Procedimiento	23
3.7. Rigor científico	24
3.8. Método de análisis de datos	25
3.9. Aspectos éticos	26
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	27
V. CONCLUSIONES	35
VI. RECOMENDACIONES	36
REFERENCIAS	37
ANEXOS	

Índice de tablas

Tabla 1 Categorías y subcategorías	18
Tabla 2 Caracterización de participantes para el trabajo de investigación	21

Índice de figuras

Figura 1. Organigrama de la UGEL N° 04	20
--	----

Resumen

El presente trabajo de investigación contiene los impactos y análisis del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020, existiendo muchas deficiencias en el procedimiento de evaluación previa y aprobación automática sujetos a silencio administrativo y fiscalización posterior, respectivamente, regulado en el TUO de la ley N° 27444. Asimismo, obteniendo como impacto principal, a la implementación y reformas tecnológica y humana, así como, suspensión y prórroga de plazos y la invalidez del acto administrativo, siendo los factores que causan deficiencia al adecuado tratamiento del procedimiento administrativo. Al respecto, el análisis al silencio administrativo y fiscalización posterior, se evidenció que ha existido una suspensión y prórroga de plazos a la tramitación de los expedientes administrativos, producto de la pandemia del Covid 19, dado que el estado estableció la inmovilización social obligatoria, estando impedidos para realizar la supervisión posterior, generando con ello demora en los procedimientos y causando el silencio administrativo por el incumplimiento plazo. En ese sentido, en el presente estudio de investigación se ha desarrollado el método de investigación con un enfoque cualitativo, con el diseño fenomenológico y con el tipo de investigación básica, por lo que buscar brindar un mayor análisis y énfasis del impacto del procedimiento administrativo producto de la pandemia, obteniendo como participantes, a los expertos y/o especialista de profesionales de la materia, así como el análisis documental de estudio.

Finalmente, se concluye en el presente trabajo de tesis, que el impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional, ha existido deficiencias en la implementación de recursos tecnológico y humanos, suspensión de los plazos administrativos, invalidez del acto administrativo, virtualidad de los expedientes y activación de la firma digital, dichos factores han sido sustentados en distintos decretos supremos emitidos por el poder ejecutivo a consecuencia de la pandemia del covid 19.

Palabras clave: procedimiento administrativo, evaluación previa, aprobación automática, silencio administrativo, fiscalización posterior.

Abstract

This research work contains the impacts and analysis of the administrative procedure during the state of national emergency in UGEL N ° 04, 2020, with many deficiencies in the prior evaluation and automatic approval procedure subject to administrative silence and subsequent control, respectively, regulated in the TUO of law No. 27444. Likewise, obtaining as main impact, the implementation and technological and human reforms, as well as, suspension and extension of deadlines and the invalidity of the administrative act, being the factors that cause deficiency to the appropriate treatment of the administrative procedure. In this regard, the analysis of the administrative silence and subsequent inspection, it was evidenced that there has been a suspension and extension of deadlines for the processing of administrative files, as a result of the Covid 19 pandemic, since the state established mandatory social immobilization, being prevented from carrying out subsequent supervision, thereby generating a delay in procedures and causing administrative silence due to non-compliance with the deadline. In this sense, in the present research study the research method has been developed with a qualitative approach, with the phenomenological design and with the type of basic research, thus seeking to provide a greater analysis and emphasis of the impact of the administrative procedure product of the pandemic, obtaining as participants, experts and / or specialists of professionals in the field, as well as the documentary analysis of the study.

Finally, it is concluded in this thesis work, that the impact of the administrative procedure during the state of national emergency, there have been deficiencies in the implementation of technological and human resources, suspension of administrative deadlines, invalidity of the administrative act, virtuality of the files and activation of the digital signature, these factors have been supported by different supreme decrees issued by the executive branch as a result of the COVID-19 pandemic.

Keywords: administrative procedure, prior evaluation, automatic approval, administrative silence, subsequent control and state of emergenc

I.- INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación obedece a una realidad problemática evidente en nuestro país, y también a nivel mundial que ha impactado en muchos factores en el sistema económico, social y jurídico, a causa de la pandemia del Covid 19, a consecuencia de lo suscitado por dicha pandemia varios países han declarado a su territorio en estado de emergencia nacional conllevando a una serie de dificultades en el sistema administrativo y sistema judicial, debido a la falta de modernización del estado, afectación de los plazos y la virtualidad en los trabajados del sector público y privado.

En los países latinoamericanos, como uno de los problemas impactantes ha ocurrido en los procedimientos administrativos, puesto que han sufrido cambios en el desarrollo de la tramitación e incumpliendo con los plazos establecidos en cada normatividad como consecuencia de la pandemia del Covid-19, generando con ello el perjuicio a los administrados e interés común de la colectividad.

El procedimiento administrativo en el Perú, a lo largo de la historia ha sido implementado y modificado, siendo en la actualidad regulado por la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo general, considerando que la Ley se encuentra vigente desde el 11 de octubre de 2001, en el cual ha cumplido un rol importante en lo que respecta a la regularización de los procedimientos administrativos; cabe señalar que la presente ley se ha unificado y recopilado mediante el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444.

Según el autor Santy (2020) sostuvo que la productividad del derecho administrativo, constituye un instrumento central del ordenamiento que reglamenta las actuaciones de la administración pública en sus vínculos con los privados y los derechos de estos frente a todas las entidades administrativas.

La crisis mundial por el nuevo virus denominado COVID-19, el estado peruano promulgó el 15 de marzo de 2019, a través del marco normativo disposición del decreto supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por los peligrosos sucesos que perjudican la vida de la persona, a consecuencia de la aparición del dicho virus, por lo que, en su artículo primero, declaró el Estado de Emergencia Nacional por un periodo de (15) quince días calendarios, esto

quiso decir, desde el 16 al 30 de marzo, a su vez, estableció el aislamiento social obligatorio. Asimismo, dicho estado de emergencia y cuarentena se extendió hasta el 30 de junio del presente año, sucesivamente hasta la actualidad.

Al respecto, la predictibilidad administrativa y el debido procedimiento son base del derecho administrativo, y en la actualidad con los efectos de la pandemia, deben ser respetados con más rigor en días de pandemia, por lo que es necesario que el estado implemente y prorrogue la suspensión de los procedimientos administrativos en general, mientras que la cuarentena se mantenga y que obligue a las entidades a dejar sin efecto todas las comunicaciones que han emitido respecto a la suspensión general dictada por normas con rango de ley, en los procedimientos administrativos de evaluación previa y automática.

De lo expuesto, por el autor en el plano jurídico, el estado suspendió todos los plazos administrativos, se modificó las atenciones presenciales y se implementó protocolos de seguridad, por lo que mayor énfasis se enfocó en la razón de dicha suspensión plazos, siendo que, en el Perú, la Administración Pública prosigue en su gran mayoría los trámites de los procedimientos administrativos de evaluación previa y automática de manera convencional, de manera no presencial y por medio digital (es decir, de forma electrónica).

Según, el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 (2019), señaló que:

“El Procedimiento administrativo, es el conglomerado de actuaciones y procedimientos gestionados por el estado y/o entidades públicas, que conllevan a la proyección de un acto administrativo que acarreen consecuencias jurídicas individuales o sobre interés particulares, obligaciones o derechos de los administrados”.

De acuerdo, a lo establecido por el Ley infiere que el procedimiento administrativo, es un conglomerado de intervenciones por parte del administrado, administración y colectividad, siendo los sujetos procedimentales, donde el administrado inicia la actuación de tramitación de solicitud de un derecho, beneficio, bonificaciones y/o compensaciones, en la cual la administración tiene la facultad de

atender mediante una decisión administrativa (acto administrativo). Sin embargo, los procedimientos administrativos, se clasifican en dos procedimientos, las cuales son de evaluación previa y de aprobación automática, cada una de ellas, con distintas finalidades y resultados.

En tal sentido, encontrándonos en la realidad problemática de la UGEL N° 04 con respecto al procedimiento administrativo que se iniciaron en el año 2020, a raíz del estado de emergencia nacional se suspendieron los plazos administrativos de conformidad con la disposición del referido decreto supremo señalados líneas arriba, así como la variación del tramitación de expedientes en físico y la mesa de partes presencial, puesto que en la actualidad prosiguen virtualizando los documentos y creando casillas electrónica para la notificación de los actos administrativos, tanto en la evaluación previa y aprobación automática.

Aunado a ello, se desprende que la problemática en el presente tema de investigación es el impacto que ha causado a los procedimientos administrativos, en virtud a lo dispuesto por el periodo de estado de emergencia nacional en la UGEL.04, 2020. Obteniendo como problema general al presente trabajo de investigación ¿Cuál es el impacto del Procedimiento administrativos durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020? y consiguiendo como problemas específico ¿Cuál es el impacto del procedimiento de aprobación automática durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020? Y ¿Cuál es el impacto del procedimiento de evaluación previa durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020?.

La justificación del presente trabajo de investigación a nivel teórico, abarcó en analizar y explicar el impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04 en el año 2020, a razón de demostrar cuales han sido los efectos del procedimiento administrativo, cuya información analizada obtenida de artículos, libros y norma jurídica que facilita datos cualitativos que apoyan a responder la problemática formulada y sus posibles recomendaciones, la contribución del presente, es la implementación del sistema administrativo producto de la pandemia en las instituciones públicas del estado, en lo que respecta a los procedimientos administrativos, se puede advertir la

ineficiencia de los recursos tecnológicos y humano, por lo que, se tiene que reforzar la implementación en los recursos tecnológicos en los procedimientos administrativos; asimismo, la justificación radica en un ámbito metodológico, ya que podrá ser utilizado como fuente de información y antecedentes, siendo que las conclusiones a la que se arribó servirán a más investigadores y servidores civiles de la administración pública a una mejor implementación, modernización y reforma del procedimiento administrativo ante cualquier pandemia, que a futuro pudiera ocasionar perjuicio a los administrados y a la administración, y que se evidencie un mínimo nivel de ineficiente en los procedimientos en la UGEL.04; a su vez, la justificación social, versa en los cambios que ha ocasionado al sistema administrativo a causa de la pandemia, esto ha conllevado a diversas implementaciones de las personas que recurren a las instituciones del estado para poder iniciar un procedimiento administrativo, cuya finalidad es resolver lo requerimiento mediante un trámite que por exigencia le corresponde, y también existió una justificación práctica, dado que con la presente tesis y las conclusiones implicaran a la implementación y modernización en lo que respecta en temas de digitalización y tecnológico, de los procedimientos administrativos, en lo cual producirá en la sociedad un cambio relevante para mejorar y proteger los principios administrativos de celeridad, debido procedimiento y derechos de los administrativos.

Por todo lo expuesto, como objetivos a la presente materia de investigación se ha formulado lo siguiente: Analizar el impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020; y como objetivos específicos, Explicar el impacto del procedimiento de evaluación previa durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020 y Explicar el impacto del procedimiento de aprobación automática durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

II. MARCO TEÓRICO

Previo al estudio del procedimiento administrativo en nuestro ordenamiento jurídico como consecuencia del periodo del estado de emergencia nacional, se da a conocer el impacto social y tratamiento del procedimiento administrativo en el sector público en épocas de pandemia, siendo pertinente indicar algunas consideraciones respecto al análisis e identificación en otros países, en lo referido al derecho administrativo regulado por la ley del procedimiento administrativo general y su importancia en el desarrollo general del procedimiento administrativo general.

Al respecto, en el contexto nacional, en relación a los procedimientos administrativos se encontró el trabajo presentado por Chayña (2017) quien en lo referido al análisis del concepto del procedimiento administrativo en el marco de la vulnerabilidad al derecho de la defensa, teniendo como objetivo determinar el nivel de vulnerabilidad en los procedimientos administrativos que afecten al derecho de defensa; utilizando como muestra a personas que participan en un procedimiento administrativo y servidores que laboran en las instituciones del estado, asimismo, continuo al estudio un enfoque cualitativo, logrando sostener que el procedimiento administrativo es el grupo de actos o actuaciones tramitadas en el sector público, orientado a la proyección del acto administrativo que resulte efectos jurídicos individuales o colectivos sobre intereses particulares en relación a los derechos de los administrados.

Asimismo, Tirado (2020) en el desarrollo del trabajo de investigación al procedimiento administrativo en tiempos de pandemia, tuvo como objetivo principal analizar los efectos del procedimiento; utilizando como muestra a especialistas de derecho administrativo y servidores y funcionarios del estado, siendo la investigación un enfoque cualitativo, en la cual, sostuvo que el procedimiento administrativo busca esencialmente canalizar la competencia general que tienen la administración pública ante los sujetos que participan en un procedimiento administrativo, a efectos de establecer herramientas que garanticen los derechos y el debido procedimiento de los ciudadanos, con la finalidad de proteger el interés colectivo y el principio de legalidad de acuerdo a las etapas del procedimiento.

Por otro lado, el autor Valdivia (2017), en la tesis de investigación señaló que el procedimiento administrativo en sistema jurídico peruano, tiene como objetivo regular la incidencia de principios, derechos y deberes en la administración pública en los procedimientos de evaluación previa y aprobación automática. Para el cual como muestra utilizó especialistas en derecho administrativos y funcionarios de la administración pública, asimismo, siguió el enfoque de la investigación cualitativa, logrando concluir que los procedimientos administrativos mediante los cuales se inician de oficio o a pedido de parte rigiéndose en una serie tramites y procedimientos de acuerdo a lo regulado y establecido en el texto único del procedimiento administrativo de cada entidad, finalizando con la emisión del acto administrativo que resuelva su petición ya sea de forma favorable o desfavorable de acuerdo a lo sustentado por la administración, generando con ello efectos jurídicos a futuro o en un determinado tiempo o hecho concreto.

Según, Pérez (2020), presentó el artículo referido al procedimiento administrativo, para ello reviso documentos relacionados al procedimiento administrativo, asimismo, utilizó el método analítico, mediante la cual sostuvo que el procedimiento administrativo en tiempos de pandemia tuvo un fuerte impacto en las entidades administrativas como consecuencia de la pandemia, obteniendo como resultado la deficiencia en los procedimientos de evaluación previa y automática, en lo que respecta a los temas del debido procedimiento, actos administrativos, suspensión de plazos y acceso a la información pública, siendo estas deficiencias, la afectación al derecho constitucional y el principio de legalidad regulado en la ley del procedimiento administrativo general.

Pando (2018), en el análisis de los efectos de una nueva regularización del silencio administrativo, se evidencia que cuenta con el enfoque cualitativo, utilizando el método inductivo en su trabajo, y obteniendo como participantes a los administrativos del estado, por lo que, de acuerdo a lo analizado, precisó que el procedimiento administrativo de evaluación previa, concluye que los procedimientos de evaluación previa están inmersos a una revisión y tratamiento de la materia en cada caso, otorgándole un mayor énfasis al estudio de las solicitudes presentado por los

administrados, generando con ello, un cumplimiento de plazo para atender dicha solicitud, caso contrario se produce el silencio administrativo positivo o negativo, por la ausencia de pronunciamiento de la administración pública, de acuerdo a lo señalado en el tupa de cada entidad, estando sujeto a la fiscalización posterior.

Finalmente, Villanueva (2019), en el estudio abordado al enfoque del procedimiento de aprobación automática en el Perú, utilizó el método de investigación analítica donde los involucrados eran servidores de las entidades públicas, mediante el cual concluyó que dicho procedimiento tiene como característica fundamental el principio de veracidad, sustentado por parte del administrado, asimismo, tiene la aprobación inmediata al momento que presenta la solicitud ante la administración, siempre y cuando cumpla con los requisitos estipulados por ley en cada materia, estando sujetos a una fiscalización posterior, estos procedimientos tienen que estar regulados en el tupa, a efectos de reconocer el método y etapas del trámite administrativo, desde el inicio hasta la ejecución del acto.

En la actualidad, nuestro sistema administrativo, es uno de los más relevantes nociones del derecho administrativo, imprescindible para comprender la competencia administrativa en la correlación directa con los administrados, por lo que a raíz de la pandemia covid19 ha obtenido una acierta variación en los procedimientos, esto es, en la clase de evaluación previa y aprobación automática, causando con ello, la suspensión de los plazos administrativos y la digitalización de los documentos, transbordando a un gran cambio, como es la virtualidad, siendo necesario optar dicha medida, a efectos de evitar la propagación del virus, restringiendo totalmente la atención presencial en la mayoría de entidad públicas, generando con ello un gran impacto al tratamiento de los procedimientos administrativos, al debido procedimiento y el derecho a la defensa, en caso si se necesitara de alguna manifestación o declaración.

En el panorama internacional, en correlación al procedimiento administrativo se halló el trabajo desarrollado por Méndez (2019) en lo que respecta a la implementación de la garantía del procedimiento administrativo en la administración pública del sistema ecuatoriano, la cual como muestra empleo el código orgánico

administrativo y sus modificatorias, asimismo, siguió el procedimiento de la investigación cualitativa, logrando describir que el sistema administrativo y/o procedimiento administrativo es un trámite particular de la administración pública, a la que se ha asignado la aptitud de excepciones, poderes y tramites puestos al servicio de la jurisdicción, el procedimiento administrativo cuenta con dos sujetos llamados activo y pasivo, teniendo en cuenta que el sujeto activo es la administración pública y el sujeto pasivo el administrativo, siendo el único interés la satisfacción plena del sujeto pasivo, otorgándole una mayor protección y ejerciendo un debido procedimiento hasta llegar a una decisión justa y favorable.

Según, Vives (2020), en lo referido a las consideraciones del procedimiento administrativo como consecuencia de la pandemia en el sector público, utilizo el enfoque cualitativo, obteniendo como muestra a servidores públicos, mediante el cual, afirmó que las consideraciones en el procedimiento abarcaron en concordancia con la interrupción de los plazos en vía administrativa y la suspensión de los términos de las entidades públicas, quedando interrumpidos hasta la reanimación de las actividades administrativas y la derogación del mandato legislativo, de tal manera, se prevaleció que, a pesar de la suspensión de plazos, se podrían presentar los escritos que fueran oportunos por orden administrativa por afectar a un derecho supremo.

Asimismo, Álvarez (2020), explico las lecciones del acto administrativo y procedimiento administrativo en la administración, tiene como objetivo principal, determinar la relación que existe entre el acto administrativo y procedimiento administrativo en el sistema público, asimismo, en su investigación realizada en los temas de la administración pública, siguió un enfoque cualitativo, utilizando como participantes a los trabajadores del sistema público, en ese sentido, sostuvo que el trámite administrativo es un conjunto de actuaciones o etapas procedimentales que inician de oficio o de parte hasta llegar a una decisión final de la administración, ya sea favorable o no para el ciudadano, otorgándole la facultad de contradecir dicho pronunciamiento con la nulidad de puro derecho, cuando contravienen la legalidad de las normas o incompetencia de la administración, esto

se evidencia en todas las clases del procedimiento administrativo español.

Montero (2020) en el trabajo de investigación relato las transformaciones que ha ocurrido en el derecho administrativo, obteniendo como objetivo principal analizar el procedimiento administrativo como ente regular de los derechos procedimentales y el impacto tecnológico que impone al derecho administrativo, utilizando para ello un enfoque cualitativo, y para la muestra clasificó a sujetos involucrados en el estado y personas intervinientes al estado; por lo que, concluyó que para garantizar los derechos procedimentales del individuo es necesario destacar el interés general colectivo, producto de una buena acción administrativa que favorece a la colectividad y beneficia al particular, cabe resaltar que con la tecnología se ha evidenciado un mejor manejo de herramientas y mayor celeridad los procedimientos y actuaciones administrativas canalizando una eficiente conducta a la población; sin embargo, con los hechos ocurridos a causa de la pandemia ha ocasionado una inestabilidad emocional e incertidumbre por la ausencia de información de los procedimientos inmersos ante la entidad del estado.

Según, Dromi (2018) en relación a la regulación del procedimiento administrativo en la sede judicial y administrativa, en su artículo de revisión utilizó el método analítico, donde recopiló fuentes relacionados al tema para enfatizar su estudio, asimismo, los participantes fueron personas del fuero administrativo y judicial; en la cual, sostuvo que el procedimiento administrativo está compuesto por reglas y principios que conducen la intervención de los interesados y la acción administrativa estatal y no estatal, respetando las garantías procedimentales a un trámite justo y favorable, de esa manera otorgando satisfactoriamente la tutela procesal y la legalidad del proceso, obteniendo una relación con la conformación del proceso a los recursos impugnatorios, así como el proceso contencioso administrativo, una de las fases del procedimiento administrativo en el derecho administrativo argentino.

De acuerdo, a lo descrito se evidencia que, en los países latinoamericanos ejercen una misma cultura administrativas en la estructura y funcionamiento del estado, así como en los procedimientos, actos, sujetos administrativos y validez del

acto administrativo; con la excepción que referente a la tecnología es avanzando en su totalidad, precisando que los países tratados la mayoría de procedimiento es digitalizado y virtualizado, generando con ello la comodidad de los administrados y del estado para tramitar con mayor facilidad las solicitudes a petición de parte o de oficio.

Las bases teóricas en el presente trabajo de investigación, se ha fundamentado al desarrollo de los aspectos generales al tema, en la cual está compuesta por grupo de conceptos y propuesta que forma parte de un enfoque determinado, abocado a explicar el problema planteado; es así, que en el presente caso en específico, se va a analizar y explicar la categoría del procedimiento administrativo, la cual tiene como concepto del procedimiento administrativo, que es la estructura y lineamientos que rige en la administración pública para cualquier tipo de trámite que se desarrolla en las entidades, en las cuales están contemplados deberes, derechos, obligaciones y responsabilidades, ya sea, de la administración y administrados (Morón, 2018); asimismo, según Napuri (2019) señaló que el procedimiento administrativo, es muy claro, dado que se intenta constituir un sistema normativo aplicable, a efectos que las actuaciones o respuestas del estado, sirva para resguardar el interés global, buscando de esta manera asegurar los derechos e intereses de los administrados, y con el respaldo del ordenamiento constitucional y jurídico respectivamente.

Al respecto, debemos tener en consideración, que el trámite en los procedimientos administrativos, es la función del estado en el ámbito netamente administrativo, que se expondrá a través del sistema administrativo, y generando con ello, un método en las atapas procedimentales, con la finalidad de obtener respuesta por parte de la administración (Gordillo, 2016).

Es importante señalar, que para el autor Maraví (2017), existe dos clases de procedimientos administrativos en el sistema peruano y dentro del marco normativo de la Ley N° 27444, las cuales son: procedimientos administrativos de evaluación previa y aprobación automática, las cuales regulan procedimientos y efectos diversos, respectivamente. Sin embargo, la finalidad es la misma, obtener respuesta de la administración, sea favorable o desfavorable, siendo en ambos casos, el

ejercicio de la contradicción en la decisión de la administración, asimismo, Paniagua (2017) precisó que las dos clases del procedimiento administrativo, son las más comunes y usados en el sistema administrativo, puesto que intervienen el estado y el sujeto pasivo para determinar la existencia del procedimiento administrativo con la finalidad de seguir un procedimiento hasta obtener respuesta del mismo; sin embargo, señala que existe un procedimiento atípico la cual es el procedimiento trilateral, donde intervienen una persona natural, persona jurídica y el estado.

Asimismo, según Dragos (2016), delimitó al procedimiento administrativo como uno de los mecanismos más importante en el sistema administrativo, puesto que, con ello, inicia las actividades administrativas y finaliza con un acto administrativo, a cual versa en la decisión del estado, empero, Epstein (2016) optó por una postura atípica a los mecanismos del procedimiento administrativo, indicando que la perspectiva administrativa se generaliza sobre actuaciones prudente de forma inmediata y efectiva por parte del estado, también, Hert y Boulet (2016) señalaron que la teoría del procedimiento administrativo debe ser de forma concreta, practica y sencilla tanto para el estado y sujetos intervinientes, consistiendo en tipos de procedimientos a efectos que obtengan una característica peculiar y obtengan un mismo resultado.

Al respecto, en cuanto a la primera sub categoría compuesta por la primera clasificación es el procedimiento de evaluación previa, en la cual se evidencia que son procedimientos extensos, complejos y con etapas; por lo que, que comienza con la solicitud de parte del administrado, revisión del expediente, subsanación de algunos requisitos de forma o de fondo (en caso amerite), evaluación de los medios probatorios y el pronunciamiento de la autoridad administrativa, este procedimiento no debe exceder del plazo de los 30 días hábiles, por regla general, salvo que existan excepciones a las reglas por normas específicas de la especialidad, así como, están sujetas al silencio administrativo (Morón, 2019), así también, Mamani (2018) indicó que la evaluación previa, requiere de un estudio y análisis de la pretensión, a efectos de verificar y formular informes técnicos y/o legales en base a la procedencia de la presentación plantada por las administrados, con la finalidad de brindar respuesta y/o pronunciamiento por parte de la administración dentro del

plazo de 30 días hábiles, del mismo modo, sujetas al silencio administrativo; por otro lado, Guzmán (2016) sostuvo la teoría de que el procedimiento de evaluación previa, tiene que ser resuelta específicamente en un plazo legal establecido, puesto que la ausencia de respuesta de la administración genera un perjuicio gravemente al sujeto participante al procedimiento, ya que, lo que busca es la inmediatez de la solución a su petición, y que el mismo debe proteger al principio de presunción de veracidad y celeridad en los procedimientos administrativos, para el otorgamiento de algún derecho, beneficio o bonificación.

En relación al procedimiento de evaluación previa sujeta al silencio administrativo, Cassagne (2017), señaló que, la teoría general del silencio administrativo, es la omisión de respuesta por parte de la administración pública, esto es, que al haber transcurrido el plazo máximo de 30 días hábiles, y los administrados no obtuvieron respuesta alguna, aquel, se encuentra facultado para presentar la resolución ficta por haber operado el silencio administrativo, clasificado en el silencio administrativo positivo (SAP) o silencio administrativo negativo (SAN), de acuerdo a lo establecido en el texto único del procedimiento administrativo; por otro lado, Paredes (2016) definió al silencio administrativo, como la no manifestación pertinente voluntaria por parte de la entidad, esto es, guardar silencio ante la solución de una pretensión manifiesta y generando una declaración ficta a lo petitionado; ante este supuesto, la ley concede una protección momentánea ante este suceso que se encuentren fuera del plazo legal, es la solución de la pretensión mediante resolución ficta, a efectos de salvaguardar la celeridad y eficacia en el proceso sobre las actuaciones administrativas, puesto que constituye una medida de sanción para los servidores o funcionarios cumplan con su función dentro de los parámetros y lineamientos establecidos por ley; así también, Jiménez (2017) sostuvo que la teoría del silencio administrativo es para garantizar el derecho que corresponde a la persona, producto del retraso del pronunciamiento de la entidad, es así, que lo clasifica en silencio positivo y negativo, la primera se aplica en la acción de dar y hacer en relación a los intereses colectivos, siendo el efecto el otorgamiento de lo petitionado sin contar con la viabilidad del propósito lícito, el segundo se aplica en todas las peticiones de los administrados, empero, surte

efectos negativos, quiere decir, que no se le otorga ningún tipo de derecho, más bien, es una acción para la apelación ficta.

Por otro lado, en lo referido a los artículos en inglés, Kopylova (2017) refirió que el procedimiento inmerso a una evaluación o verificación debe ser clasificado de acuerdo a la materia y a la complejidad de la misma, a efecto que la institución pueda analizar e interpretar los hechos para brindar una buena solución al caso, Kremenchuk (2016) quien advirtió que los tipos del procedimiento administrativo, deben allanarse a las necesidades de la administración y personas involucradas, de acuerdo a los principios administrativos, efectuando una evaluación por los casos presentados en el trámite administrativo y conllevando a una interpretación idónea para emitir una respuesta satisfactoria a los involucrados, de esta manera, Merume et al. (2016) establecieron teorías sobre la ausencia de la respuesta de la administración, llamado en nuestro sistema silencio administrativo, sostuvieron que la organización estatal de administración y gestión, orienta las regulaciones para controlar el sistema administrativo de forma sistemática vinculada, asimismo, atender en el plazo correspondiente el derecho otorgado a los sujetos.

En la segunda clasificación es el procedimiento de aprobación automática, en la cual son procedimientos básicamente sustentados en la presunción de veracidad, donde el pedido del administrado se considera aprobado por el solo hecho de la presentación, a condición de haber cumplido con adjuntar a cabalidad los medios probatorios que sustenten su solicitud, a efectos de evidenciar documentalmente los requisitos establecidos en el texto único de procedimientos administrativos de cada entidad, con la finalidad de obtener el acto administrativo por parte de la administración, sujetas a una fiscalización posterior por la naturaleza expuesta, es así que se puede manifestar algunos ejemplos de procedimientos de aprobación automática: licencias, permisos y autorizaciones (Linares, 2016), así también, Rojas (2016) precisó que el procedimiento de aprobación automática son procedimientos de mero trámite administrativo que se aplica a pedido de parte por el usuario, puesto que instantemente es aprobado por el estado, cumpliendo con los requisitos establecidos en los lineamientos de cada entidad, en mérito al principio de veracidad; sin embargo, aquel procedimiento no queda ahí, sino está

sujeta a una fiscalización o control posterior, en virtud a la verdad material, cuya función de la administración es supervisar y vigilar el objetivo de la pretensión del pedido y el fin lícito del procedimiento aprobado automáticamente, a su vez, asimismo, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2018) expresó que la aprobación automática, es que con la sola presentación del escrito se da por procedente la pretensión a favor del particular o interesado, en mérito al principio de veracidad, se entiende, que toda documentación presentada por el administrado es verídica y legalmente establecida por ley; sin embargo, están sujetas a la fiscalización o control posterior, esto es virtud al principio de verdad material, la cual se define como la corroboración y verificación de todos los documentos sean con fines lícitos y los hechos concretos sean de acuerdo al interés común, caso contrario, acarrea la nulidad de pleno derecho.

En consecuencia, la teoría de la fiscalización posterior, también llamado control posterior, está a cargo de la administración, la cual tiene como función supervisar y comprar si el procedimiento se ha efectuado de acuerdo a los parámetros establecidos en la norma, en base al principio de verdad material, sin objetar la presunción de veracidad en la documentación presentada, así como, corroborar si cumple con la finalidad del acto administrativo (Cabrera, 2018).

Según, Tovar (2020) señaló en que ambos procedimientos, están sujetas a fiscalización posterior, en la evaluación previa, cuando se aplica el silencio administrativo positivo, la fiscalización posterior o el control posterior, es también unos de los principios de la ley del procedimiento administrativo general, puesto que, vincula en todos los ámbitos de procedimiento, sistematizando la comprobación de la veracidad de la información presentada por los administrados, en cumplimiento con la normatividad sustantiva, a efectos de aplicar las sanciones respectivas, en caso de incumplimiento. Esto es, la facultad que tiene la autoridad administrativa para fiscalizar o supervisar el cumplimiento de la veracidad de los documentos, funciones y normas que conllevaran a aprobar dicha decisión producto de un procedimiento de aprobación automática y evaluación previa, en caso del silencio administrativo positivo. Así como, Ponce (2017) indicó que la fiscalización posterior es un método de verificar y supervisar la finalidad del acto administrativo,

que cumpla con la licitud de la ley, sin recurrir a vicios ocultos que acarreen la nulidad o que incurran en actos pasibles de sanción administrativa, siendo netamente esa función fiscalizadora de la administración pública hacia el particular. Por lo expuesto, tal como expresan los autores, el procedimiento administrativo está compuesto por un conjunto de actuaciones encaminado a desarrollar una decisión por parte de la administración pública; dentro de aquella agrupación, puede existir actuaciones administrativas aludidos al trámite que se desarrolla internamente y actos administrativos como las resoluciones, que establezcan dictámenes de la autoridad administrativa, y que se clasifican en procedimiento de evaluación previa y aprobación automática, obteniendo en cada una de ellas la misma finalidad, que es esperar la decisión final de la autoridad administrativa, sujetas a fiscalización posterior producto del silencio administrativo, con el objetivo de sancionar y penalizar las desviaciones, abusos y fraudes.

De la misma manera, respecto a los artículos en ingles se tiene a Prieto (2016) quien al detallar el procedimiento administrativo analiza el estudio de las casuísticas propiamente dicha, en la cual la clasifican de forma rápida para una evaluación y pronta respuesta del órgano estatal a las personas que participan en el procedimiento, en igual sentido, Van (2020) afirmó que resulta evidente las falencias obtenidas del sistema y procedimiento administrativo desde una perspectiva sustantiva en consecuencia de la coyuntura social de pandemia, por temas de demora e implementación en los tramites de casos hasta la demora del mismo.

Ahora bien, el estado de emergencia se define por Rubio (2016) indicó que el estado de emergencia es una regla excepcional al estado común que todos los individuos conocemos; aquella decisión es amparada y regulada por la carta magna de nuestro país, la constitución política brinda al estado medidas extraordinarias ante hechos imprevistos e irrecurribles en el territorio del Perú, en este caso específico, el coronavirus, a efectos de que realicen o efectúen medidas preventivas y/ correctivas al libre desarrollo común de la sociedad e implementar mecanismos coadyuvantes de la convivencia colectiva sanitaria.

Aunado a ello, Ruiz (2017) señala que la proclamación de un estado de excepción se subordina del estudio de caso concreto en específico por parte de la autoridad competente; el referido estado de excepción, por su particularidad de origen, es una determinación normativa y política aplicada como un dispositivo de última ratio, dado que la competencia, de un sistema jurídico, es predecir las condiciones de enfrentamiento social y brindar solución, con un ambiente de normalidad; cabe precisar, que este mecanismo de estado de emergencia debe ser empleado de manera excepcional y en casos extremos.

En la actualidad, el nuestro sistema peruano, el estado de emergencia declarado por el poder ejecutivo, fue producto de la pandemia del coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud (2020), es una afección causada por el nuevo virus denominado coronavirus conocido también como SARS-CoV-2, en los primeros tres meses del año 2019, se conoció el primer caso del coronavirus en nuestro país, y como consecuencia se aplicó el estado de emergencia nacional encontrándose vigente hasta la actualidad, ya que, se evidenciaron más personas contagiadas por el nuevo virus, estando hoy en día en la segunda ola de la pandemia.

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

Sobre el particular, se debe precisar que el presente estudio tuvo un enfoque cualitativo, puesto que la realidad no fue manipulada y cuya finalidad estuvo enmarcada en la recopilación de mayor información, por lo que es necesario mencionar a Hernández et al. (2018) quien señaló que el enfoque de naturaleza cualitativa se encuentra encaminada a estudiar la realidad en su entorno natural, produciendo la interpretación de hechos que se van a relacionar con los participantes de dicho contexto.

En esta investigación se utilizó el método inductivo, en la cual Garcés (2000) indicó que, consiste en aplicar los conceptos teóricos que se muestran como de

carácter científico en la justificación intelectual del fenómeno que se estudia, a partir de la individualización de la casuística se concluye en términos generales sobre el tema ha investigado, esto es, se inicia a partir del espacio al género.

Al respecto, la presente materia de investigación fue de tipo básica, de acuerdo a CONCYTEC (2018) va a facilitar que se logre mayores conocimientos y un adecuado entendimiento de los fenómenos que se inician en la sociedad, esto a través de la descripción y explicación en tiempo y espacio de dicho fenómeno; sin embargo, aquel no genera una solución a las que ya están vigente.

Asimismo, en el presente estudio se utilizó el diseño fenomenológico, que conforme a lo señalado por Fuster (2019) este se sustenta en las experiencias de los individuos, lo cual produce diversas interpretaciones de la realidad, en otras palabras, el motivo del citado tipo de diseño es explorar, describir y entender las vivencias de los agentes participantes respecto de algún fenómeno y además encontrar los elementos en común que puedan advertirse de las mencionadas experiencias, por lo que, además, el citado autor señaló que el instrumento idóneo para recolectar la información es la entrevista.

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización.

Las categorías y subcategorías en la investigación cualitativa, según Arbaiza (2013) precisó que las categorías es el fenómeno de la investigación, considerada como análisis de estudio, previo a una identificación de unidad de análisis; a efectos de construir las subcategorías, que surge a partir del estudio profundo de las categorías, con ello permite analizar algunas precisiones más específicas que se relaciona directamente al tema de investigación y que se coadyuvan con la recolección de información en el campo.

Respecto a la presente investigación, se planteó como primera categoría al procedimiento administrativo, la cuales cuyas subcategorías fueron: i) Primera subcategoría. - Evaluación previa, ii) Segunda subcategoría. - Silencio administrativo, iii) Tercera sub categoría. - Aprobación Automática y iv) Cuarta sub categoría. - Fiscalización posterior.

Tabla 1*Categorías y subcategorías*

Categoría	Definición
Procedimiento Administrativo	Según, a los participantes, se define que el procedimiento administrativo, es un conjunto de actos y actuaciones administrativas, donde participan la administración y administrados, regulada por una normativa base, que tiene como finalidad atender las solicitudes de manera oportuna y eficiente, otorgándole al administrado una respuesta a su pedido, ya sea favorable o desfavorable.
Subcategorización	Definición
Primera subcategoría	
Evaluación previa	Es una de las clasificaciones del procedimiento administrativo, que es producto de una evaluación más exhaustiva y compleja, que está compuesto por etapas a efectos de llegar a una decisión final de respuesta al administrado, no puede exceder el plazo de mayor de 30 días hábiles.
Segunda subcategoría	
Silencio administrativo	El Silencio administrativo es aplicable para el procedimiento de evaluación previa, cuando excede el plazo de 30 días hábiles, puesto que es la ausencia de pronunciamiento por parte de la administración, esto puede ser silencio positivo y negativo, cada uno de ellos regulado en el tupa y en la ley.
Tercera subcategoría	
Aprobación automática	Este procedimiento, es uno de los más sencillos y comunes, dado que versa en la sola presentación de la solicitud del administrado para aprobar la misma, está basada en el principio de presunción de veracidad, por lo que, se presume que toda documentación presentada es verídica, cuya

finalidad es obtener respuesta favorable a la petición, sujetándose en lo sucesivo a una fiscalización.

Cuarta subcategoría	Es un mecanismo de verificación ante el
Fiscalización posterior	procedimiento de aprobación automática, puesto que se encarga en supervisar y verificar si los hechos expuesto en aquel procedimiento es verídico, sustentándose en la verdad material, a efectos de comprobar que la aprobación al procedimiento cuenta con fin lícito, caso contrario, pasible de nulidad.

Fuente: elaboración propia

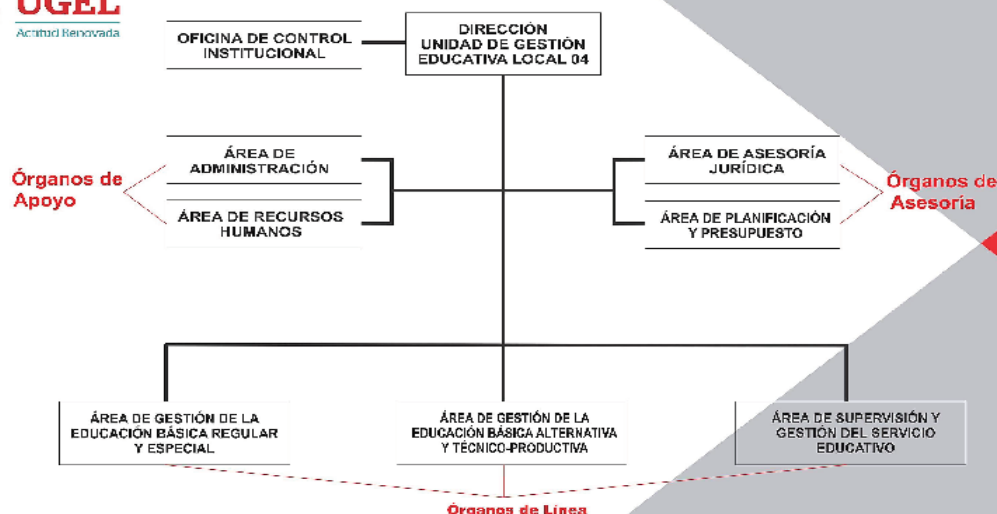
3.3. Escenario de estudio

Sobre el escenario de estudio, Carrasco (2009) refirió que, en el proceso cualitativo, lo compone un grupo de personas, acontecimientos, sucesos y circunstancias, mediante el cual se utiliza para recolectar los datos, sin la obligatoriedad de ser estadísticamente representativo del universo o población que se analiza.

Se debe acotar, que el escenario de estudio se desarrolló en las oficinas administrativas de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 – UGEL.04 sito en la Av. Maestro Peruano 416 del distrito de Comas, escenario en el cual los entrevistados alegaron sus conocimientos en merito a las posturas y opiniones, bajo su alta gama de experiencia como servidores administrativos de los órganos de apoyo, línea y asesoramiento, las cuales están conformadas por: las Áreas de Administración, Supervisión y Gestión del Servicio Educativo, Recursos Humanos y Asesoría Jurídica.

Figura 1.

Organigrama de la ugel.04



Fuente: elaboración propia

3.4. Participantes

Es la caracterización de los sujetos participantes, que radica en determinar quiénes son los sujetos o participantes de los hechos o acontecimientos, las especificaciones de los participantes, prototipo, formas, conductas, patrones, etc (Abanto, 2014).

Al respecto, el criterio de elección de los participantes en el presente trabajo de investigación, fueron por expertos, a efectos de generar resultados más profundos y precisos en la materia (Behar, 2008), motivo por el cual, se recurrió a unas 6 personas especialistas en los procedimientos administrativos, pues se consideró que eran participantes idóneos para abordar temas del procedimiento administrativo, las clasificaciones y sus efectos.

En ese sentido, los participantes fueron escogidos por el grado de especialización que implicaba el presente tema de estudio, por lo que, se eligieron a 03 servidores públicos y 03 funcionarios públicos, de las profesiones abogado y administrador integrantes a las oficinas administrativas,

administración, ASGESE, recursos humanos y asesoría jurídica de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 – UGEL.04 sito en la Av. Maestro Peruano 416 del distrito de Comas; en la cual se detalla el perfil de los participantes.

Tabla 2

Caracterización de participantes para el trabajo de investigación

Participantes	Genero	Profesión	Cargo
P1	Masculino	Abogado	Jefe del Área de Asesoría Jurídica de la UGEL04
P2	Masculino	Abogado	Secretario Técnico de Servir de la UGEL04
P3	Femenino	Abogada	Abogada del Área de Asesoría Jurídica
P4	Masculino	Abogado	Jefe (e) del Área de Recursos Humanos de la UGEL.04
P5	Femenino	Administradora	Responsable de Trámite Documentario y Archivo de la UGEL.04
P6	Masculino	Administrador	Coordinador del Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo de la UGEL04

Fuente: elaboración propia

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Según, Sánchez (2018) con respecto a las técnicas de recolección de datos señala que, es el conjunto de método que permite la ejecución del recojo de información, con rapidez y fortaleza, permitiendo el manejo, la identificación y categorización de las fuentes de investigación; es así que, Del cid, Méndez y

Sandoval (2007) refirieron que, éste procedimiento por sus características y origen práctico acude a causas secundarias.

En ésta investigación se aplicó la técnica de recojo de información, las cuales fueron: i) la entrevista, al respecto Ñaupas, Novoa y Villagómez (2013) señalaron a una conversación formal entre el sujeto investigador y el que brinda la información, consta en un interrogatorio expresado, con la finalidad de comprobar la teoría del estudio; el objetivo de la información es la comparación con la práctica y lo expuesto en el marco teórico y, ii) Análisis documental, mediante el cual ayudó a conseguir mayores datos aplicados a la realidad y además permitiendo la discusión con la obtención de información derivada de la aplicación de la entrevista.

Asimismo, el tipo de entrevista que se utilizó fue la entrevista semiestructurada, puesto que las preguntas de la guía de entrevista estaban preparadas y programadas, con preguntas abiertas, a efectos que el participante pueda profundizar la interrogante, precisar que, en este tipo de entrevista se puede obtener una mejor información y analizar el problema de investigación, realizando preguntas precisas para el resultado sea fiable.

En lo referente al instrumento empleado, se usó la guía de entrevista que consta de 9 preguntas abiertas correspondiente a la categoría y subcategorías que construyeron el tema materia de investigación, dirigidas a los entrevistados, las cuales fueron servidores y funcionarios públicos, abogados y administradores de las oficinas administrativas y legales, y guía de análisis documental, a través del cual se realizó un análisis de la información obtenida de las teorías que ayudaron a respaldar la determinación de los objetivos de investigación.

Se debe acotar, que las entrevistas fueron efectuadas en las oficinas administrativas de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 – UGEL.04 sito en la Av. Maestro Peruano 416 del distrito de Comas, asimismo, se precisa que pese a la pandemia causada por el COVID-19, se tuvo algunos inconvenientes, dado que algunos servidores y/o funcionarios de las oficinas administrativas públicas laboran de manera remota y mixta; sin embargo, dichas oficinas

administrativas accedieron a brindar respuesta a la entrevista, materia del presente estudio, de manera presencial, para ello previamente se coordinó la realización de la mismas, con los protocolos de bioseguridad las entrevistas se realizaron en los ambientes propios de las oficinas administrativas.

3.6. Procedimiento

Según, Abela (2007) el procedimiento en la investigación cualitativa, implica en conformar una serie de tareas u operaciones que establece el proceso de análisis de estudio, con la finalidad de aportar consejos, recomendaciones y advertencias para la presentación de información de datos y para la procedencia de las conclusiones.

En el presente trabajo de estudio, se realizó una adecuada labor de campo, en principios se efectuó coordinaciones por medios telefónicos con los entrevistados, emplazando del conocimiento de la naturaleza de la recolección de la información y el objetivo de la misma, en relación al impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional; posteriormente al haber coordinado y determinado una fecha establecida se efectuó la visita física a las áreas y/o oficinas administrativas de asesoría Jurídica, administración, recursos humanos y ASGESE, concretándose la entrevista adecuadamente, brindando información bajo sus conocimientos administrativos y jurídico y sus experiencias en la esfera del procedimiento administrativo en el sector público.

Al respecto, el procedimiento de la recolección de datos se realizó a través de las entrevistas, a los participantes expertos en la materia, esto es, a los servidores y funcionarios de la UGEL04, y de forma presencial, es así que, la guía se elaboró de acuerdo con la matriz de objetivos y categorías de la variable del impacto del procedimiento administrativo, además que se agregó el objetivo de realizar la entrevista y la cláusula de confidencialidad

3.7. Rigor científico

De acuerdo como lo señaló Sandín (2003) el rigor científico es aquella relación de las interpretaciones, con ello se verifica la similitud entre credibilidad y aplicabilidad, esto es, permite que los resultados del estudio sean idóneos y verídicos, en consecuencia, el instrumento de recolección de datos aplicado a la presente tesis se caracterizó por tener coherencia y relación con los problemas de estudio, lo cual permitió a los entrevistados tener confiabilidad de las preguntas propuestas. Asimismo, el desarrollo de la investigación fue estructurada conforme a las normas APA, en cuanto a las citas de autores, así como las entrevistas fueron dirigidas a personas especializadas en materia del sistema administrativo.

La Validez, en la investigación cualitativa está basada en la adecuada presentación de las construcciones mentales que los participantes en la investigación ofrecen al investigador; es decir, que el instrumento logre reflejar aquello que con la categoría se pretenda analizar (Cortes, 1997).

De esta manera, la credibilidad, es cuando el investigador percibió el profundo y completo significado de las experiencias de los participantes, por lo que, se comprendió el lenguaje, a efectos de poder brindar claridad en la interpretación de datos. (Hernández et al., 2014); en base, a la transferibilidad, intenta usar evidencia para comprender el fenómeno de estudio de otros panoramas para establecer métodos que permitan la investigación futura, en ese sentido, la presente investigación puede coadyuvar de referencia para diversas instituciones públicas de estado interesados en dicho tema y contexto, además, los resultados nos servirán a comprender y brindar un panorama específico de los participantes de la UGEL 04. (Valderrama, 2002).

En ese sentido, la confiabilidad, se puede conseguir ya que generalmente los investigadores, para confirmar los hallazgos y revisar algunos datos particulares, vuelven a los informantes durante la recolección de la información, asimismo, permitió al investigador captar el completo concepto de las experiencias de los participantes, así como, el lenguaje, las emociones, el pensamiento, y punto de vista de los participantes. (Catillo y Vásquez, 2003).

Por lo expuesto, se indica que las confiabilidades de los hallazgos se encuentran contratados en el análisis documental, tal como se encontraron plasmados en los resultados de la presente investigación, en la cual, se citó las normas emergentes dictadas por el gobierno, respectivamente al marco del procedimiento administrativo en estado de emergencia, el texto único ordenado de la Ley N° 27444 y la directiva aprobado por la Autoridad nacional del Servicio Civil – Servir.

3.8. Métodos de análisis de datos

Salgado (2007) refirió respecto al método de análisis de datos, que este consiste en un tratamiento de análisis en evolución en investigación cualitativa conformado por tres momentos, las cuales son, descubrimiento, codificación, y relativización, estas están dirigidas en buscar el desarrollo de una comprensión en profundidad de los escenarios.

Al respecto, en la presente investigación cualitativa, en la cual la característica sustancial resulta la recolección de información de una población determinada de entrevistados conocedores en la especialidad del sistema administrativo, al contexto, la evaluación y análisis de la información recabada se ha utilizado los siguientes métodos.

Según, Hernández et al. (2018), el método de análisis de datos, en la presente investigación fue descriptivo, el mismo que viabiliza el desarrollo de las posturas de los entrevistados y de los autores citados y mencionados en el marco teórico, permitiendo la explicación de la tesis adoptada sobre nuestro objetivo.

Asimismo, el proceso de triangulación es una técnica de análisis de datos, que tiene como finalidad de analizar un mismo fenómeno a través de distintos acercamientos, y que el mismo arroja distintos resultados, con el objetivo de este proceso nos brinda un panorama más amplio en cuanto a la interpretación del fenómeno en investigación. Okuda (2005).

3.9. Aspectos ético

La presente labor de estudio obedeció a toda formalidad y rigor científico que obliga la sociedad académica científica, las fuentes bibliográficas, artículos

científicos, tesis nacionales e internacionales, tienen la debida citación conforme a las normas internacionales sobre las referencias bibliográficas, que emplean las normas APA (7° edición), la recolección de información en el campo es auténtica y fiable por el empleo de las técnicas e instrumentos de recolección, por ello, se cumple a cabalidad con los criterios de credibilidad, transferibilidad y confortabilidad.

También indicar, que los entrevistados en esta investigación se puso en conocimiento el propósito de la investigación, asimismo, para cumplir con la formalidad se requirió en obtener el consentimiento informado a los entrevistados para participar en el presente estudio, con la finalidad de asegurar la confidencialidad de los participantes (Hernández et al., 2014).

En el presente trabajo se ha respetado los derechos de autor de todas las fuentes citadas, siendo esta la utilización de las normas APA séptima edición, así como los lineamientos de la universidad. De igual modo, la investigación corresponde a la originalidad del autor, sin la intervención de terceras personas en la redacción del trabajo de investigación, concluyendo que los aspectos éticos se tomaron en cuenta para el desarrollo del trabajo, respetando lo enunciado por los autores, citados en el presente trabajo de investigación.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al respecto, los resultados de las entrevistas, se efectuó la entrevista, como medio instrumental para recabar los aportes informativos de los 06 participantes expertos en materia de procedimiento administrativo y sistema administrativo, conformado por servidores y funcionarios públicos de las oficinas administrativas de la UGEL N° 04, los cuales en base a sus conocimientos y experiencias particulares de sus labores han contribuido mediante sus respuestas; los resultados se han dado de conformidad a la formulación realizada en base a la categoría y sub categorías, acorde al objetivo general recaído sobre analizar el impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

En tal sentido, acorde con el objetivo general en la presente investigación realizada en la UGEL N° 04 de analizar el impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional.

Es así, de los resultados de las entrevistas se sustenta que todos los expertos han sostenido que el procedimiento administrativo materia de estudio ha sufrido un gran impacto producto del estado de emergencia nacional, en lo que corresponde a la implementación y reforma de los recursos tecnológicos y humano, así como, la suspensión de plazo, y la virtualidad en los procedimientos, y la validez de los actos administrativos, así como, el nuevo comienzo del panorama digital, en todo el sistema administrativo, en la cual el estado debe garantizar una adecuada y optimo recursos digitales a las unidades ejecutoras; de acuerdo a lo interpretado en las entrevistas se advertido nuevas categorías no previstas en la investigación, como por ejemplo, en lo que respecta a la implementación de recursos tecnológicos, se ha implementado la mesa de partes virtual, puesto que anteriormente no se encontraba vigente ni implementada, asimismo la firma digital, y en lo referido a la reforma de recursos humanos, se ha puesto en práctica el trabajo remoto y el teletrabajo, dado que anteriormente no exista o bien no se ponía en práctica, ya que, todos los procedimientos se desarrollaban presencialmente, desde la etapa del inicio del procedimiento hasta la conclusión del mismo, así también, los servidores

públicos se conducían a las oficinas de forma presencial, a efectos de realizar el trabajo físico de los procedimientos administrativos; claro está, que en la UGEL 04 aún no se cumple a cabalidad la implementación de los recursos tecnológicos, propiamente dicho, puesto que no se cuenta con los presupuestos necesario para la aplicación del mismo, al igual, que el trabajo remoto, ya que, también se necesita incremento de factor humanos y económico para que se efectué un buen servicio al ciudadano, acarreando con ello, que muchos actos administrativo no tenga validez, producto de la falta de firma digital. Sin embargo, en la actualidad se está realizando acciones para la implementación de todo el factor tecnológico y digital ante el ministerio de educación y ministerio de economía y finanzas, con la finalidad que los procedimientos cumplan con dicho fin.

De lo manifestado, se conduce con el Decreto Legislativo N° 1412 la Ley de Gobierno Digital, en la cual, mediante dicho marco normativo, dispuso a todas las entidades del estado, ya sea, gobierno central, regional o local, a la implementación de tecnologías digitales, esto se relaciona a las tecnologías de la información y la comunicación, siendo necesario un análisis de datos utilizados como el contenido digital, a efectos de aplicación a la materia de un nuevo gobierno digital, así como, el canal digital, donde se busca el contacto digital que disponen las entidades de la Administración Pública a los ciudadanos y personas en general para facilitar el acceso a toda la información institucional y de trámites, realizar y hacer seguimiento a servicios digitales. De la misma, manera la Resolución Ejecutiva N° 0039-2020-SERVIR-PE, la cual, aprobó la directiva para la aplicación de trabajo remoto, disponiendo que las entidades del Sector Público de diversos niveles de gobierno que desarrollan sus actividades de forma gradual, para lo cual adoptarán las medidas correspondientes para el desarrollo de las mismas y la atención a la ciudadanía, salvaguardando las restricciones sanitarias y el distanciamiento social, priorizando en todos los casos el trabajo remoto, implementando o habilitando la virtualización de trámites.

En lo que corresponde, al primer objetivo específico conformado por explicar el impacto del procedimiento de evaluación previa sujeto al silencio administrativo

durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020; en este punto, también la totalidad de los expertos han sostenido que, el mayor problema a este procedimiento es la prórroga de plazos, debido que por norma general el plazo para atender este tipo de solicitudes es de 30 días hábiles, y a causa de la pandemia y del estado de emergencia, estos plazos no se han cumplido, motivo a la deficiencia de implementación de recursos tecnológicos y humanos, así como la baja adaptaciones de los servidores a la virtualidad del trabajo remoto, generado con ello, los silencios administrativos, que tienen como efectos la apelación y la nulidad de los actos administrativos, en este casos, disponer la prórroga de plazos, aquella disposición se llevó de manera tardía por parte del estado, al decretar disposiciones donde suspendan o prorroguen los plazos establecido, en los procedimientos de evaluación previa, asimismo, la inaplicación del silencio administrativo producto a la coyuntura nacional y que el mismo ha generado implementación y reformas al estado, dado que esa implementación ha generado demora en los procedimiento de evaluación previa, generando la aplicación del silencio administrativo.

De lo expuesto, se conduce con el Decreto Supremo N° 076-2020-PCM donde se aprueba la prórroga al cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la citada norma, por el término de quince días hábiles contados a partir del 29 de abril del 2020; sin embargo, tal como señala la normativa, esta prórroga comienza a regir a partir de 29.04.2020, precisando que en un primer momento se decretó a partir del 15.03.2020, y en la cual se establecía inmovilización obligatoria, es decir, las restricciones para salir de los domicilios, siendo que no se podía asistir a laborar a las oficinas, puesto que tampoco, se podría brindar tramite a los expedientes, ya que, los expedientes se encontraban en físico en las oficinas. Por otro lado, el Texto Único de la Ley del procedimiento administrativo general en uno de sus articulados en los que respecta al procedimiento de evaluación previa, señala que el plazo máximo para brindar respuesta a dicho procedimiento es de treinta días hábiles sujeta al silencio administrativo.

Además, respecto al segundo objetivo específico, obtenido en explicar el impacto del procedimiento de aprobación automática sujeto a fiscalización posterior durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

De los resultados de las entrevistas, podemos afirmar que la mayoría de los expertos argumentan que el procedimiento de aprobación automática, se fundamenta en los principios del procedimiento administrativo, la cual es presunción de veracidad, donde se presume que toda documentación que presenta el administrado es verídico, y más aun encontrándose en el estado de emergencia, no contábamos con los medios y herramientas suficientes para realizar la fiscalización posterior, en merito a la verdad material; con la finalidad de brindar atención oportuna al administrado dentro del plazo legal, así también, se evidencia que el impacto a este procedimiento ha sido el mérito cumplimiento del principio de presunción de veracidad, así como, la inaplicación a la fiscalización posterior y a la inobservancia del principio de la verdad material, dado que a causa de la pandemia, los encargados de realizar la supervisión o fiscalización de manera presencial no podía recurrir a dichos centros educativos, establecimiento o instituciones que podrían proporcionar la información a efectos de corroborar la documentación presentada, cuenta con el fin lícito.

De lo manifestado, se conduce por el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, donde en su artículo 33° señala que los procedimientos de aprobación automática son aprobados automáticamente sin que la entidad se pronuncie, sin embargo, existe la posibilidad que dicho procedimiento requiera necesariamente de la respuesta de la administración, a efectos de hacer efectivo su derecho solicitado, en el plazo máximo de cinco días hábiles, y debiendo realizar la fiscalización posterior, asimismo, en el artículo 34° establece que la fiscalización posterior, está a cargo de la entidad, cuya finalidad es la supervisión y la verificación de los documentos o declaraciones presentados con el efecto de corroborar que los documentos son lícitos y que el mismo cumple con la finalidad

del procedimiento administrativo que ha sido pretendido, de la misma manera, es constatado con el Decreto de Urgencia N° 029-2020, en la declaran la medidas restrictivas para el inicio y la tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole que tengan que intervenir las verificaciones o supervisiones producto de la fiscalización posterior, los mismo que los plazos se suspenda, a efectos de evitar la propagación del virus covid 19 y de la inmovilización social obligatoria, esto quiere, decir que, mediante este decreto se suspendió las fiscalizaciones y supervienes posteriores de los procedimiento administrativos iniciados por aprobación automática, conllevando con ello, al retraso de la misma y generando con ello perjuicio al administrado y a terceros en caso, que se advierte la nulidad por vicios de la licitud del procedimiento.

En consecuencia, la discusión, conlleva a señalar que enseñanzas se aproximaron con el estudio y si los hallazgos sostuvieron o no, el conocimiento previo, además de proporcionar sustento a considerar.

En ese sentido, los resultados del objetivo general, respecto a analizar el impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

De acuerdo a los resultados del presente estudio de campo contrastado con los trabajos previos y marco teórico, se ha analizado que el impacto del procedimiento administrativo, en la cual ha sido notorio, puesto que en las etapas o procedimiento ha sufrido cambios, en lo que, respecto a la implementación de recursos tecnológicos y humano, suspensión de los plazos administrativos, la virtualidad de los servicios administrativos, la validez y eficacia del acto administrativo y las reformas digitales, observando también que existe una deficiencia en el sistema de implementación tecnológica, generando con ello, una atención tardía, inoportuna e inadecuada, que afecta los intereses colectivos de los administrados.

Por lo que, en estudio previo revisado se encontró que, este resultado coincide con el hallazgo de Santy (2020) respecto a los nuevos tratamientos de los procedimientos administrativos en tiempos de pandemia, donde ha despertado el

mundo digital, y se ha evidenciado deficiencias en los recursos tecnológicos por parte del estado, de la misma forma, por otro lado, Tirado (2020) y Valdivia (2017) afirmaron que los procedimientos administrativos empiezan de oficio, existiendo una serie de etapas y diligencias, con la finalidad de emitir un acto administrativo válido y eficaz, en busca de un buen servicio al administrado dentro del plazo; existiendo clasificaciones del procedimiento, esto es, evaluación previa y aprobación automática; así también, Pando (2018) indicó que los procedimientos de evaluación previa están inmersos a una revisión y tratamiento de la materia, siendo el plazo máximo para atender dicha solicitud 30 días hábiles, caso contrario se produce el silencio administrativo positivo o negativo, por la ausencia de pronunciamiento de la administración pública, y Villanueva (2019) precisó que el procedimiento de aprobación automática tiene como característica fundamental el principio de presunción de veracidad, aquella aprobación es siempre y cuando cumpa con los requisitos estipulados por ley en cada materia, estando sujetos a una fiscalización posterior, asimismo, Méndez (2019) postuló la antepuesta de los procedimientos administrativos es un trámite particular de la administración pública, a la que se ha asignado la aptitud de excepciones, poderes y trámites puestos al servicio de la jurisdicción, de igual forma, Vives (2020) advirtió que los procedimientos abarcan en concordancia con la interrupción de los plazos en vía administrativa, sin embargo, se prevaleció que, a pesar de la suspensión de plazos, se podrían presentar los escritos que fueran oportunos por orden administrativa por afectar a un derecho supremo, mientras que Álvarez (2020) precisó que el trámite administrativo es un conjunto de actuaciones o etapas procedimentales que inician de oficio o de parte hasta llegar a una decisión final de la administración, otorgándole la facultad de contradecir dicho pronunciamiento, Montero (2020) señaló que una buena acción administrativa, favorece a la colectividad y beneficia al particular, cabe resaltar que con la tecnología se ha evidenciado un mejor manejo de herramientas y mayor celeridad en los procedimientos, sin embargo, con los hechos ocurridos a causa de la pandemia ha ocasionado una inestabilidad emocional e incertidumbre por la ausencia de información de los procedimientos inmersos ante la entidad del estado.

Por otro lado, de acuerdo al marco teórico sobre el procedimiento administrativo ante la consecuencia del estado de emergencia nacional, Morón (2019) precisó que la finalidad del procedimiento administrativo es emitir respuesta al administrado, con las formalidades previstas en la ley, la validez del acto y que genere efectos jurídicos en favor al interés común, además Napuri (2019) reafirmo que el procedimiento administrativo debe ser regido por los principios de celeridad, razonabilidad y proporcionalidad a efectos de poder brindar una atención adecuada al administrado, y Chayña (2017), sostuvo que el procedimiento administrativo es el grupo de actos o actuaciones tramitadas en el sector público, orientado a la proyección del acto administrativo.

Al respecto a los resultados del objetivo específico 1, en lo que corresponde en explicar el impacto del procedimiento administrativo de evaluación previa sujeto al silencio administrativo fue la prórroga del plazo para el procedimiento de evaluación previa, asimismo la suspensión de plazos, a efectos que no cause perjuicio al administrado, dado por la coyuntura nacional que se está atravesando, ya que, aun no se contaba con la virtualidad de los expedientes, ni con la implementación de la modalidad de trabajo remoto, por lo que, no se cumplió con los plazos establecidos con el plazo establecido de los 30 días hábiles.

Dicho esto no concuerda con lo establecido, con Pando (2018) quien indico que los procedimientos de evaluación previa están inmersos a una revisión y tratamiento de la materia, siendo el plazo máximo para atender dicha solicitud 30 días hábiles, caso contrario se produce el silencio administrativo positivo o negativo, por la ausencia de pronunciamiento de la administración pública, tampoco coincide con, Guzmán (2016) quien señalo que, tiene que ser resuelta específicamente en un plazo legal establecido, puesto que la ausencia de respuesta de la administración genera un perjuicio gravemente al sujeto participante al procedimiento; sin embargo, Cassagne (2017) estableció que, la teoría general del silencio administrativo, es la omisión de respuesta por parte de la administración pública, esto es, que al haber transcurrido el plazo máximo de 30 días hábiles, se aplica el silencio, sin embargo, este plazo debe prorrogarse en el cómputo de plazo a causa de la pandemia.

En lo que corresponde al objetivo específico 2, es explicar el impacto del procedimiento de aprobación automática durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020, la cual, se explica que, durante el estado de emergencia nacional, no se ha estado efectuando la fiscalización posterior, porque, nos encontrábamos en inmovilización social obligatoria, dado que en la actualidad en forma progresiva se está efectuando la fiscalización posterior, en mérito al principio de verdad material, siendo uno de los efectos la nulidad, por no cumplir con el fin lícito o la ilegalidad de algunos de los requisitos; sin embargo, estos efectos se han paralizado en parte por motivo de la causa del distanciamiento social obligatorio, por lo que, es esencial prevalecer el principio de presunción de veracidad, motivo por el cual, debe efectuarse con celeridad y efectividad dichos procedimientos, el mismo que busca favorecer netamente al administrado, siempre y cuando se cumpla el fin lícito, con la fiscalización posterior.

Este resultado coincide con Linares (2016) precisó que son procedimientos básicamente sustentados en la presunción de veracidad, con la finalidad de obtener el acto administrativo por parte de la administración, sujetos a fiscalización posterior; sin embargo, por pandemia estas diligencias administrativas han sido paralizadas y suspendidas, efectuando otros tipos de tratamiento como es la virtualidad del acto, empero, Villanueva (2019) precisó que procedimiento de aprobación automática tiene como característica fundamental el principio de presunción de veracidad, aquella aprobación es siempre y cuando cumpla con los requisitos estipulados por ley en cada materia, estando sujetos a una fiscalización posterior, por su parte, Rojas (2016) indicó que el procedimiento de aprobación automática son procedimientos de mero trámite administrativo que se aplica a pedido de parte por el usuario, en mérito al principio de veracidad, encontrándose sujeta a una fiscalización o control posterior, en virtud de la verdad material, y en relación a la fiscalización posterior, mientras que, Cabrera (2018) sostuvo que, la administración tiene como función supervisar y comprobar si el procedimiento se ha efectuado de acuerdo a los parámetros establecidos en la norma, en base al principio de verdad material, así como, corroborar si cumple con la finalidad del acto administrativo.

V. CONCLUSIONES

- Primera:** De acuerdo, al objetivo general, del análisis del impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020 se concluye que, ha existido deficiencias en la implementación de recursos tecnológico y humanos, suspensión de los plazos administrativos, dilatación en la tramitación de los expedientes, invalidez del acto administrativo, virtualidad de los expedientes y activación de la firma digital, dichos factores han sido sustentados en distintos decretos supremos emitidos por el poder ejecutivo a consecuencia de la pandemia del covid 19.
- Segunda:** En relación al objetivo específico 1, se concluye que se ha explicado que el impacto al procedimiento de evaluación previa sujeto al silencio administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020, fue la prórroga de plazos administrativos y la suspensión de plazos administrativos, a efectos de prevenir la aplicación del silencio administrativo producto del incumplimiento de plazos de los treinta días hábiles, sustentado en el texto único ordenado de la ley N° 27444.
- Tercera:** En relación al específico 2, se concluye que se ha explicado que el impacto al procedimiento administrativo de aprobación automática sujeto a fiscalización posterior durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020, fue la prevalencia del principio de presunción de veracidad e inaplicación de la fiscalización posterior, dado que a causa de la pandemia, los encargados de realizar la supervisión o fiscalización de manera presencial se encontraban imposibilitados de recurrir a dichos centros educativos, establecimiento o instituciones que podrían proporcionar la información a efectos de corroborar el fin lícito.

VI. RECOMENDACIONES

- Primera:** A los servidores de la administración pública, que cumplan con el adecuado tratamiento de los procedimientos administrativos, a efectos de obtener un mejor manejo del sistema administrativo, por lo que, el estado debe garantizar y promover una eficiente implementación y reforma tecnológica, humana y administrativa a todos los sectores del estado, con la finalidad de obtener mejores resultados en los parámetros del mundo digital.
- Segunda:** Al estado debe emitir pronunciamiento más profundo en la prórroga de plazos, así como la suspensión de los plazos de treinta días hábiles en los procedimientos de evaluación previa, con medidas complementarias y extraordinarias, a causa del estado de emergencia nacional producto de la pandemia del covid-19, a efectos que no cause perjuicio a la administración y administrado.
- Tercera:** A la administración pública, buscar mecanismos alternos para brindar celeridad a los procedimientos de aprobación automática, que se están trabajando remotamente, así como, la implementación de medios virtuales o digitales a las intervenciones de fiscalización posterior, producto de la inmovilización social obligatoria, considerando el propósito principal la obtención del fin lícito en el procedimiento administrativo bajo sanción de nulidad, y a su vez, evitar la propagación del virus covid – 19.

REFERENCIAS:

- Abanto, W. (2014). *Diseño y Desarrollo del Proyecto de Investigación*. Trujillo: Universidad Cesar Vallejo.
- Abela, R. (2007). Evolución de la teoría fundamentada como técnica de análisis cualitativo. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/29615/1/T35974.pdf>.
- Arbaiza, L. (2013). *Como elaborar una tesis de grado*. Perú: ESAN Ediciones.
- Behar, D (2008). *Introducción a la Metodología de la investigación*. <http://rdigital.unicv.edu.cv/bitstream/123456789/106/3/Libro%20metodologia%20investigacion%20este.pdf>.
- Bernales, C. (2016). *Método de la Investigación*. (3.ed). Colombia: Person.
- Cabrera, S. (2018). *Teoría General del Procedimiento Administrativo*. Lima: San Marcos.
- Cassage, L. (2017). *Teoría del Derecho Administrativo – Silencio Administrativo*. Lima: Palestra.
- Carrasco, S. (2009) *Metodología de investigación científica: Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación*. Lima: Ed. San Marcos.
- Castillo, E y Vásquez, M. (2003). *El rigor metodológico en la investigación cualitativa*. <https://www.redalyc.org/pdf/283/28334309.pdf>.
- Chayña, C. (2016). *Estudio Analítico del procedimiento administrativo en el marco de vulnerabilidad del derecho a la defensa en la Municipalidad distrital de Paucarcolla en el año 2012*. (tesis de pre grado, Universidad Nacional de Antiplano). (Acceso el 10 de agosto de 2020).
- Constitución Política del Perú (1993). Lima: SPIJ.
- Concytec. (2018). *Reglamento de calificación, clasificación y registro de los investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica*. RENACYT.

https://portal.concytec.gob.pe/images/noticias/Propuesta_del_nuevo_Reglamento_del_investigador.pdf.

Cortés, G. (1997). *Confiabilidad y Validez en estudios cualitativos*. <Http://educacionyciencia.org/index.php/educacionyciencia/article/download/111/pdf>.

Del Cid, A., Méndez, R., y Sandoval, F. (2007). *Investigación, fundamentos y metodología*. México: PEARSON.

Dragos, D. (2016). *Administrative Procedure*. Center for Good Governance Studies, Babes Bolyai University, Cluj Napoca, Romania. https://www.researchgate.net/publication/304537646_Administrative_Procedure

Epstein, R. (2016). *The Role of Guidances in Modern Administrative Procedure: The Case for De Novo Review*. Spring Journal Articles: University of Chicago Law School, 8 (1). <https://bit.ly/3p0PtoH>.

Folgueiras Bertomeu, P. (2016). La entrevista. Universidad de Barcelona. <http://hdl.handle.net/2445/99003>

Fuster, D. (2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico, *Propósitos y Representaciones*, 7(1), 201-229. <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267>.

Garcés, H. (2000). *Investigación Científica*. Ecuador: Abya – Yala.

Guzmán, C. (2016). Manual del procedimiento administrativo general. <https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/03/Manual-del-Procedimiento-Administrativo-General-Christian-Guzm%C3%A1n-Napur%C3%AD.pdf>.

Hert, P., y Boluet, G. (2016). *The Coexistence of Administrative and Criminal Law Approaches to Data Protection Errors*. Law, Governance and Technology Series (LGTS, volumen 25). <http://bit.ly/3szuawF>.

- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2018). *Metodología de la investigación*. (8.^{va} ed.). México: McGRAW-HILL education.
- Jiménez, C. (2017). Los principios de impulso de oficio y verdad materia en el procedimiento administrativo. <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/2947>.
- Kopylova, E. (2017). *The Offence of Giving False Testimony under Solemn Declaration in the Rome Statute*. Crim Law Forum 28, 669–708 (2017). <https://bit.ly/2LMI6nw>.
- Kremenchuk, M. (2016). *Declaration the false information: analysis the structure of a crime*. <http://bit.ly/3oZjLZ1>.
- Linares, V. (2016). Régimen de invalidez del acto administrativo en la ley de procedimiento general. <https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/view/2334>.
- Maraví, F. (2017). Sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
- Marume, S. B., et al. (2016). *Theories and Theory of Public Administration*. Journal Of Humanities And Social Science, 21 (2), pp. 81-87. <https://bit.ly/3quRhq4>.
- Méndez, A. (2019). *Importancia de implementar un proceso administrativo único para la administración pública*. (Tesis de maestría). <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/6995/1/T3001-MDA-Mendez-Importancia.pdf>.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2018). Lima: SPIJ
- Morón, U. (2018). Comentarios a la ley del procedimiento administrativo general. https://drive.google.com/file/d/1Ptpy05Y8v_EZzhTu0-oMldSXj2N-5hue/view.
- Ñaupas, H., Mehía, E., Novoa, E. y Villagómez, A. (2013). *Metodología de la investigación científica y elaboración de tesis*. (3° ed.). Lima, Perú: Centro de Producción Editorial e Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos.

Organización Mundial de la Salud (2020).
<https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.

Okuda, G. (2005). Métodos de investigación cualitativas: triangulación.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502005000100008.

Paniagua, R. (2017). ¿Ley de Normas Generales de Procedimiento Administrativo o Ley General de Procedimiento Administrativo?.
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15372>.

Ponce, D. (2017). La actividad probatoria como parte del debido procedimiento en los procedimientos administrativos.
<http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/1448>.

Prieto, A. (2016). *The Proportionality Principle in a Broad Sense and Its Content of Rationality: The Principle of Subsidiarity*. Towards a Rational Legislative Evaluation in Criminal Law pp 263-294.
<http://bit.ly/2KuhXbf>.

Rojas, H. (2016). El debido procedimiento administrativo.
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/3147>.

Rubio, M. (2016). *Sistema jurídico, introducción al derecho*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ruiz, J. (2017). Análisis sobre la constitucionalidad de los estados de emergencia. Lima: Instituto de defensa legal.

Salgado, A. (2007). *Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos*.
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272007000100009.

- Sánchez, F. (2019). *Tesis desarrollo metodológico de la investigación*. (1° ed.). Lima, Perú: Ediciones Normas Jurídicas SAC.
- Sandín, L. (2003). *Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones*. http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S0798-97922005000300007&script=sci_arttext&tlng=e.
- Santy, L. (2020). *Tratamiento de los procedimientos administrativos como consecuencia del periodo de emergencia nacional por el brote del COVID 19*. URL: <https://prcp.com.pe/articulos-covid-19/>.
- SPIJ. (2019). *Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS*. http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/login.asp.
- Tirado, R. (2020). *Los efectos del procedimiento administrativo en tiempos de pandemia en las instituciones públicas*. (tesis de pre grado, Pontificia Universidad Católica del Perú). (Acceso el 12 de agosto de 2020).
- Tovar, R. (2020). *Proceso de elaboración de la ley procedimiento administrativo general*. <http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/1924>.
- Valderrama, S. (2002). *Pasos para elaborar proyectos y tesis de investigación científica*. Lima: San Marcos.
- Valdivia, W. (2017). *La motivación y el principio de licitud en las resoluciones sancionadoras del servicio de administración tributaria de Lima en las infracciones al transporte público de Lima*. (tesis de pre grado, Universidad Cesar Vallejo). (Acceso el 10 de agosto de 2020).
- Van, P. (2020). *Development of Public Administration and its Research in Slovenia through the Lenses of Content Analysis of the International Public Administration Review*. *International Public Administration Review*, 14 (1).

<http://bit.ly/3bTxlcx>.

Vinate, L. (2017). *La guía del procedimiento administrativo*. Lima: Gaceta Jurídica.

Vives, J. (2020). Algunas consideraciones sobre las consecuencias de la pandemia del COVID-10 en el Sector Público. <https://www.bdo.es/es-es/publicaciones/articulos/consecuencias-del-covid-19-en-sector-publico>.

Yarnol, L. (2020). La situación actual y el futuro del teletrabajo en el Perú. http://www.cielolaboral.com/wpcontent/uploads/2021/01/yarnold_noticias_cielo_n1_2021.pdf.

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Consistencia

Título: Impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020		
Problema General	Objetivo General	Categorías
¿Cuál es el impacto del Procedimiento administrativos durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020?	Analizar el impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020	Procedimiento Administrativo
Problemas Específicos	Objetivos Específicos	Sub Categoría
¿Cuál es el impacto del procedimiento de evaluación previa sujeto al silencio administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020?	Explicar el impacto del procedimiento de evaluación previa sujeto al silencio administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020	Sub Categoría 1 Evaluación previa Sub Categoría 2 Silencio administrativo
¿Cuál es el impacto del procedimiento de aprobación automática sujeto a la	Explicar el impacto del procedimiento de aprobación automática sujeto a la	Sub Categoría 3 Aprobación automática

fiscalización posterior durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020?	fiscalización posterior durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020	Sub Categoría 4 Fiscalización posterior
---	--	---

Anexo 2: Matriz de Categorías

Título: Impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020			
Problema General	Objetivo General	Categorías	Guía de preguntas
¿Cuál es el impacto del Procedimiento administrativos durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020?	Analizar el impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020	Procedimiento Administrativo	Preguntas generales: Funcionarios y/o Servidores de la UGEL.04. - ¿Cuál es el tratamiento del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional? - ¿Considera Ud. que existe una adecuada relación del procedimiento administrativo y las políticas públicas, en las unidades ejecutoras? Explique - ¿Cuál es la finalidad del procedimiento administrativo, y como contribuyo en la implementación y reforma de la Institución durante del estado de emergencia nacional?
Problemas Específicos	Objetivos Específicos	Sub Categoría	Preguntas específicas:

<p>¿Cuál es el impacto del procedimiento de evaluación previa sujeto al silencio administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020?</p>	<p>Explicar el impacto del procedimiento de evaluación previa sujeto al silencio administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020</p>	<p>Sub Categoría 1 Evaluación previa</p> <p>Sub Categoría 2 Silencio administrativo</p>	<p>- ¿Considera Ud. que en el procedimiento de evaluación previa debe existir una prórroga de plazos como consecuencia del estado de emergencia nacional?</p> <p>- ¿Desde qué momento se aplica el silencio administrativo en el procedimiento de evaluación previa, y cuál ha sido su implicancia durante el estado de emergencia nacional?</p> <p>-¿ Cuáles son los efectos del procedimiento de evaluación previa sujetos al silencio administrativo, que causa perjuicio a la administración y al administrado durante el estado de emergencia nacional?</p>
<p>¿Cuál es el impacto del procedimiento de aprobación automática sujeto a la fiscalización posterior durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020?</p>	<p>Explicar el impacto del procedimiento de aprobación automática sujeto a la fiscalización posterior durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020</p>	<p>Sub Categoría 3 Aprobación automática</p> <p>Sub Categoría 4 Fiscalización posterior</p>	<p>- ¿Considera Ud. que en el procedimiento de aprobación automática debe prevalecer la presunción de veracidad, a efectos de favorecer al administrado como consecuencia del estado de emergencia nacional?</p>

			<p>- ¿Cómo se ha efectuado la fiscalización posterior en el procedimiento de aprobación automática, en mérito al principio de verdad material durante el estado de emergencia nacional?</p> <p>-¿Cuáles son los efectos del procedimiento de aprobación automática sujeto a fiscalización posterior, a causa del distanciamiento social obligatorio durante el estado de emergencia nacional?.</p>
--	--	--	--

Anexo 3: Matriz de Triangulación

PREGUNTA	E1	E2	E3	E4	E5	E6	CONVERGENCIA	DIVERGENCIA	INTERPRETACIÓN
1.- ¿Cuál es el tratamiento del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional? Explique	El tratamiento que ha optado nuestro país, frente a las consecuencias derivadas del SARS - COVID 19, ha sido en un comienzo, el de evitar la conglomeración y participación de un grupo de personas en todas las actividades que sean posibles, alterando en sobremanera las actividades rutinarias del procedimiento administrativo en las diferentes	El tratamiento en los procedimientos administrativos, han sufrido cambios en lo que respecta al trámite del mismo, dado que, por motivos del estado de emergencia nacional, se ha implementado la virtualidad, la suspensión de	Las diligencias virtuales, mediante los medios tecnológicos y electrónicos, asimismo, la dilatación de los procedimientos administrativos y la deficiencia a los recursos digitales y humanos.	En una oportunidad durante el estado de emergencia nacionales suspendieron los plazos por que la pandemia del Covid-19, es muy agresiva y en el año	El tratamiento ha sido efectuado por la virtualidad en los procedimientos, y la dilatación en la respuesta del mismo.	El tema del mundo digital, recursos tecnológicos, el trabajo remoto, las notificaciones virtuales y sobre todo la suspensión de plazos, a causa de la pandemia	Cinco de los entrevistados que señalaron que el tratamiento del procedimiento administrativo, se efectuado en la virtualidad en la tramitación del expediente y la dilatación del procedimiento como consecuencia de la pandemia.	Un entrevistado indico, que afecto en el tema las aglomeraciones de las personas en las oficinas administrativas, así como, la paralización de las actividades de campo en las instituciones educativas.	Los descargos de los entrevistados han resultado la mayoría de manera uniforme, debido que los expertos han considerado que el tratamiento al procedimiento administrativo, en tiempos de estado de emergencia nacional, se efectuaron la implementación de los medios tecnológicos, así como, la modalidad de trabajo remoto, la Valdez del acto administrativo y la suspensión de plazos. Sin embargo, un entrevistado señalo que, se evitado la conglomeración de las personas y la paralización de las supervisiones a las instituciones educativas, en merito a la fiscalización posterior.

	Instituciones, siendo una de ellas, la UGEL 04, que si bien al principio del estado de emergencia en el año 2020, paralizó sus actividades hasta el 12 de junio del 2021, ahora ha mantenido un alto nivel de precaución, pero estableciendo ciertas medidas a fin de responder las solicitudes de los diferentes administrados.	plazos, la celeridad del procedimiento y la validez del acto administrativo, puesto que, en específico la UGEL 04, no cuenta con recursos tecnológicos y humano, para poder brindar un procedimiento adecuado, eficiencia y valido, con la finalidad de cumplir con los lineamient							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		os establecid os del panorama digital.							
2.- ¿Considera Ud. que existe una adecuada relación del procedimient o administrativ o y las políticas públicas, en las unidades ejecutoras? Explique	Tal y como se ha explicado anteriormente, el estado ha optado desde el 12 de junio del 2020, ciertas medidas de prevención que han podido sobrellevar un adecuado funcionamiento de las normas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo General, así como otras complementarias y	Si existe una adecuada relación, por que, el procedimiento administrativo, es el conjunto de actos y actuaciones administrativas, en la cual la administración emite pronunciamiento y el mismo genera efectos jurídicos; asimismo, las políticas	No, porque las políticas públicas, tiene la función, donde el gobierno pueda realizar ciertas acciones o ejecuciones en beneficio colectivo, sin embargo, producto de las burocracias y problemas de la administración no cumplen con sus roles respectivo, en las unidades ejecutoras.	Considero que deberá articularse con una política de gobierno como suministrar la logística pertinente, internet, computadora, electricidad, que son herramientas básicas para poder desarrollar y concordar el procedimiento o administrativo con una política pública.	Si, puesto que la ambos buscan realizar acciones en pro de la colectividad y la del buen servicio al ciudadano	Si, motivo por la cual las unidades ejecutoras tienen la facultades de efectuar acciones de acuerdo a su competencia.	Cinco de los entrevistados, indicaron que si existe relación, ya que, ambos buscan realizar acciones las mismas que generan efectos jurídicos, buscando el interés común	Un entrevistado señaló que no existe relación, porque el estado puede disponer realizar acciones correspondientes, sin embargo, las unidades ejecutoras no cumplen con dichas disposiciones producto de las barreras burocráticas.	Las mayorías de las respuestas por parte de los entrevistados, han coincidido que, si existe una adecuada relación, porque, ambos buscan realizar acciones para el beneficio de la colectividad y brindar un buen servicio. Empero, un entrevistado, considera que no existe relación, motivo por la cual las unidades ejecutoras, existen la burocracia para alcanzar dicho fin, por lo que, no cumplen con dicha función de hacer.

	<p>anexas, y si bien ya no se puede dar cumplimiento cabalmente a determinados reglamentos o principios del mismo, como la notificación física, la atención dentro de los ambientes de la UGEL 04, y entre otros reglamentos que requieren la interacción del administrado y la administración , mediante el trabajo remoto y las notificaciones electrónicas han suplido exitosa y temporalment e dichas</p>	<p>públicas, es la acciones de hacer o no hacer por parte por parte del estado, con la finalidad de solucionar problemas en un momento determina do en beneficio de las personas interesada s y que sean prioridad para el estado. En ese sentido, se advierte que existe una adecuada</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	actividades.	relación, dado que el procedimiento administrativo, una de las principales características es, brindar solución y otorgarle el derecho que le corresponde, en respuesta a lo requerido por el administrado, mediante un acto administrativo, en mérito al interés común,							
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>3.- ¿Cuál es la finalidad del procedimiento administrativo, y como contribuyo en la implementación y reforma de la Institución durante del estado de emergencia nacional? Explique.</p>	<p>La finalidad del procedimiento administrativo ha sido siempre la de buscar responder las solicitudes presentadas por el administrado, así como el conllevar de manera exitosa la administración y organización de la misma ante el estado, y la contribución que tuvo este último, al implementar el trabajo remoto y el uso extendido de las notificaciones electrónicas,</p>	<p>La finalidad del procedimiento administrativo es, brindar respuesta al administrado, mediante un acto administrativo valido y eficaz, en el plazo establecido por ley. Con respecto, a la contribución durante el estado de emergencia nacional, no ha sido el adecuado, puesto</p>	<p>La finalidad del procedimiento administrativo, brindar un buen servicio al administrado, respetando el estado derecho y los principios constitucionales y administrativos, diligenciando oportunamente las solicitudes de los administrados; contribuyo de manera</p>	<p>La finalidad es que no haya vicios en el procedimiento mismo que se respete, conforme lo señala el Tribunal Constitucional, en concordancia con lo indicado por la autoridad nacional del servicio civil.</p>	<p>Es buscar, el fin común, con la emisión del acto administrativo.</p>	<p>La emisión del acto resolutivo, donde se brinde respuesta al administrado, ahora con los implementos tecnológicos.</p>	<p>La mayoría de los entrevistados, consideran que la finalidad el procedimiento administrativo, es brindar un buen servicio al administrado, con la respuesta de la administración, de acuerdo al marco legal.</p>	<p>Dos de los entrevistados han señalado, que la forma de contribución ha sido parcial, puesto que tanto la administración como los servidores no han estado preparados para la implementación de recursos tecnológicos o el trabajo remoto,</p>	<p>Los descargos de los entrevistados, han sido uniformes en lo que respecta a la finalidad el procedimiento administrativos, en la cual busca brindar una respuesta adecuada al administrado mediante el acto administrativo, y en lo que corresponde a la contribución ha sido relativamente parcial por los temas de a virtualidad y de la implementación tecnológicas.</p>
---	---	--	--	--	---	---	---	--	--

	<p>fue un gran avance para lograr contrarrestar en cierto modo, la inactividad que se produjo durante los primeros meses de la pandemia; debiendo incluso tomarse en consideración como un medio ideal, para las medidas que tome el estado tras el término del estado de emergencia.</p>	<p>que, en lo referido a la implementación no contamos con recursos tecnológicos y humano a efectos de realizar un procedimiento administrativo optimo y rápido, dado que tampoco contábamos con firma digital, mesa de partes de virtual y expedientes digitalizados; por lo que, debe existir una</p>	<p>parcial, puesto que la implementación no resulto eficiente y oportuno, en la medida de la adaptación de la virtualidad .</p>						
--	---	---	---	--	--	--	--	--	--

		reforma tecnológica y digital para los órganos ejecutores , de manera prioritaria a fin de emitir actos administrativos válidos y con celeridad, en beneficio de la administración y administrado.							
4.- ¿Considera Ud. que en el procedimiento de evaluación previa debe	En mi opinión si debe existir una prórroga de plazos al procedimiento de evaluación previa, en	La finalidad del procedimiento administrativo es, brindar	Considerando que es un proceso de adaptación el trabajo	Si, ya que no se cuenta con el personal en su totalidad trabajando al 100% ya sea por trabajo	Si, por motivos de la pandemia y que no podemos desarrollar en totalidad	Si, ya que, no es lo mismo trabajar en oficina, con todas las herramientas	Todos los entrevistados han considerado que debe existir una prórroga de plazos,		Respecto a la prórroga de plazos, el 100% de los entrevistados han señalado que si debe existir la prórroga establecida, dado por la coyuntura nacional que se está atravesando y

<p>existir una prórroga de plazos como consecuencia del estado de emergencia nacional? Explique.</p>	<p>mérito a que el Código del Procedimiento Administrativo General, concede al administrado y a la administración un periodo de 30 días hábiles a fin de dar por concluida el procedimiento , pero dicha ambientación no ampara el hecho de que el país actualmente se encuentra amenazado por los estragos de la pandemia, impidiendo mucha de las acciones que antes se realizaban regularmente,</p>	<p>respuesta al administrado, mediante un acto administrativo valido y eficaz, en el plazo establecido o por ley. Con respecto, a la contribución durante el estado de emergencia nacional, no ha sido el adecuado, puesto que, en lo referido a la implementación no contamos con recursos</p>	<p>remoto, así como, la implementación de los medios digitales, se evidencio el incumplimiento de plazos, dado que los administrados comenten errores al ingresar sus solicitudes y los anexos mediante los mecanismos electrónicos, no se evidencia con</p>	<p>remoto, situación que conlleva que no se trabaje en el lapso de 30 días, sin perjuicio de la carencia de los servicios básicos como internet entre otros.</p>	<p>los expedientes</p>	<p>necesarias, que trabajar de manera virtual, con muchas deficiencias digitales.</p>	<p>puesto que estos procedimientos deben ser analizados en profundidad, y con el estado de emergencia, no permite realizar las indagaciones correspondientes, a efectos de poder brindar una respuesta competente.</p>	<p>que los entes responsables deben emitir pronunciamiento al respecto, con la finalidad de decretar las prórrogas de las mismas.</p>
---	--	---	--	--	------------------------	---	--	---

	<p>tal como las inspecciones oculares, supervisiones, notificaciones y audiencias que se podrían sostener entre los sujetos del procedimiento , por lo que la extensión temporal de los plazos otorgados por el estado si deben ampliarse.</p>	<p>tecnológicos y humano a efectos de realizar un procedimiento administrativo optimo y rápido, dado que tampoco contábamos con firma digital, mesa de partes de virtual y expedientes digitalizados; por lo que, debe existir una reforma tecnológica y digital para los órganos ejecutores , de manera</p>	<p>legibilidad sus correos electrónicos o algún medio de comunicación virtual, por todo lo dicho, debe ser factible la prórroga de la evaluación.</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

		prioritaria a fin de emitir actos administrativos válidos y con celeridad, en beneficio de la administración y administrado.							
5.- ¿Desde qué momento se aplica el silencio administrativo en el procedimiento de evaluación previa, y cuál ha sido su implicancia durante el estado de emergencia	Tal como se ha mencionado anteriormente, el Código del Procedimiento Administrativo General, otorga un plazo a la administración de 30 días hábiles a fin de responder las solicitudes	El silencio administrativo se aplica después de los 30 días hábiles, de haber iniciado el procedimiento de evaluación previa; y con respecto,	A partir de los 30 días hábiles, la implicancia es que no se ha cumplido con el plazo establecido, producto del estado de emergenc	Durante esta emergencia los administrados en su derecho, si han interpuesto y deducido silencio administrativo conforme a su solicitud, sin embargo, la demora o el retraso no	Se aplica después de los 30 días hábiles, por este estado de emergencia no se ha cumplido con dicho plazo.	Desde los 30 días, de acuerdo a norma.	Los seis entrevistados han considerado que la aplicación del silencio administrativo ocurre después de los 30 días hábiles, y que dicho plazo no se ha estado cumpliendo		Las repuestas de los entrevistados ha tenido un criterio uniforme, puesto que el 100% de los participantes han sostenido, que es fundamental la prórroga del plazo para el procedimiento de evaluación previa, y las autoridades correspondientes deben emitir pronunciamiento al respecto, a efectos que no cause perjuicio al administrado.

nacional? Explique.	presentadas por el administrado, dentro del procedimiento de evaluación previa; debiendo aplicarse el silencio administrativo positivo, tras la culminación de ese periodo; y si bien el estado durante los primeros meses de la pandemia paralizó, la continuación de dichos Explicar el impacto del procedimiento de evaluación previa sujeto al silencio administrativo durante el estado de	a la implicancia del procedimiento, no han sido cumplidos dentro del plazo existiendo dilatación en los expedientes y figura de invalidez en algunos actos administrativos, motivo del trabajo remoto y la implementación tecnológica en la administración.	ia nacional y sus efectos, la implementación de la recursos tecnológicos y humanos.	ha sido por que deseen, en muchas ocasiones con por carga de expedientes, entre otros.			producto de pandemia.		
------------------------	---	---	---	--	--	--	-----------------------	--	--

	<p>emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020. periodos, actualmente si se encuentra computando los días hábiles, dentro de lo dispuesto por la norma, y es respondida por la administración , por medio de la notificación electrónica y la utilización de los medios electrónicos a fin de suplir las audiencias físicas.</p>								
<p>6.- ¿Cuáles son los efectos del procedimiento de</p>	<p>Los principales efectos que tiene los procedimientos de</p>	<p>Uno de los efectos del procedimiento de</p>	<p>Uno de los efectos, es la nulidad, en caso</p>	<p>Es una alerta para la administración considero que, quizá sea por falta</p>	<p>Los efectos de este procedimiento es la nulidad de puro</p>	<p>Son muchos efectos que acarrear vicios de nulidad al</p>	<p>Cuatro de los entrevistados han señalado que los efectos de dicho</p>	<p>Dos de los entrevistados, Han indicado, que los efectos es la acumulación</p>	<p>Con respecto a las consideraciones de los efectos del procedimiento administrativo sujeto al silencio administrativo,</p>

evaluación previa sujetos al silencio administrativ o, que causa perjuicio a la administració n y al administrado durante el estado de emergencia nacional? Explique.	evaluación previa sujetos al silencio administrativo positivo y que causa perjuicio a la administración y al administrado, es la acumulación de solicitudes virtuales que se presenta ante mesa de partes, así como el bajo filtrado realizado por mesa de partes a dichas solicitudes, lo que afecta de manera significativa la respuesta otorgada por la administración , y por ende	evaluació n previa sujetos al silencio administra tivo, es la nulidad, en algunos casos, ya sea en silencio positivo o negativo, ya que, la administra ción no ha tenido la función de verificar y revisar si el procedimi ento cumple con los requisitos legales, valido y fin licito, motivo que la administra	del silencio administr ativo positivo y el recurso de apelación contra resolución ficta, en caso del silencio administr ativo negativo, por cuanto, el perjuicio, si causa tanto al administr ado como a la administr ación, tales como la responsa bilidad funcional.	de personal, entre otros factores.	derecho o el recurso correspondi ente.	acto administrati vo.	procedimient o es la nulidad y el recurso de apelación, y que la consecuenci a del mismo causa perjuicio al administrado.	de los expedientes digitales que los mismo acarrear silencio administrativo, y que el mismo es producto de la falta de personal.	la mayoría de los entrevistados han señalado que los efectos son la nulidad y la apelación por resolución ficta, por el exceso de plazo en la atención del expediente, asimismo, aquello perjudica al administrado y a la administración, por el deslinde de responsabilidad. Los demás entrevistados, indican que los efectos, es la acumulación de los expedientes, dilatación de los expedientes, producto a la virtualidad y no contar con el personal adecuado.
--	--	--	--	--	---	-----------------------------	---	---	---

	causa perjuicio a la Institución.	ción ya no contaba con la competencia para poder realizar dicha función, por operar el silencio administrativo.							
7.- ¿Considera Ud., que en el procedimiento de aprobación automática debe prevalecer la presunción de veracidad, a efectos de favorecer al administrado como consecuencia del estado de emergencia	Si considero que, dentro del procedimiento de aprobación automática, debe prevalecer la presunción de veracidad, debiendo la administración, informar al administrado sobre qué requisitos debe cumplir a fin de que	Así es, por que, según los principios del procedimiento administrativo, es la presunción de veracidad, donde se presume que toda documentación que presenta	Claro, puesto que es un procedimiento que debe ser aprobado automáticamente con la celeridad del caso, a efectos de asistir el derecho correspondiente al	Se encuentra como uno de los principios en el TUO de la Ley N° 27444, sin embargo considero que no se cumple a cabalidad, existiendo mucha falsedad en diversas solicitudes lo que conlleva a que lo que presume, ya	Si, ya que, es el principio fundamental para dicho procedimiento.	Sí, es requisito fundamental	Los seis entrevistados consideraron, que debe prevalecer dicho principio, a efectos de brindar solución rápida a los administrados y no dilatar el procedimiento.		El 100% de los entrevistados, han obtenido un criterio uniforme, puesto que indican que si deben prevalecer el principio de presunción de veracidad, motivo por la cual, debe efectuarse con celeridad y efectividad dichos procedimientos, el mismo que busca favorecer netamente al administrado, siempre y cuando se cumpla el fin lícito, con la fiscalización posterior.

nacional? Explique.	su solicitud pueda ser aprobado; siendo los medios donde debe informar la administración sobre dichos asuntos, es dentro de su plataforma virtual, tal como lo viene haciendo la UGEL 04, y la orientación telefónica que tiene los servidores y funcionarios públicos de la institución.	el administrador es verídico, y más aun encontrándose en el estado de emergencia, no contábamos con los medios y herramientas suficientes para realizar la fiscalización posterior, en merito a la verdad material; con la finalidad de brindar atención oportuna al administrador dentro	administrado.	sea cuestionado.					
------------------------	---	---	---------------	------------------	--	--	--	--	--

		del plazo legal.							
8.- ¿Cómo se ha efectuado la fiscalización posterior en el procedimiento de aprobación automática, en mérito al principio de verdad material durante el estado de emergencia nacional? Explique	La UGEL 04, en relación a la fiscalización posterior en los procedimientos de aprobación automática ha sido sobrellevado de manera minuciosa y eficaz a lo largo del estado de emergencia; y si bien dicha acción administrativa ha tenido ciertos problemas por no poder realizar de manera física, la verificación virtual ha servido en sobremanera	Durante el estado de emergencia nacional, no se ha estado efectuando o la fiscalización posterior, porque, nosotros encontramos en inmovilización social obligatoria, dado que en la actualidad en forma progresiva se está efectuando o la fiscalización posterior, en mérito	La fiscalización posterior se ha delimitado de manera parcial y gradualmente, por parte de la administración, a causa de la inmovilización social obligatoria. Sin embargo, poco a poco se regularizado las supervisiones correspondientes	A través de comunicaciones, por wasap, por correo electrónico, en este ámbito no se encuentra en la obligación de agenciarse y de realizar automáticamente lo que la ley nos faculta, por tratarse de una entidad del estado.	Se ha efectuado de forma parcial, por motivos del distanciamiento social	Se ha efectuado de manera virtual o presencial, en algunos casos.	Los seis entrevistados han indicado que se ha efectuado de manera parcial y gradualmente, producto a la inmovilización social obligatoria, y que e mismo se ha estado desarrollando virtualmente, con ciertas deficiencias.		Los descargos de los entrevistados han coincidió en un 100% de su totalidad, ya que, han sostenido que las fiscalizaciones posteriores se han desarrollado de manera gradual, con los medios tecnológicos y en algunos casos presencialmente, con lo protocolos establecidos, sin embargo ha existido deferencia, la no ser igual que la verificación in situ

	para actuar acorde al principio de verdad material en la institución.	al principio de verdad material.	con los protocolos de bioseguridad pertinente.						
9.- ¿Cuáles son los efectos del procedimiento de aprobación automática sujeto a fiscalización posterior, a causa del distanciamiento social obligatorio durante el estado de emergencia nacional? Explique	Tal y como se ha explicado anteriormente, los efectos del procedimiento de aprobación automática no ha podido ser llevados en su cabalidad tal y como se exponía en la norma durante el periodo pre pandemia, por no poder realizarse las audiencias o supervisiones de manera física, pero gracias al trabajo remoto, a los medios	Uno de los efectos es la nulidad, por no cumplir con el fin lícito o la ilegalidad de algunos de los requisitos; sin embargo, estos efectos se han paralizado en parte por motivo de la causa del distanciamiento social	Los efectos, es la nulidad, sin embargo, al aprobarse automáticamente el procedimiento, el mismo han generado los efectos jurídicos válidos; por lo que, podría causar perjuicio a terceros que están	El retraso en la atención en s, procuramos que los documentos sean atendidos en el plazo, sin embargo, no todos consideran que estén presentando a una situación pública.	Algunos de los efectos más trascendentales, es la nulidad de los actos,	La demora en la fiscalización posterior, producto de la pandemia.	Cuatro de los entrevistados, indican que los efectos de la fiscalización posterior en dicho procedimiento es la nulidad, el mismo.	Dos de los entrevistados señalan que los efectos es el retraso de la atención de la fiscalización, y que no se ha podido desarrollar las diligencias de supervisión física, sino de manera virtual producto al trabajo remoto.	La mayoría de respuesta de los entrevistados han concedido en lo que respecta a los efectos del procedimiento de aprobación automática, siendo uno de ellos la nulidad por vicios advertidos en el acto administrativo, conllevando con ello la invalidez del acto. Los demás entrevistados sostuvieron que los efectos, es producto de la dilatación del procedimiento, por no cumplir con la fiscalización en el plazo oportuno, producto del distanciamiento social, y el trabajo remoto.

	electrónicos y a las supervisiones realizadas bajo un cuidado intensivo, ha podido realizarse de manera eficaz, las acciones de fiscalización posterior en los procedimientos de aprobación automática.	obligatorio .	inmersos a la finalidad del procedimiento, y mayor aun, a causa del estado de emergencia nacional.						
--	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--



GUÍA DE LA ENTREVISTA

Título: Impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020

Entrevistado:

Cargo/Profesión/Grado académico:

Institución:

OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

Preguntas:

- 1. ¿Cuál es el tratamiento del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional? Explique.**

.....

.....

.....

.....

.....

2. ¿Considera Ud. que existe una adecuada relación del procedimiento administrativo y las políticas públicas, en las unidades ejecutoras? Explique.

.....

.....

.....

.....

.....

3. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento administrativo, y como contribuyo en la implementación y reforma de la Institución durante del estado de emergencia nacional? Explique.

.....

.....

.....

.....

.....

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Explicar el impacto del procedimiento de evaluación previa sujeto al silencio administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

Preguntas:

4. ¿Considera Ud. que en el procedimiento de evaluación previa debe existir una prórroga de plazos como consecuencia del estado de emergencia nacional? Explique.

.....

.....

.....

.....

.....

5. ¿Desde qué momento se aplica el silencio administrativo en el procedimiento de evaluación previa, y cuál ha sido su implicancia durante el estado de emergencia nacional? Explique.

.....

.....

.....

.....

.....

6. ¿Cuáles son los efectos del procedimiento de evaluación previa sujetos al silencio administrativo, que causa perjuicio a la administración y al administrado durante el estado de emergencia nacional? Explique.

.....

.....

.....

.....

.....

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Explicar el impacto del procedimiento de aprobación automática sujeto a la fiscalización posterior durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

Preguntas:

7. ¿Considera Ud., que en el procedimiento de aprobación automática debe prevalecer la presunción de veracidad, a efectos de favorecer al administrado como consecuencia del estado de emergencia nacional? Explique.

.....

.....

.....

.....

.....

8. ¿Cómo se ha efectuado la fiscalización posterior en el procedimiento de aprobación automática, en mérito al principio de verdad material durante el estado de emergencia nacional? Explique

.....

.....

.....

.....

.....

9. ¿Cuáles son los efectos del procedimiento de aprobación automática sujeto a fiscalización posterior, a causa del distanciamiento social obligatorio durante el estado de emergencia nacional? Explique

.....

.....

.....

.....

.....

--	--

Entrevistado Entrevistado (consentimiento informado para participar en esta investigación científica)	Entrevistador
--	----------------------

Anexo 6: Guía de entrevista desarrolladas

GUÍA DE LA ENTREVISTA

Título: Impacto del procedimiento administrativo durante del estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020

Entrevistado: EVELYN JEANNETTE LUNASCO DELGADO

Cargo/Profesión/Grado académico: RESPONSABLE DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO / ADMINISTRADORA Y ESPECIALISTA EN ARCHIVO / MASTER EN GESTIÓN PÚBLICA

Institución: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04

OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

Preguntas:

- 1. ¿Cuál es el tratamiento del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional? Explique.**

El procedimiento administrativo de documentos en mi Entidad se realiza, desde el inicio del Estado de Emergencia Nacional, a través de medios electrónicos que permiten realizar la atención de los trámites administrativos de manera virtual, sin necesidad de que el personal se desplace físicamente a las oficinas.

- 2. ¿Considera Ud. que existe una adecuada relación del procedimiento administrativo y las políticas públicas, en las unidades ejecutoras? Explique.**

Sí, pero de manera parcial. En mi opinión, creo que muchas disposiciones y acciones a nivel de gobierno para las unidades ejecutoras, no consideran los procedimientos administrativos internos de cada entidad.

3. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento administrativo, y como contribuyo en la implementación y reforma de la Institución durante del estado de emergencia nacional? Explique.

La finalidad de un procedimiento administrativo es la emisión de un acto administrativo en base a procedimientos legales vigentes, en su cumplimiento parte de la labor que realizó en mi Entidad, es coadyuvar a realizar mejoras que permitan la virtualización de los trámites administrativos, para ello una de las acciones realizadas desde el inicio del Estado de Emergencia Nacional, era simplificar los tiempos de atención, para ello se dispuso que los pedidos de algunos documentos se realicen sólo por correo institucional, sin necesidad de emitir memorandos.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Explicar el impacto del procedimiento de evaluación previa sujeto al silencio administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

Preguntas:

4. ¿Considera Ud. que en el procedimiento de evaluación previa debe existir una prórroga de plazos como consecuencia del estado de emergencia nacional? Explique.

Sí, en trámites que no se encuentran virtualizados y que para su atención requieran necesariamente las consultas a documentos que no se encuentran digitalizados en la Entidad.

5. **¿Desde qué momento se aplica el silencio administrativo en el procedimiento de evaluación previa, y cuál ha sido su implicancia durante el estado de emergencia nacional? Explique.**

Conforme a la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la inacción o el no actuar de la administración pública en los trámites administrativos dentro del plazo establecido, deviene en silencio administrativo, en ese sentido, estimo que muchos procedimientos administrativos que requieren para su atención consultas a documentos que obran físicamente en las Entidades, a causa del Estado de Emergencia Nacional, no han podido ser atendidas dentro del plazo legal.

6. **¿Cuáles son los efectos del procedimiento de evaluación previa sujetos al silencio administrativo, que causa perjuicio a la administración y al administrado durante el estado de emergencia nacional? Explique.**

La no atención de los trámites administrativos dentro del plazo establecido, evidentemente genera responsabilidades administrativas en los servidores públicos y la reclamación por parte del administrado.

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Explicar el impacto del procedimiento de aprobación automática sujeto a la fiscalización posterior durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

Preguntas:

7. **¿Considera Ud., que en el procedimiento de aprobación automática debe prevalecer la presunción de veracidad, a efectos de favorecer al administrado como consecuencia del estado de emergencia nacional? Explique.**

Sí, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, de tal modo que con esta acción es posible dotar al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales y requisitos que dificulten su desenvolvimiento por el Estado de Emergencia Nacional.

8. **¿Cómo se ha efectuado la fiscalización posterior en el procedimiento de aprobación automática, en mérito al principio de verdad material durante el estado de emergencia nacional? Explique**

Es un procedimiento que lo realizan diferentes dependencias en mi Entidad, las cuales tengo conocimiento que se realizan de manera virtual.

9. **¿Cuáles son los efectos del procedimiento de aprobación automática sujeto a fiscalización posterior, a causa del distanciamiento social obligatorio durante el estado de emergencia nacional? Explique**

En líneas generales, los procedimientos de aprobación automática, son aquellos en los que lo solicitado por el administrado se considera aprobado desde su solicitud, en ese sentido, debido que dicho procedimiento tiene fundamento jurídico, corresponde realizar la fiscalización posterior, y debido al Estado de Emergencia Nacional, es recomendable que dicha fiscalización se realice a través de los medios electrónicos de cada Entidad.

 <p>EVELYN JEANNETTE LUNASCO DELGADO Responsable de Trámite Documentario y Archivo Área de Administración UGEL 04</p>	
<p>Entrevistado Entrevistado (consentimiento informado para participar en esta investigación científica)</p>	<p>Entrevistador</p>

GUÍA DE LA ENTREVISTA

Título: Impacto del procedimiento administrativo durante del estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020

Entrevistado: Jesús Adolfo Quispichuco Taico

Cargo/Profesión/Grado académico: Jefe del Área de Asesoría Jurídica – Abogado-Maestro

Institución: Unidad de Gestión Educativa Local N° 04

OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

Preguntas:

1. **¿Cuál es el tratamiento del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional? Explique.**

El tema del mundo digital, recursos tecnológicos, el trabajo remoto, las notificaciones virtuales y sobre todo la suspensión de plazos, a causa de la pandemia.

2. **¿Considera Ud. que existe una adecuada relación del procedimiento administrativo y las políticas públicas, en las unidades ejecutoras? Explique.**

Si, motivo por la cual las unidades ejecutoras tienen la facultad de efectuar acciones de acuerdo a su competencia.

3. **¿Cuál es la finalidad del procedimiento administrativo, y como contribuyo en la implementación y reforma de la Institución durante del estado de emergencia nacional? Explique.**

La emisión del acto resolutivo, donde se brinde respuesta al administrado, ahora con los implementos tecnológicos.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Explicar el impacto del procedimiento de evaluación previa sujeto al silencio administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

Preguntas:

4. **¿Considera Ud. que en el procedimiento de evaluación previa debe existir una prórroga de plazos como consecuencia del estado de emergencia nacional? Explique.**

Sí, ya que, no es lo mismo trabajar en oficina, con todas las herramientas necesarias, que trabajar de manera virtual, con muchas deficiencias digitales.

5. **¿Desde qué momento se aplica el silencio administrativo en el procedimiento de evaluación previa, y cuál ha sido su implicancia durante el estado de emergencia nacional? Explique.**

Desde los 30 días, de acuerdo a norma.

6. **¿Cuáles son los efectos del procedimiento de evaluación previa sujetos al silencio administrativo, que causa perjuicio a la administración y al administrado durante el estado de emergencia nacional? Explique.**

Son muchos efectos que acarrearán vicios de nulidad al acto administrativo.

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Explicar el impacto del procedimiento de aprobación automática sujeto a la fiscalización posterior durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

Preguntas:

7. **¿Considera Ud., que en el procedimiento de aprobación automática debe prevalecer la presunción de veracidad, a efectos de favorecer al administrado como consecuencia del estado de emergencia nacional? Explique.**


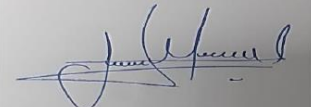
Sí, es requisito fundamental.

8. **¿Cómo se ha efectuado la fiscalización posterior en el procedimiento de aprobación automática, en mérito al principio de verdad material durante el estado de emergencia nacional? Explique**

Se ha efectuado de manera virtual o presencial, en algunos casos.

9. **¿Cuáles son los efectos del procedimiento de aprobación automática sujeto a fiscalización posterior, a causa del distanciamiento social obligatorio durante el estado de emergencia nacional? Explique**

La demora en la fiscalización posterior, producto de la pandemia.

 Abog. JESUS ADOLFO QUISPICHUCO TAICO	
---	--

Jefe del Área de Asesoría Jurídica Unidad de Gestión Educativa Local 04	
Entrevistado (consentimiento informado para participar en esta investigación científica)	Entrevistador

GUÍA DE LA ENTREVISTA

Título: Impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020

Entrevistado: David Alejandro Barreda Ponce

Cargo/Profesión/Grado académico: Secretario Técnico de Servir / Abogado

Institución: Unidad de Gestión Educativa Local N° 04

OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

Preguntas:

- 1. ¿Cuál es el tratamiento del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional? Explique.**

El tratamiento en los procedimientos administrativos, han sufrido cambios en lo que respecta al trámite del mismo, dado que, por motivos del estado de emergencia nacional, se ha implementado la virtualidad, la suspensión de plazos, la celeridad del procedimiento y la validez del acto administrativo, puesto que, en específico la UGEL 04, no cuenta con recursos tecnológico y humano, para poder brindar un procedimiento adecuado, eficiencia y valido, con la finalidad de cumplir con los lineamientos establecidos del panorama digital.

2. ¿Considera Ud. que existe una adecuada relación del procedimiento administrativo y las políticas públicas, en las unidades ejecutoras? Explique.

Si existe una adecuada relación, por que, el procedimiento administrativo, es el conjunto actos y actuaciones administrativas, en la cual la administración emite pronunciamiento y el mismo genera efectos jurídicos; asimismo, las políticas públicas, es la acciones de hacer o no hacer por parte por parte del estado, con la finalidad de solucionar problemas en un momento determinado en beneficio de las personas interesadas y que sean prioridad para el estado.

En ese sentido, se advierte que existe una adecuada relación, dado que el procedimiento administrativo, una de las principales características es, brindar solución y otorgarle el derecho que le corresponde, en respuesta a lo requerido por el administrado, mediante un acto administrativo, en mérito al interés común,

3. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento administrativo, y como contribuyó en la implementación y reforma de la Institución durante del estado de emergencia nacional? Explique.

La finalidad del procedimiento administrativo es, brindar respuesta al administrado, mediante un acto administrativo valido y eficaz, en el plazo establecido por ley. Con respecto, a la contribución durante el estado de emergencia nacional, no ha sido el adecuado, puesto que, en lo referido a la implementación no contamos con recursos tecnológicos y humano a efectos de realizar un procedimiento administrativo optimo y rápido, dado que tampoco contábamos con firma digital, mesa de partes de virtual y expedientes digitalizados; por lo que, debe existir una reforma tecnológica y digital para los órganos ejecutores, de manera prioritaria a fin de emitir actos administrativos válidos y con celeridad, en beneficio de la administración y administrado.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Explicar el impacto del procedimiento de evaluación previa sujeto al silencio administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

Preguntas:

- 4. ¿Considera Ud. que en el procedimiento de evaluación previa debe existir una prórroga de plazos como consecuencia del estado de emergencia nacional? Explique.**

Si, por que, durante el estado de emergencia nacional, se estableció la inmovilización social obligatoria, esto conlleva a paralizar los trabajos en oficina, y al mismo tiempo, no brindar atención a los expedientes dentro del plazo, ya que, no contábamos con expedientes digitales y notificaciones virtuales para poder trabajar de forma remota; asimismo, en un primer momento los plazos no se suspendían y tampoco existía una prórroga de manera inmediata; por lo que, hasta ahora existe procedimientos dilatados y sin prórroga de plazos, producto al estado de emergencia.

- 5. ¿Desde qué momento se aplica el silencio administrativo en el procedimiento de evaluación previa, y cuál ha sido su implicancia durante el estado de emergencia nacional? Explique.**

El silencio administrativo se aplica después de los 30 días hábiles, de haber iniciado el procedimiento de evaluación previa; y con respecto, a la implicancia del procedimiento, no han sido cumplidos dentro del plazo existiendo dilatación en los expedientes y figura de invalidez en algunos actos administrativos, motivo del trabajo remoto y la implementación tecnológica en la administración.

- 6. ¿Cuáles son los efectos del procedimiento de evaluación previa sujetos al silencio administrativo, que causa perjuicio a la administración y al administrado durante el estado de emergencia nacional? Explique.**

Uno de los efectos del procedimiento de evaluación previa sujetos al silencio administrativo, es la nulidad, en algunos casos, ya sea en silencio positivo o negativo, ya que, la administración no ha tenido la función de verificar y revisar si el procedimiento cumple con los requisitos legales, valido y fin licito, motivo que la administración ya no contaba con la competencia para poder realizar dicha función, por operar el silencio administrativo.

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Explicar el impacto del procedimiento de aprobación automática sujeto a la fiscalización posterior durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

Preguntas:

7. **¿Considera Ud., que en el procedimiento de aprobación automática debe prevalecer la presunción de veracidad, a efectos de favorecer al administrado como consecuencia del estado de emergencia nacional? Explique.**

Así es, por que, según los principios del procedimiento administrativo, es la presunción de veracidad, donde se presume que toda documentación que presenta el administrado es verídico, y más aun encontrándose en el estado de emergencia, no contábamos con los medios y herramientas suficientes para realizar la fiscalización posterior, en merito a la verdad material; con la finalidad de brindar atención oportuna al administrado dentro del plazo legal.

8. **¿Cómo se ha efectuado la fiscalización posterior en el procedimiento de aprobación automática, en mérito al principio de verdad material durante el estado de emergencia nacional? Explique**

Durante el estado de emergencia nacional, no se ha estado efectuando la fiscalización posterior, porque, nos encontrábamos en inmovilización social obligatoria, dado que en la actualidad en forma progresiva se está efectuando la fiscalización posterior, en mérito al principio de verdad material.

9. ¿Cuáles son los efectos del procedimiento de aprobación automática sujeto a fiscalización posterior, a causa del distanciamiento social obligatorio durante el estado de emergencia nacional? Explique

Uno de los efectos es la nulidad, por no cumplir con el fin lícito o la ilegalidad de algunos de los requisitos; sin embargo, estos efectos se han paralizado en parte por motivo de la causa del distanciamiento social obligatorio.

 Secretario Técnico de SERVIR de la UGEL N° - Comas	
Entrevistado Entrevistado (consentimiento informado para participar en esta investigación científica)	Entrevistador

GUÍA DE LA ENTREVISTA

Título: Impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020

Entrevistado: Katherine Rosa Valladares Ramos

Cargo/Profesión/Grado académico: Especialista legal/ Abogada/ Maestra

Institución: Unidad de Gestión Educativa Local N° 04

OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

Preguntas:

- 1. ¿Cuál es el tratamiento del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional? Explique.**

Las diligencias virtuales, mediante los medios tecnológicos y electrónicos, asimismo, la dilatación de los procedimientos administrativo y la deficiencia los recursos digitales y humanos.

- 2. ¿Considera Ud. que existe una adecuada relación del procedimiento administrativo y las políticas públicas, en las unidades ejecutoras? Explique.**

No, porque las políticas públicas, tiene la función, donde el gobierno pueda realizar ciertas acciones o ejecuciones en beneficio colectivo, sin embargo,

producto de las burocracias y problemas de la administración no cumplen con sus roles respectivo, en las unidades ejecutoras.

3. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento administrativo, y como contribuyo en la implementación y reforma de la Institución durante del estado de emergencia nacional? Explique.

La finalidad del procedimiento administrativo, brindar un buen servicio al administrado, respetando el estado derecho y los principios constitucionales y administrativos, diligenciando oportunamente las solicitudes de los administrados; contribuyo de manera parcial, puesto que la implementación no resulto eficiente y oportuno, en la medida de la adaptación de la virtualidad.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Explicar el impacto del procedimiento de evaluación previa sujeto al silencio administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

Preguntas:

4. ¿Considera Ud. que en el procedimiento de evaluación previa debe existir una prórroga de plazos como consecuencia del estado de emergencia nacional? Explique.

Considerando que es un proceso de adaptación el trabajo remoto, así como, la implementación de los medios digitales, se evidenciado el incumplimiento de plazos, dado que los administrados cometen errores al ingresar sus solicitudes y los anexos mediante los mecanismos electrónicos, no se evidencian con legibilidad sus correos electrónicos o algún medio de comunicación virtual, por todo lo dicho, debe ser factible la prórroga de la evaluación.

5. **¿Desde qué momento se aplica el silencio administrativo en el procedimiento de evaluación previa, y cuál ha sido su implicancia durante el estado de emergencia nacional? Explique.**

A partir de los 30 días hábiles, la implicancia es que no se ha cumplido con el plazo establecido, producto del estado de emergencia nacional y sus efectos, la implementación de los recursos tecnológicos y humanos.

6. **¿Cuáles son los efectos del procedimiento de evaluación previa sujetos al silencio administrativo, que causa perjuicio a la administración y al administrado durante el estado de emergencia nacional? Explique.**

Uno de los efectos, es la nulidad, en caso del silencio administrativo positivo y el recurso de apelación contra resolución ficta, en caso del silencio administrativo negativo, por cuanto, el perjuicio, si causa tanto al administrado como a la administración, tales como la responsabilidad funcional.

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Explicar el impacto del procedimiento de aprobación automática sujeto a la fiscalización posterior durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

Preguntas:

7. **¿Considera Ud., que en el procedimiento de aprobación automática debe prevalecer la presunción de veracidad, a efectos de favorecer al administrado como consecuencia del estado de emergencia nacional? Explique.**


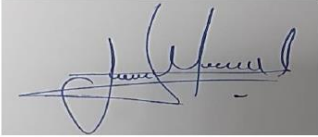
Claro, puesto que es un procedimiento que debe ser aprobado automáticamente con la celeridad del caso, a efectos de asistir el derecho correspondiente al administrado.

8. **¿Cómo se ha efectuado la fiscalización posterior en el procedimiento de aprobación automática, en mérito al principio de verdad material durante el estado de emergencia nacional? Explique**

La fiscalización posterior se ha delimitado de manera parcial y gradualmente, por parte de la administración, a causa de la inmovilización social obligatoria. Sin embargo, poco a poco se regularizado las supervisiones correspondientes con los protocolos de bioseguridad pertinente.

9. **¿Cuáles son los efectos del procedimiento de aprobación automática sujeto a fiscalización posterior, a causa del distanciamiento social obligatorio durante el estado de emergencia nacional? Explique**

Los efectos, es la nulidad, sin embargo, al aprobarse automáticamente el procedimiento, el mismo han generado los efectos jurídicos válidos; por lo que, podría causar perjuicio a terceros que están inmersos a la finalidad del procedimiento, y mayor aun, a causa del estado de emergencia nacional.

 Especialista legal del Área de Asesoría Jurídica de la UGEL N° 4	
Entrevistado (consentimiento informado para participar en esta investigación científica)	Entrevistador

GUÍA DE LA ENTREVISTA

Título: Impacto del procedimiento administrativo durante del estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020

Entrevistado: EBER ELI DIAZ LLANOS

Cargo/Profesión/Grado académico: Coordinador / Administrador de Empresas / Titulado

Institución: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 04

OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04 - 2020.

Preguntas:

- 1. ¿Cuál es el tratamiento del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional? Explique.**

El tratamiento que ha optado nuestro país, frente a las consecuencias derivadas del SARS -COVID 19, ha sido en un comienzo, el de evitar la conglomeración y participación de un grupo de personas en todas las actividades que sean posibles, alterando en sobremanera las actividades rutinarias del procedimiento administrativo en las diferentes Instituciones, siendo una de ellas, la UGEL 04, que si bien al principio del estado de emergencia en el año 2020, paralizó sus actividades hasta el 12 de junio del 2021, ahora ha mantenido un alto nivel de precaución, pero estableciendo ciertas medidas a fin de responder las solicitudes de los diferentes administrados.

2. ¿Considera Ud. que existe una adecuada relación del procedimiento administrativo y las políticas públicas, en las unidades ejecutoras? Explique.

Tal y como se ha explicado anteriormente, el estado ha optado desde el 12 de junio del 2020, ciertas medidas de prevención que han podido sobrellevar un adecuado funcionamiento de las normas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo General, así como otras complementarias y anexas, y si bien ya no se puede dar cumplimiento cabalmente a determinados reglamentos o principios del mismo, como la notificación física, la atención dentro de los ambientes de la UGEL 04, y entre otros reglamentos que requieren la interacción del administrado y la administración, mediante el trabajo remoto y la notificación electrónica han suplido exitosa y temporalmente dichas actividades.

3. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento administrativo, y como contribuyó en la implementación y reforma de la Institución durante el estado de emergencia nacional? Explique.

La finalidad del procedimiento administrativo ha sido siempre la de buscar responder las solicitudes presentadas por el administrado, así como el conllevar de manera exitosa la administración y organización de la misma ante el estado, y la contribución que tuvo este último, al implementar el trabajo remoto y el uso extendido de las notificaciones electrónicas, fue un gran avance para lograr contrarrestar en cierto modo, la inactividad que se produjo durante los primeros meses de la pandemia; debiendo incluso tomarse en consideración como un medio ideal, para las medidas que tome el estado tras el término del estado de emergencia.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Explicar el impacto del procedimiento de evaluación previa sujeto al silencio administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

Preguntas:

- 4. ¿Considera Ud. que en el procedimiento de evaluación previa debe existir una prórroga de plazos como consecuencia del estado de emergencia nacional? Explique.**

En mi opinión si debe existir un prórroga de plazos al procedimiento de evaluación previa, en mérito a que el Código del Procedimiento Administrativo General, concede al administrado y a la administración un periodo de 30 días hábiles a fin de dar por concluida el procedimiento, pero dicha ambientación no ampara el hecho de que el país actualmente se encuentra amenazado por los estragos de la pandemia, impidiendo mucha de las acciones que antes se realizaban regularmente, tal como las inspecciones oculares, supervisiones, notificaciones y audiencias que se podrían sostener entre los sujetos del procedimiento, por lo que la extensión temporal de los plazos otorgados por el estado si deben ampliarse.

- 5. ¿Desde qué momento se aplica el silencio administrativo en el procedimiento de evaluación previa, y cuál ha sido su implicancia durante el estado de emergencia nacional? Explique.**

Tal como se ha mencionado anteriormente, el Código del Procedimiento Administrativo General, otorga un plazo a la administración de 30 días hábiles a fin de responder las solicitudes presentadas por el administrado, dentro del procedimiento de evaluación previa; debiendo aplicarse el silencio administrativo positivo, tras la culminación de ese periodo; y si bien el estado durante los primeros meses de la pandemia paralizó, la continuación de dichos

periodos, actualmente si se encuentra computando los días hábiles, dentro de lo dispuesto por la norma, y es respondida por la administración, por medio de la notificación electrónica y la utilización de los medios electrónicos a fin de suplir las audiencias físicas.

6. ¿Cuáles son los efectos del procedimiento de evaluación previa sujetos al silencio administrativo, que causa perjuicio a la administración y al administrado durante el estado de emergencia nacional? Explique.

Los principales efectos que tiene los procedimientos de evaluación previa sujetos al silencio administrativo positivo y que causa perjuicio a la administración y al administrado, es la acumulación de solicitudes virtuales que se presenta ante mesa de partes, así como el bajo filtrado realizado por mesa de partes a dichas solicitudes, lo que afecta de manera significativa la respuesta otorgada por la administración, y por ende causa perjuicio a la Institución.

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Explicar el impacto del procedimiento de aprobación automática sujeto a la fiscalización posterior durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020.

Preguntas:

7. ¿Considera Ud., que en el procedimiento de aprobación automática debe prevalecer la presunción de veracidad, a efectos de favorecer al administrado como consecuencia del estado de emergencia nacional? Explique.

Si considero que dentro de los procedimiento de aprobación automática, debe prevalecer la presunción de veracidad, debiendo la administración, informar al administrado sobre que requisitos debe cumplir a fin de que su solicitud pueda ser aprobado; siendo los medios donde debe informar la administración sobre


dichos asuntos, es dentro de su plataforma virtual, tal como lo viene haciendo la UGEL 04, y la orientación telefónica que tiene los servidores y funcionarios públicos de la Institución.

8. ¿Cómo se ha efectuado la fiscalización posterior en el procedimiento de aprobación automática, en mérito al principio de verdad material durante el estado de emergencia nacional? Explique

La UGEL 04, en relación a la fiscalización posterior en los procedimientos de aprobación automática, ha sido sobrellevado de manera minuciosa y eficaz a lo largo del estado de emergencia; y si bien dicha acción administrativa ha tenido ciertos problemas por no poder realizarlas de manera física; la verificación virtual ha servido en sobremanera para actuar acorde al principio de verdad material en la institución.

9. ¿Cuáles son los efectos del procedimiento de aprobación automática sujeto a fiscalización posterior, a causa del distanciamiento social obligatorio durante el estado de emergencia nacional? Explique

Tal y como se ha explicado anteriormente, los efectos del procedimiento de aprobación automática no han podido ser llevados en su cabalidad tal y como se exponía en la norma durante el periodo pre pandemia, por no poder realizarse las audiencias o supervisiones de manera física, pero gracias al trabajo remoto, a los medios electrónicos y a las supervisiones realizadas bajo un cuidado intensivo, ha podido realizarse de manera eficaz las acciones de fiscalización posterior en los procedimientos de aprobación automática.

	
<p>Entrevistado Entrevistado (consentimiento informado para participar en esta investigación científica)</p>	<p>Entrevistador</p>



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

GUÍA DE LA ENTREVISTA

Título: Impacto del procedimiento administrativo durante del estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020

Entrevistado: Ysabel Ronny Venturo Tascio

Cargo/Profesión/Grado académico: ABOGADO

Institución: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N°04- COMAS

OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020.

Preguntas:

1. ¿Cuál es el tratamiento del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional? Explique.

EN UNA OPORTUNIDAD DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL SE SUSPENDIERON LOS PLAZOS PORQUE LA PANDEMIA DEL COVID-19 ES MUY AGRESIVA Y EN EL CASO DE LA UGEL N°04, ÚNICAMENTE PARA LOS EXPEDIENTES EN TRÁMITE Y PROCEDIMIENTOS EN COPIA.

2. ¿Considera Ud. que existe una adecuada relación del procedimiento administrativo y las políticas públicas, en las unidades ejecutoras? Explique.

CONSIDERO QUE DEBERIA ARTICULARSE CON UNA POLITICA DE GOBIERNO COMO SUMINISTRAR LA LOGISTICA PERTINENTE, INTERNET, COMPUTADORAS, ELECTRONICAS QUE SON HERRAMIENTAS BASICAS PARA PODER DESARROLLAR Y CONCORDAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON UNA POLITICA PUBLICA.

3. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento administrativo, y como contribuyo en la implementación y reforma de la Institución durante del estado de emergencia nacional? Explique.

LA FINALIDAD ES QUE NO HAYA VIOLOS EN EL PROCEDIMIENTO MISMO QUE SE RESOLVE EL MISMO CONFORME LO HA SEÑALADO EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN CONCORDANCIA CON LO INDICADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Explicar el impacto del procedimiento de evaluación previa sujeto al silencio administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020.

Preguntas:

4. ¿Considera Ud. que en el procedimiento de evaluación previa debe existir una prórroga de plazos como consecuencia del estado de emergencia nacional? Explique.

SI, YA QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL EN SU TOTALIDAD TRABAJANDO AL 100 % YA SEA POR TRABAJO REMOTO Y/O TRABAJO MIXTO, SITUACION QUE CONLLEVA QUE NO SE TRABAJE EN EL PLAZO DE 30 DIAS, SIN PERJUICIO DE LA CARENCIA DE LOS SERVICIOS BASICOS COMO INTERNET ENTRE OTROS.

5. ¿Desde qué momento se aplica el silencio administrativo en el procedimiento de evaluación previa, y cuál ha sido su implicancia durante el estado de emergencia nacional? Explique.

DURANTE ESTA EMERGENCIA LOS ADMINISTRADOS
EN SU DERECHO SE HAN INTERPUESTO Y
DEDUCIDO SILENCIO ADMINISTRATIVO CONFORME A
SU SOLICITUD, SIN EMBARGO LA DEMORA O RETRASO
NO HA SIDO PORQUE DESEE, EN MUCHAS OCASIONES
SON POR CARGA DE EXPEDIENTES, ENTRE OTROS

6. ¿Cuáles son los efectos del procedimiento de evaluación previa sujetos al silencio administrativo, que causa perjuicio a la administración y al administrado durante el estado de emergencia nacional? Explique.

ES UNA ALERTA PARA LA ADMINISTRACIÓN
CONSIDERO DE QUE QUIZÁ SEA POR FALTA DE
PERSONA / ENTRE OTROS FACTORES.

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Explicar el impacto del procedimiento de aprobación automática sujeto a la fiscalización posterior durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020.

Preguntas:

7. ¿Considera Ud., que en el procedimiento de aprobación automática debe prevalecer la presunción de veracidad, a efectos de favorecer al

administrado como consecuencia del estado de emergencia nacional?
Explique.


SE ENCUENTRA COMO UNO DE LOS PRINCIPIOS
EN EL TÚO DE LA LEY N° 2444, SIN EMBARGO
CONSIDERO QUE NO SE CUMPLE A LA FECHA
MUCHAS FALTEAS EN DIVERSAS SOLICITUDES
LO QUE CONLLEVA A QUE LO QUE SE PRESUME, YA SEA
CUESTIONADO.

8. ¿Cómo se ha efectuado la fiscalización posterior en el procedimiento de aprobación automática, en mérito al principio de verdad material durante el estado de emergencia nacional? Explique

A TRAVÉS DE COMUNICACIONES, POR WHATSAPP
POR CORREO ELECTRÓNICO, EN ESTE ÁMBITO UNO DE
EN CUENTAS EN LA OBLIGACIÓN DE AGENCIARSE
Y DE REALIZAR OFICINAMENTE LO QUE LA LEY NOS
FACULTA, POR TRATARSE DE UNA ENTIDAD DEL ESTADO.

9. ¿Cuáles son los efectos del procedimiento de aprobación automática sujeto a fiscalización posterior, a causa del distanciamiento social obligatorio durante el estado de emergencia nacional? Explique

EL RETARDO EN LA ATENCIÓN EN SÍ, PROCURAMOS
QUE LOS DOCUMENTOS SEAN ATENDIDOS EN EL PLAZO
SIN EMBARGO NO TODOS CONSIDERAN QUE
ESTÁN REPRESENTANDO A UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA.

	
Entrevistado	Entrevistador

Marlon Ronny Ventura Trujillo

Anexo 6: Análisis documental



Presidencia del
Consejo de Ministros

Autoridad Nacional
del Servicio Civil

Presidencia Ejecutiva

Firmado digitalmente por
MARTINEZ ORTIZ Juan Jose FAU
20477906461 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2020/06/03 13:57:21-0500

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA

N° 000039-2020-SERVIR-PE

Lima, 03 de junio de 2020

VISTO, los Informes Técnicos N° 000863-2020-SERVIR-GPGSC y 000901-2020-SERVIR-GPGSC de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023, se creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, como Organismo Técnico Especializado, rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público en la gestión de los recursos humanos;

Firmado
digitalmente por
NARAZAS RIEGA
Tania Lourdes FAU
20477906461 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2020/06/03
13:19:22-0500

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, se dispuso entre otras medidas, la habilitación a los empleadores del sector público y privado para que implementen el trabajo remoto, modificando el lugar de prestación de servicios de sus trabajadores, de tal manera que éste pueda realizarse fuera del lugar del centro de trabajo, ya sea en el hogar del trabajador o en el lugar en donde se encuentre realizando el aislamiento social obligatorio decretado por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM;

Firmado digitalmente
por
SU LAY Cynthia
Cheeny FAU
20477906461 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2020/06/03
13:17:22-0500

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 010-2020-TR, aplicable de manera supletoria a las entidades del sector público en lo que corresponda, señala que la Autoridad Nacional del Servicio Civil puede emitir disposiciones para la implementación del trabajo remoto en el sector público conforme a lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 y demás normas complementarias;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se autorizó a las entidades públicas de manera excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2020, a implementar el trabajo remoto, en los casos que fuera posible. Asimismo, se autorizó establecer modalidades mixtas de prestación de servicios, alternando días de prestación de servicios presenciales con días de trabajo remoto, autorizando además a que las entidades, hasta el 31 de diciembre de 2020, puedan asignar nuevas funciones o variar las funciones ya asignadas a sus servidores;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del precitado Decreto Legislativo N° 1505 faculta a la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, en su condición de rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, a emitir disposiciones complementarias que permitan facilitar la implementación de las medidas adoptadas en dicha disposición;

Firmado digitalmente por
MESONES CASTELO Manuel Gustavo FAU
20477906461 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2020/06/03 13:56:42-0500

Que, el literal b) del artículo 2 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, y modificatorias, señala que SERVIR, en su condición de ente rector del SAGR, tiene la siguiente atribución: "Dictar normas, directivas, opiniones y reglas en materia del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos con carácter vinculante. De igual

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <http://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentosSERVIR> e ingresando la siguiente clave: HDHU740

EL PERÚ PRIMERO



Presidencia del
Consejo de Ministros

Autoridad Nacional
del Servicio Civil

Presidencia Ejecutiva

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

manera el literal c) del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1023 señala que SERVIR tiene por función dictar normas técnicas para el desarrollo e implementación del Sistema, incluyendo la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de las entidades públicas;

Que, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, órgano encargado de diseñar y desarrollar el marco político y normativo del sistema administrativo de gestión de los recursos humanos al servicio del Estado, a través de los documentos del visto, propuso la Directiva para la aplicación del Trabajo Remoto, cuyo objeto es desarrollar las normas complementarias para la aplicación del trabajo remoto regulado por el Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19;

Que, el Consejo Directivo de SERVIR en la Sesión N° 011-2020, del 2 de junio de 2020, aprobó la Directiva para la aplicación del Trabajo Remoto, disponiendo que la Presidencia Ejecutiva emita la Resolución que formalice dicho acuerdo;

Con los vistos de la Gerencia General, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil y la Oficina de Asesoría Jurídica y;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil; el Decreto de Urgencia 026-2020 – Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; el Decreto Legislativo N° 1505 – Decreto Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19; y, el Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado por Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Formalizar el acuerdo de Consejo Directivo mediante el cual se aprobó la "Directiva para la aplicación del Trabajo Remoto", que en anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo en el diario oficial "El Peruano"; y, de la presente Resolución y su anexo en el Portal institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado digitalmente por
MESONES CASTELO Manuel Gustavo FAU
20477906461 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2020/06/03 13:56:42-0500

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ORTIZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <http://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR> e ingresando la siguiente clave: HDHU740

EL PERÚ PRIMERO



Presidencia
del Consejo de Ministros

Autoridad Nacional
del Servicio Civil

DIRECTIVA PARA LA APLICACIÓN DEL TRABAJO REMOTO

Artículo 1. Objeto

La presente directiva tiene por objeto desarrollar las normas complementarias para la aplicación del trabajo remoto regulado por el Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Artículo 2. Base normativa

- a) Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.
- b) Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
- c) Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y modificatorias.
- d) Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
- e) Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

La presente directiva resulta de aplicación a todas las entidades públicas señaladas en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1023.

Firmado digitalmente por
SU LAY Cynthia
Cheenyi FAU
20477906461 hard
Motivo: Soy el autor
del documento
Fecha: 2020/08/01
10:44:17-0500

Artículo 4. Trabajo remoto

- 4.1 Para efectos de la presente directiva, resulta de aplicación la definición de trabajo remoto contenida en el artículo 16 del Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional (en adelante, DU N° 026-2020).
- 4.2 El trabajo remoto no se limita a los servicios que pueden ser prestados mediante medios informáticos, de telecomunicaciones o análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de servicio que no requiera la presencia física del/de la servidor/a en la entidad pública.
- 4.3 El trabajo remoto es compatible con el trabajo presencial. Las entidades públicas determinan el grupo de servidores/as que realizan trabajo remoto de manera integral o bajo modalidades mixtas de prestación del servicio. Para efectuar dicha identificación, se toma en cuenta la pertenencia del/de la servidor/a al grupo de riesgo, las funciones o naturaleza de su puesto y las disposiciones que emita la autoridad sanitaria nacional.

Artículo 5. Obligaciones del/de la servidor/a

- 5.1 Son obligaciones del/de la servidor/a aquellas mencionadas en el numeral 18.2 del artículo 18 del DU N° 026-2020.
- 5.2 Las coordinaciones de carácter laboral a que alude el numeral 18.2.3 del artículo 18 del DU N° 026-2020 cautelan que el/la servidor/a goce del descanso y disfrute de su tiempo libre.
- 5.3 El/La servidor/a que advierta alguna incidencia que dificulte o repercuta negativamente en la realización de su trabajo remoto debe comunicarla, en su oportunidad, a su jefe/a inmediato/a



o a quien se encuentre a cargo de su equipo funcional, a efectos que este/a evalúe e implemente el tratamiento que sea más adecuado.

Artículo 6. Obligaciones de la entidad pública

- 6.1 Son obligaciones de la entidad pública, en su condición de empleador, aquellas mencionadas en el numeral 18.1 del artículo 18 del DU N° 026-2020.
- 6.2 La comunicación a que se refiere el numeral 18.1.3 del artículo 18 del DU N° 026-2020 se realiza prioritariamente a través de soportes digitales siendo viable utilizar soportes físicos cuando la entidad pública no tenga a su disposición medios digitales.

Artículo 7. Variación excepcional de funciones del/de la servidor/a

- 7.1 La entidad pública, en su condición de empleador, podrá optar por la variación excepcional de funciones del/de la servidor/a regulada por la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, con el fin de posibilitar que el/la servidor/a realice trabajo remoto. Esta situación es comunicada al/a la servidor/a por la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces.
- 7.2 La variación excepcional de funciones agrupa a los/as servidores/as de la siguiente manera:
- a) Servidores/as a quienes se les ha efectuado la variación excepcional de funciones y se mantienen en el órgano o unidad orgánica de origen. Conservan el/la mismo/a jefe/a inmediato/a y/o el/la titular del órgano o unidad orgánica.
 - b) Servidores/as a quienes se les ha efectuado la variación excepcional de sus funciones para realizar funciones de un órgano o unidad orgánica distintas a la de su origen. En este supuesto, el/la jefe/a inmediato/a y el/la titular del órgano o unidad orgánica de la entidad pública son los que correspondan al órgano o unidad orgánica receptora.
- 7.3 Los/las servidores/as a quienes no se les ha efectuado la variación excepcional de funciones se mantienen en el órgano o unidad orgánica de origen y conservan el/la mismo/a jefe/a inmediato/a y/o el/la titular del órgano o unidad orgánica.

Firmado digitalmente por
SU LAY Cynthia
Cheenyi FAU
20477906461 hard
Motivo: Soy el autor
del documento
Fecha: 2020/08/01
10:44:17-0500

Artículo 8. Acciones a cargo de la entidad pública

- 8.1 Las entidades públicas cuya estructura permita diferenciar entre jefe inmediato, o quien se encuentre a cargo de equipos funcionales, y titular del órgano o unidad orgánica realizan lo siguiente:
- a) Son acciones a cargo del/de la jefe/a inmediato/a o quien se encuentre a cargo de equipos funcionales:
 - (i) Asignar tareas o actividades a los/as servidores/as que realizan trabajo remoto, a través de medios o canales prioritariamente, informáticos, digitales o telefónicos.
 - (ii) Supervisar el cumplimiento de las tareas asignadas al/a la servidor/a.
 - b) Son acciones a cargo del/de la titular del órgano o unidad orgánica
 - (i) Validar la realización del trabajo remoto que efectúe el/la servidor/a sujeto/a a esta modalidad.
 - (ii) Identificar a los/las servidores/as que no pueden realizar trabajo remoto en su propio órgano o unidad orgánica de origen, con el fin de comunicarlo a la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, para que evalúe la procedencia de la variación excepcional de funciones en otro órgano o unidad orgánica de la entidad pública. Para



dichos efectos, se requiere la conformidad del/de la titular del órgano o unidad orgánica receptora.

(iii) Remitir a la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, una lista de servidores/as donde se identifique a quienes: (a) realizan trabajo remoto de manera integral o bajo modalidades mixtas de prestación del servicio, detallando si se ha efectuado o no variación excepcional de funciones (b) se encuentran bajo licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior, (c) optan por otros mecanismos compensatorios, (d) se encuentran realizando cooperación laboral entre entidades públicas.

(iv) Comunicar a la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, cualquier modificación que se efectúe a la lista detallada en el punto anterior.

8.2 En las entidades públicas cuya estructura orgánica no permita diferenciar entre jefe/a inmediato/a o quien se encuentre a cargo de equipos funcionales y titular del órgano o unidad orgánica, las acciones detalladas en el literal a) del numeral 8.1 recaen íntegramente en el/la titular del órgano o unidad orgánica.

8.3 Son acciones a cargo del/de la titular de la Oficina de Recursos Humanos, o de quien haga sus veces:

- a) Solicitar al/a la titular del órgano o unidad orgánica la identificación de servidores/as que realizan trabajo remoto de manera integral o bajo modalidades mixtas de prestación del servicio.
- b) Recibir y canalizar las solicitudes, reclamos o quejas formuladas de manera virtual por parte de los/as servidores/as que realizan trabajo remoto.
- c) Consolidar la información detallada en el ítem iii del literal b) del numeral 8.1 del artículo 8 de la presente Directiva que es remitida por cada uno de los/las titulares de los órganos o unidades orgánicas de la entidad.
- d) Comunicar a la Autoridad Nacional del Servicio Civil la situación laboral de todos/as los/as servidores/as de la entidad. Dicha comunicación se efectúa cada dos meses, el último día hábil de cada mes durante el año 2020. Para estos efectos, se utiliza el “Anexo: Situación laboral de los servidores”.

Firmado digitalmente por
SU LAY Cynthia
Cheenyi FAU
20477906461 hard
Motivo: Soy el autor
del documento
Fecha: 2020/08/01
10:44:17-0500

Artículo 9. Incumplimiento de obligaciones

9.1 El incumplimiento de las obligaciones de los/as servidores/as se tramita de acuerdo con las normas que regulan el procedimiento administrativo disciplinario.

9.2 El incumplimiento de obligaciones no genera descuentos en sus compensaciones o remuneraciones.

9.3 La suspensión, como sanción del procedimiento administrativo disciplinario, conforme al artículo 102 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, implica el no goce de compensaciones por el tiempo de la vigencia de la suspensión.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Obligaciones, deberes y responsabilidades del/de la servidor/a

Las obligaciones, deberes y responsabilidades del/de la servidor/a que realice trabajo remoto se sujetan a lo siguiente:



1. Si son servidores/as a quienes no se les ha efectuado la variación excepcional de funciones y se mantienen en el órgano o unidad orgánica de origen, conservan las demás obligaciones, deberes y responsabilidades a las cuales se encontraban sujetos cuando realizaban trabajo presencial, siempre que no estén directamente vinculados con la asistencia física al centro de labores.
2. Si son servidores/as a quienes se les ha efectuado la variación excepcional de funciones, pero se mantienen en el órgano o unidad orgánica de origen, se sujetan a las nuevas funciones asignadas y conservan las obligaciones, deberes y responsabilidades comunes a los/as servidores/as de su órgano o unidad orgánica de origen y de la propia entidad pública, siempre que no estén directamente vinculados con la asistencia física al centro de labores.
3. Si son servidores/as a quienes se les ha efectuado la variación excepcional de sus funciones para realizar funciones de un órgano o unidad orgánica distinto a la de origen, se sujetan a las nuevas funciones asignadas y asumen las obligaciones, deberes y responsabilidades comunes a los/as servidores/as del órgano o unidad orgánica receptora y de la propia entidad pública, siempre que no estén directamente vinculados con la asistencia física al centro de labores.

Firmado digitalmente por
SU LAY Cynthia
Cheenyi FAU
20477906461 hard
Motivo: Soy el autor
del documento
Fecha: 2020/08/01
10:44:17-0500

PODER EJECUTIVO**DECRETOS LEGISLATIVOS****DECRETO LEGISLATIVO
N° 1412**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30823, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado, por el plazo de sesenta (60) días calendario;

Que, el literal d) numeral 5 del artículo 2, de la citada Ley faculta al Poder Ejecutivo para legislar en materia de modernización del Estado, a fin de implementar servicios y espacios compartidos por parte de las entidades públicas, así como establecer disposiciones para el gobierno digital y las plataformas multiservicios y de trámites que faculden a las entidades públicas para delegar la gestión y resolución de actos administrativos a otras entidades públicas bajo criterios que prioricen eficiencia, productividad, oportunidad y mejora de servicios para el ciudadano y la empresa; o a terceros, en las etapas previas a la emisión de la resolución que contenga la decisión final de la entidad;

Que, el ítem d.3) del literal d) del numeral 5 del artículo 2 de la citada norma establece la facultad de legislar para establecer el marco normativo para promover el despliegue transversal de las tecnologías digitales en las entidades del Estado; a fin de mejorar el alcance, condiciones, la prestación y el acceso de los ciudadanos a los servicios que presta el Estado;

Que, la Política 35 del Acuerdo Nacional, sobre Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento, señala en el literal e) que el Estado fomentará la modernización del Estado, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con un enfoque descentralista, planificador e integral;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 086-2015-PCM, se declara de interés nacional las acciones, actividades e iniciativas desarrolladas en el marco del proceso de vinculación del Perú con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e implementación del Programa País, y crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente para promover las acciones de seguimiento del referido proceso, y comprende la participación del Estado peruano en las actividades previstas en el Acuerdo y Memorando de Entendimiento suscritos entre la OCDE y el Gobierno del Perú, así como todas las demás actividades relacionadas con la organización, promoción, impulso y apoyo al referido proceso;

Que, las tecnologías digitales y el gobierno digital son conceptos integrados en las actividades, lenguaje y estructuras de la sociedad actual, y hacen parte del proceso de vinculación del Perú con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización que entiende su uso estratégico como parte integral del diseño de políticas y estrategias de modernización del gobierno, con la finalidad de crear servicios digitales de valor, seguros, confiables y accesibles para los ciudadanos y sociedad en general, lo cual se sustenta en un ecosistema compuesto por actores del sector público, sector privado, academia y otros interesados, quienes apoyan en la implementación de iniciativas y acciones para diseño, creación, producción de datos, servicios y contenidos, asegurando el pleno respeto los derechos de las personas en el entorno digital;

Que mediante Decreto Legislativo N° 604, se aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, que crea el Sistema

Nacional de Informática el cual tiene como objetivos normar las actividades de informática; coordinar, integrar y racionalizar las actividades de informática; y promover la capacitación, investigación y desarrollo de las actividades de informática;

Que, conforme lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-2017-PCM, la Secretaría de Gobierno Digital - SEGDI es el órgano de línea, con autoridad técnico normativa a nivel nacional, responsable de formular y proponer políticas nacionales y sectoriales, planes nacionales, normas, lineamientos y estrategias en materia de informática y de Gobierno Electrónico. Asimismo, es el órgano rector del Sistema Nacional de Informática;

Que, dentro de este contexto, es necesario adecuar la gobernanza y gestión del gobierno digital en el Estado Peruano y mejorar la articulación en los tres niveles de gobierno, para lo cual resulta indispensable establecer el marco normativo que regule y habilite a las entidades del Estado integrar de manera intensiva las tecnologías digitales para la prestación de servicios digitales en condiciones seguras, confiables, transparentes, interoperables en un entorno de gobierno digital;

De conformidad con lo establecido en el literal d) del numeral 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

**DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE
GOBIERNO DIGITAL****TÍTULO I****DISPOSICIONES GENERALES****Artículo 1.- Objeto**

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

2.1. La presente Ley es de aplicación a toda entidad que forma parte de la Administración Pública a que se refiere el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Sus regulaciones también alcanzan a las personas jurídicas o naturales que, por mandato legal, encargo o relación contractual ejercen potestades administrativas, y por tanto su accionar se encuentra sujeto a normas de derecho público, en los términos dispuestos por la Presidencia del Consejo de Ministros.

2.2. En el caso de las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado, su aplicación se da en todo aquello que le resulte aplicable.

Artículo 3.- Definiciones

Para efectos de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones:

1. **Tecnologías Digitales.-** Se refieren a las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC, incluidos Internet, las tecnologías y dispositivos móviles, así como la analítica de datos utilizados para mejorar la generación, recopilación, intercambio, agregación, combinación, análisis, acceso, búsqueda y presentación de contenido digital, incluido el desarrollo de servicios y aplicaciones aplicables a la materia de gobierno digital.

2. **Entorno Digital.-** Es el dominio o ámbito habilitado por las tecnologías y dispositivos digitales,

generalmente interconectados a través de redes de datos o comunicación, incluyendo el Internet, que soportan los procesos, servicios, infraestructuras y la interacción entre personas.

3. **Servicio Digital.-** Es aquel provisto de forma total o parcial a través de Internet u otra red equivalente, que se caracteriza por ser automático, no presencial y utilizar de manera intensiva las tecnologías digitales, para la producción y acceso a datos y contenidos que generen valor público para los ciudadanos y personas en general.

4. **Canal Digital.-** Es el medio de contacto digital que disponen las entidades de la Administración Pública a los ciudadanos y personas en general para facilitar el acceso a toda la información institucional y de trámites, realizar y hacer seguimiento a servicios digitales, entre otros. Este canal puede comprender páginas y sitios web, redes sociales, mensajería electrónica, aplicaciones móviles u otros.

5. **Ciudadano Digital.-** Es aquel que hace uso de las tecnologías digitales y ejerce sus deberes y derechos en un entorno digital seguro.

6. **Gobernanza Digital.-** Es el conjunto de procesos, estructuras, herramientas y normas que nos permiten dirigir, evaluar y supervisar el uso y adopción de las tecnologías digitales en la organización.

7. **Arquitectura Digital.-** Es el conjunto de componentes, lineamientos y estándares, que desde una perspectiva integral de la organización permiten alinear los sistemas de información, datos, seguridad e infraestructura tecnológica con la misión y objetivos estratégicos de la entidad, de tal manera que se promuevan la colaboración, interoperabilidad, escalabilidad, seguridad y el uso optimizado de las tecnologías digitales en un entorno de gobierno digital.

Artículo 4.- Finalidad

La presente Ley tiene por finalidad:

4.1 Mejorar la prestación y acceso de servicios digitales en condiciones interoperables, seguras, disponibles, escalables, ágiles, accesibles, y que faciliten la transparencia para el ciudadano y personas en general.

4.2 Promover la colaboración entre las entidades de la Administración Pública, así como la participación de ciudadanos y otros interesados para el desarrollo del gobierno digital y sociedad del conocimiento.

Artículo 5.- Principios rectores

Las disposiciones contenidas en la presente Ley, así como su aplicación se rigen por los siguientes principios rectores:

5.1 **Especialidad.-** La presente norma es aplicable a los servicios digitales prestados por las entidades de la Administración Pública en un entorno de gobierno digital, sin perjuicio de lo regulado para los procedimientos administrativos u otros que se rigen por su propia normatividad.

5.2 **Equivalencia Funcional.-** El ejercicio de la identidad digital para el uso y prestación de servicios digitales confiere y reconoce a las personas las mismas garantías que otorgan los modos tradicionales de relacionarse entre privados y/o en la relación con las entidades de la Administración Pública.

5.3 **Privacidad desde el Diseño.-** En el diseño y configuración de los servicios digitales se adoptan las medidas preventivas de tipo tecnológico, organizacional, humano y procedimental.

5.4 **Igualdad de Responsabilidades.-** Las entidades de la Administración Pública responden por los actos realizados a través de canales digitales de la misma manera y con iguales responsabilidades que por los realizados a través de medios presenciales.

5.5 **Usabilidad.-** En el diseño y configuración de los servicios digitales se propenderá a que su uso resulte de fácil manejo para los ciudadanos y personas en general.

5.6 **Cooperación Digital.-** Prima el intercambio de datos e información, la interoperabilidad de los sistemas y soluciones para la prestación conjunta de servicios digitales.

5.7 **Digital desde el Diseño.-** Los servicios, de manera preferente, progresiva y cuando corresponda, se

diseñan y modelan para que sean digitales de principio a fin.

5.8 **Proporcionalidad.-** Los requerimientos de seguridad y autenticación de los servicios digitales prestados por las entidades de la Administración Pública deben ser proporcionales al nivel de riesgo asumido en la prestación del mismo.

5.9 **Datos Abiertos por Defecto.-** Los datos se encuentran abiertos y disponibles de manera inmediata, sin comprometer el derecho a la protección de los datos personales de los ciudadanos. Ante la duda corresponde a la Autoridad de Transparencia definirlo.

5.10 **Nivel de protección adecuado para los datos personales.-** El tratamiento de los datos personales debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.

TÍTULO II

GOBIERNO DIGITAL

CAPÍTULO I

GOBIERNO DIGITAL

Artículo 6.- Gobierno Digital

6.1. El gobierno digital es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la Administración Pública para la creación de valor público. Se sustenta en un ecosistema compuesto por actores del sector público, ciudadanos y otros interesados, quienes apoyan en la implementación de iniciativas y acciones de diseño, creación de servicios digitales y contenidos, asegurando el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos y personas en general en el entorno digital.

6.2. Comprende el conjunto de principios, políticas, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados por las entidades de la Administración Pública en la gobernanza, gestión e implementación de tecnologías digitales para la digitalización de procesos, datos, contenidos y servicios digitales de valor para los ciudadanos.

Artículo 7.- Objetivos del Gobierno Digital

Los objetivos del gobierno digital son:

7.1 Normar las actividades de gobernanza, gestión e implementación en materia de tecnologías digitales, identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos.

7.2 Coordinar, integrar y promover la colaboración entre las entidades de la Administración Pública.

7.3 Promover la investigación y desarrollo en la implementación de tecnologías digitales, identidad digital, servicios digitales, interoperabilidad, seguridad digital y datos.

7.4 Promover y orientar la formación y capacitación en materia de gobierno digital y tecnologías digitales en todos los niveles de gobierno.

Artículo 8.- Ente Rector en materia de Gobierno Digital

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, es el ente rector en materia de gobierno digital que comprende tecnologías digitales, identidad digital, interoperabilidad, servicio digital, datos, seguridad digital y arquitectura digital. Dicta las normas y establece los procedimientos en materia de gobierno digital y, es responsable de su operación y correcto funcionamiento.

Artículo 9.- Funciones del ente rector en materia de gobierno digital

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, en su calidad de ente rector tiene las siguientes atribuciones:

9.1 Programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la aplicación de la materia de gobierno digital.

9.2 Elaborar y proponer normas reglamentarias y complementarias que regulan la materia de gobierno digital.

9.3 Elaborar lineamientos, procedimientos, metodologías, modelos, directivas u otros estándares de obligatorio cumplimiento para la implementación de las materias de gobierno digital.

9.4 Emitir opinión vinculante sobre el alcance, interpretación e integración de normas que regulan la materia de gobierno digital.

9.5 Emitir opinión previa a fin de validar técnicamente proyectos de tecnologías digitales de carácter transversal en materia de interoperabilidad, seguridad digital, identidad digital, datos, arquitectura digital o aquellos destinados a mejorar la prestación de servicios digitales.

9.6 Brindar apoyo técnico a las entidades públicas en la gestión e implementación de tecnologías digitales.

9.7 Definir los alcances del marco normativo en materia de gobierno digital.

9.8 Supervisar y fiscalizar, cuando corresponda, el cumplimiento del marco normativo en materia de gobierno digital.

9.9 Promover mecanismos que aseguren la identidad digital como pilar fundamental para la inclusión digital y la ciudadanía digital.

9.10 Promover y gestionar la implementación de proyectos de implementación de tecnologías digitales u otros mecanismos destinados a mejorar la prestación de servicios digitales, en coordinación con las entidades públicas, según corresponda.

9.11 Promover la digitalización de los procesos y servicios a partir del uso e implementación de tecnologías digitales.

9.12 Realizar acciones de coordinación y articulación con representantes de la administración pública, ciudadanos u otros interesados con la finalidad de optimizar el uso de tecnologías digitales para el desarrollo del gobierno digital y tecnologías digitales.

CAPÍTULO II

IDENTIDAD DIGITAL

Artículo 10.- De la Identidad Digital

10.1 La identidad digital es aquel conjunto de atributos que individualiza y permite identificar a una persona en entornos digitales.

10.2 Los atributos de la identidad digital son otorgados por distintas entidades de la Administración Pública que, en su conjunto, caracterizan al individuo.

Artículo 11.- Marco de Identidad Digital del Estado Peruano

El Marco de Identidad Digital del Estado Peruano está constituido por lineamientos, especificaciones, guías, directivas, estándares e infraestructura de tecnologías digitales, que permiten de manera efectiva la identificación y autenticación de los ciudadanos y personas en general cuando acceden a los servicios digitales.

Artículo 12.- Credencial de Identidad Digital

Es la representación de una identidad digital que comprende los atributos inherentes a la persona definidos en el Marco de Identidad Digital del Estado Peruano, a fin de facilitar la autenticación digital.

Artículo 13.- Identificación Digital

La identificación digital es el procedimiento de reconocimiento de una persona como distinta de otras, en el entorno digital. Las entidades de la Administración Pública deben establecer los procedimientos para identificar a las personas que accedan a los servicios digitales.

Artículo 14.- Autenticación Digital

La autenticación digital es el procedimiento de verificación de la identidad digital de una persona, mediante el cual se puede afirmar que es quien dice ser.

Para el acceso a un servicio digital las entidades de la Administración Pública deben adoptar los mecanismos o procedimientos de autenticación digital, considerando los niveles de seguridad a establecerse en la norma reglamentaria.

Artículo 15.- Inclusión digital

La inclusión digital es el acceso y uso de los servicios digitales por parte de los ciudadanos a través de su identidad digital, promoviendo la ciudadanía digital. Para tal fin las entidades de la Administración Pública adoptan las disposiciones que emite el ente rector para la prestación de dichos servicios.

Artículo 16.- Documento Nacional de Identidad electrónico (DNle)

El Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNle) es una credencial de identidad digital, emitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, que acredita presencial y no presencialmente la identidad de las personas.

Artículo 17.- Uso del Documento Nacional de Identidad electrónico

Los funcionarios y servidores públicos al servicio de las entidades de la Administración Pública pueden hacer uso del Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNle) para el ejercicio de sus funciones en los actos de administración, actos administrativos, procedimientos administrativos y servicios digitales.

El DNle sólo otorga garantía sobre la identificación de la persona natural, mas no en el cargo, rol, atribuciones o facultades que ostenta un funcionario o servidor de una entidad de la Administración Pública; dicho funcionario o servidor público es el responsable de gestionar en su entidad las autorizaciones de acceso y asignación de roles, atribuciones o facultades para hacer uso del indicado DNle en los sistemas de información que hagan uso del mismo.

CAPÍTULO III

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES

Artículo 18.- Garantías para la prestación de servicios digitales

Las entidades de la Administración Pública, de manera progresiva y cuando corresponda, deben garantizar a las personas el establecimiento y la prestación de los servicios digitales, comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, debiendo para tal efecto:

18.1 Reconocer y aceptar el uso de la identidad digital de todas las personas según lo regulado en la presente Ley.

18.2 Garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de los servicios digitales con la aplicación de los controles de seguridad que correspondan en la prestación de dichos servicios conforme a las disposiciones contenidas en la presente Ley y en la normatividad vigente sobre la materia.

18.3 Capacitar en temas en materia de firmas electrónicas, firmas y certificados digitales, protección de datos personales, interoperabilidad, arquitectura digital, seguridad digital, datos abiertos y gobierno digital.

18.4 Facilitar el acceso a la información requerida por otra entidad de la Administración Pública, sobre los datos de las personas que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, únicamente para el ejercicio de sus funciones en el ámbito de sus competencias. Queda excluida del intercambio la información que pueda afectar la seguridad nacional o aquella relacionada con la legislación sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, o la que expresamente sea excluida por Ley.

18.5 Implementar servicios digitales haciendo un análisis de la arquitectura digital y rediseño funcional.

18.6 Considerar la implementación de pagos a través de canales digitales.

18.7 Facilitar a las personas información detallada, concisa y entendible sobre las condiciones de tratamiento de sus datos personales.

18.8 Garantizar la conservación de las comunicaciones y documentos generados a través de canales digitales en las mismas o mejores condiciones que aquellas utilizadas por los medios tradicionales.

18.9 Garantizar que en el diseño y configuración de los servicios digitales se adoptan las medidas técnicas,



organizativas y legales para la debida protección de datos personales y la confidencialidad de las comunicaciones.

Artículo 19.- Conservación de los documentos electrónicos firmados digitalmente

Para conservar documentos electrónicos y garantizar la perdurabilidad en el tiempo de la firma digital incorporada en aquellos se emplean sellos de tiempo y mecanismos basados en estándares internacionalmente aceptados que permitan verificar el estado del certificado digital asociado.

Cuando dicho tipo de documentos electrónicos, y sus respectivos formatos que aseguran la característica de perdurabilidad de la firma digital, deban ser conservados de modo permanente, éstos se archivarán observando las disposiciones legales sobre la materia.

Artículo 20.- Sede Digital

La sede digital es un tipo de canal digital, a través del cual pueden acceder los ciudadanos y personas en general a un catálogo de servicios digitales, realizar trámites, hacer seguimiento de los mismos, recepcionar y enviar documentos electrónicos, y cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada entidad de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno.

Artículo 21.- Registro Digital

Las sedes digitales de las entidades de la Administración Pública cuentan con un registro digital para recibir documentos, solicitudes, escritos y comunicaciones electrónicas dirigidas a dicha entidad.

Artículo 22.- Domicilio Digital

Es uno de los atributos de la identidad digital que se constituye en el domicilio habitual de un ciudadano en el entorno digital, el cual es utilizado por las entidades de la Administración Pública para efectuar comunicaciones o notificaciones.

CAPÍTULO IV

GOBERNANZA DE DATOS

Artículo 23.- Datos

23.1 Los datos son la representación dimensionada y descifrable de hechos, información o concepto, expresada en cualquier forma apropiada para su procesamiento, almacenamiento, comunicación e interpretación.

23.2 Las entidades de la Administración Pública administran sus datos como un activo estratégico, garantizando que estos se recopilen, procesen, publiquen, almacenen y pongan a disposición durante el tiempo que sea necesario y cuando sea apropiado, considerando las necesidades de información, riesgos y la normatividad vigente en materia de gobierno digital, seguridad digital, transparencia, protección de datos personales y cualquier otra vinculante.

Artículo 24.- Infraestructura Nacional de Datos

La Infraestructura Nacional de Datos se define como el conjunto articulado de políticas, normas, medidas, procesos, tecnologías digitales, repositorios y bases de datos destinadas a promover la adecuada recopilación, procesamiento, publicación, almacenamiento y puesta a disposición de los datos que gestionan las entidades de la Administración Pública.

Artículo 25.- Marco de Gobernanza y Gestión de Datos del Estado Peruano

El Marco de Gobernanza y Gestión de Datos del Estado Peruano está constituido por instrumentos técnicos y normativos que establecen los requisitos mínimos que las entidades de la Administración Pública deben implementar conforme a su contexto legal, tecnológico y estratégico para asegurar un nivel básico y aceptable para la recopilación, procesamiento, publicación, almacenamiento y apertura de los datos que administre.

CAPÍTULO V

INTEROPERABILIDAD

Artículo 26.- Interoperabilidad

La Interoperabilidad es la capacidad de interactuar que tienen las organizaciones diversas y dispares para alcanzar objetivos que hayan acordado conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de información y conocimientos, a través de los procesos y el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de información.

Artículo 27.- Marco de Interoperabilidad del Estado Peruano

El Marco de Interoperabilidad del Estado Peruano está constituido por políticas, lineamientos, especificaciones, estándares e infraestructura de tecnologías digitales, que permiten de manera efectiva la colaboración entre entidades de la Administración Pública para el intercambio de información y conocimiento, para el ejercicio de sus funciones en el ámbito de sus competencias, en la prestación de servicios digitales inter-administrativos de valor para el ciudadano provisto a través de canales digitales.

Artículo 28.- Gestión del Marco de Interoperabilidad del Estado Peruano

El Marco de Interoperabilidad del Estado Peruano se gestiona a través de los siguientes niveles:

28.1. **Interoperabilidad a nivel organizacional:** Se ocupa del alineamiento de objetivos, procesos, responsabilidades y relaciones entre las entidades de la Administración Pública para intercambiar datos e información para el ejercicio de sus funciones en el ámbito de sus competencias.

28.2 **Interoperabilidad a nivel semántico:** Se ocupa del uso de los datos y la información de una entidad garantizando que el formato y significado preciso de dichos datos e información a ser intercambiada pueda ser entendido por cualquier aplicación de otra entidad de la Administración Pública. Dichas entidades deben adoptar los estándares definidos por el ente rector para el intercambio de datos e información.

28.3. **Interoperabilidad a nivel técnico:** Se ocupa de los aspectos técnicos relacionados con las interfaces, la interconexión, integración, intercambio y presentación de datos e información, así como definir los protocolos de comunicación y seguridad. Es ejecutado por personal de las Oficinas de Informática o las que hagan sus veces de las entidades de la Administración Pública, de acuerdo con los estándares definidos por el ente rector.

28.4. **Interoperabilidad a nivel legal:** Se ocupa de la adecuada observancia de la legislación y lineamientos técnicos con la finalidad de facilitar el intercambio de datos e información entre las diferentes entidades de la Administración Pública, así como el cumplimiento de los temas concernientes con el tratamiento de la información que se intercambia.

Artículo 29.- Reutilización de Software

Las entidades de la Administración Pública titulares de Software Público Peruano, desarrollado mediante la contratación de terceros o por personal de la entidad para soportar sus procesos o servicios, adoptan las medidas necesarias a fin de obtener la titularidad exclusiva sobre los derechos patrimoniales del referido Software Público Peruano.

Todas las entidades de la Administración Pública deben compartir Software Público Peruano bajo licencias libres o abiertas que permitan (i) usarlo o ejecutarlo, (ii) copiarlo o reproducirlo, (iii) acceder al código fuente, código objeto, documentación técnica y manuales de uso, (iv) modificarlo o transformarlo en forma colaborativa, y (v) distribuirlo, en beneficio del Estado Peruano.

CAPÍTULO VI

SEGURIDAD DIGITAL

Artículo 30.- De la Seguridad Digital

La seguridad digital es el estado de confianza en el entorno digital que resulta de la gestión y aplicación de

un conjunto de medidas proactivas y reactivas frente a los riesgos que afectan la seguridad de las personas, la prosperidad económica y social, la seguridad nacional y los objetivos nacionales en dicho entorno. Se sustenta en la articulación con actores del sector público, sector privado y otros quienes apoyan en la implementación de controles, acciones y medidas.

Artículo 31.- Marco de Seguridad Digital del Estado Peruano

El Marco de Seguridad Digital del Estado Peruano se constituye en el conjunto de principios, modelos, políticas, normas, procesos, roles, tecnología y estándares mínimos que permitan preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información en el entorno digital administrado por las entidades de la Administración Pública.

Artículo 32.- Gestión del Marco de Seguridad Digital del Estado Peruano

El Marco de Seguridad Digital del Estado Peruano tiene los siguientes ámbitos:

a. Defensa: El Ministerio de Defensa (MINDEF) en el marco de sus funciones y competencias dirige, supervisa y evalúa las normas en materia de ciberdefensa.

b. Inteligencia: La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) como autoridad técnica normativa en el marco de sus funciones emite, supervisa y evalúa las normas en materia de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital en el ámbito de esta competencia.

c. Justicia: El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), el Ministerio del Interior (MININTER), la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Poder Judicial (PJ) en el marco de sus funciones y competencias dirigen, supervisan y evalúan las normas en materia de ciberdelincuencia.

d. Institucional: Las entidades de la Administración Pública deben establecer, mantener y documentar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI).

Artículo 33.- Articulación de la Seguridad Digital con la Seguridad de la Información

El Marco de Seguridad Digital del Estado Peruano se articula y sustenta en las normas, procesos, roles, responsabilidades y mecanismos regulados e implementados a nivel nacional en materia de Seguridad de la Información.

La Seguridad de la Información se enfoca en la información, de manera independiente de su formato y soporte. La seguridad digital se ocupa de las medidas de la seguridad de la información procesada, transmitida, almacenada o contenida en el entorno digital, procurando generar confianza, gestionando los riesgos que afecten la seguridad de las personas y la prosperidad económica y social en dicho entorno.

Artículo 34.- Financiamiento

La implementación de lo establecido en el presente Decreto Legislativo se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 35.- Refrendo

El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Reglamentación

La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante Decreto Supremo, aprueba el Reglamento del presente Decreto Legislativo en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días, contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Segunda.- Normas sobre Identidad Digital Nacional El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

(RENIEC) en el ámbito de sus funciones y competencias emitirá las normas que resulten pertinentes para el otorgamiento, registro y acreditación de la identidad digital nacional. La Identidad Digital Nacional proporciona el mismo valor legal que el Documento Nacional de Identidad.

Tercera.- Fortalecimiento de capacidades

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) en el ámbito de sus funciones y competencias, en coordinación con la Secretaría de Gobierno Digital, promueve el fortalecimiento de capacidades en materia de gobierno digital y tecnologías digitales a los funcionarios y servidores de las entidades de la Administración Pública.

Cuarta.- Registro de Centros de Acceso Público

Las entidades de la Administración Pública que implementan progresivamente, en función a sus recursos y capacidades, espacios o centros de acceso público, previstos en la Ley de Promoción de Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, con miras a fortalecer capacidades y facilitar el proceso de inclusión digital de los ciudadanos y personas en general el acceso a los servicios digitales deben comunicarlo a la Secretaría de Gobierno Digital para el registro respectivo.

Entiéndase que toda referencia a los Centros de Acceso Ciudadano previstos en el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales se entenderá hecha al Centro de Acceso Público previsto en la presente norma.

Quinta.- Vigencia

El presente Decreto Legislativo entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, con excepción de lo previsto en los artículos 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 31 y numerales 18.1, 18.5, 18.6 y 18.8 del artículo 18, que entrarán en vigor con la norma reglamentaria correspondiente.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Credencial de Identidad Digital

Las entidades de la Administración Pública pueden hacer uso de los mecanismos existentes para la autenticación de las personas en entornos digitales dentro de un contexto determinado, conforme a los lineamientos, progresividad y plazos a establecerse en el reglamento del presente Decreto Legislativo.

Segunda.- Servicios Digitales

Las entidades de la Administración Pública que a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo hayan implementado y brinden servicios digitales adoptan y adecuan las disposiciones de los mismos de manera progresiva conforme a sus recursos, capacidades, lineamientos y plazos a establecerse en el reglamento de la presente Ley, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 5.1 del artículo 5 del presente Decreto Legislativo.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Res. Adm. N° 000344-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ.- Prorrogan y disponen el funcionamiento de diversos órganos jurisdiccionales de emergencia de la CSJ-LIMA NORTE y dictan diversas disposiciones **15**

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Circular N° 0018-2020-BCRP.- Modifican la Circular N° 0018-2019-BCRP respecto a la aplicación de las tasas máximas de interés compensatorio y moratorio que fija el Banco Central, para adecuarla al Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups **17**

FUERO MILITAR

POLICIAL

Res. Adm. N° 011-2020-FMP/CE/SG.- Suspenden actividades jurisdiccionales, fiscales y administrativas en el Fuero Militar Policial y dictan diversas disposiciones **18**

SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS

Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Res. N° 1315-2020.- Establecen disposiciones especiales para la constitución de provisiones por riesgo de crédito para la parte de los créditos que cuente con la garantía del FAE-MYPE, y para el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito para la parte de las exposiciones que cuente con la garantía del FAE-MYPE **19**

PODER EJECUTIVO

**PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS**

Decreto Supremo que dispone la prórroga del plazo de suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo al amparo del numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional

**DECRETO SUPREMO
N° 076-2020-PCM**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se dispone la suspensión por treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación, del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encontraran en trámite desde su entrada en vigencia, con excepción de aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los administrados;

Que, la norma antes señalada dispone que el plazo antes mencionado puede ser prorrogado mediante Decreto Supremo refferendado por el Presidente del Consejo de Ministros;

Que, la citada disposición forma parte de un conjunto de medidas adicionales extraordinarias que permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-19,

considerando la declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario dispuesta por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el término de quince (15) días calendario y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19;

Que, como consecuencia de esta declaratoria se dispuso la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, estableciendo una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional; así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, entre otras medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19;

Que, posteriormente a través del Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, se precisa el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, con la finalidad de adoptar acciones complementarias que precisen las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, y lograr con ello, la adecuada y estricta implementación de la inmovilización social obligatoria;

Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM se dispone la prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 044-2020-PCM, y precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y N° 046-2020-PCM, por el término de trece (13) días calendario, contados a partir del 31 de marzo de 2020;

Que, mediante Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de abril de 2020, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y ampliado temporalmente mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM y precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM y N° 063-2020-PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020;

Que, mediante Decreto Supremo N° 075-2020-PCM publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de abril de 2020, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional

declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020;

Que, debido a las graves circunstancias que han venido afectando al país se consideró de máxima prioridad la preservación de la vida y la salud de todo el personal que labora en las entidades del Poder Ejecutivo quienes deberán reasumir sus actividades al término del Estado de Emergencia Nacional debiendo disponerse las acciones administrativas necesarias entre ellas la dotación de personal aplicando las modalidades de prestación de servicios que permita mantener el distanciamiento mínimo de un metro de distancia, mejora de procesos entre otras medidas a ser adoptadas, apreciándose la necesidad de prorrogar el plazo de suspensión de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio negativo y positivo;

De conformidad con lo establecido por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020-PCM, y el numeral 8.2 inciso f) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por el Decreto Supremo N° 022-2017-PCM;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga de la suspensión del cómputo de plazos señalada en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020

Prorrogar el cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la presente norma, por el término de quince (15) días hábiles contados a partir del 29 de abril del 2020.

Artículo 2.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

1865826-1

EDUCACION

Derogan la Norma Técnica denominada "Disposiciones que orientan el proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones y programas educativos de la Educación Básica"

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 094-2020-MINEDU

Lima, 26 de abril de 2020

VISTOS, el Expediente N° 0009720-2020, los informes técnicos contenidos en el referido expediente, el Informe N° 00502-2020-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a los literales b) y d) del artículo 5 del Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, son atribuciones del Ministerio de Educación formular las normas de alcance nacional que regulen las actividades de educación, deporte y recreación; y orientar el desarrollo del sistema educativo nacional, en concordancia con lo establecido por la ley, y establecer las coordinaciones que al efecto pudieran ser convenientes y necesarias;

Que, el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado;

Que, en el artículo 53 de la Ley General de Educación se señala que el estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo; y le corresponde, conforme se señala en el literal a) de dicho artículo, contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de alternativas para culminar su educación;

Que, el artículo 30 de la precitada Ley establece que la evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los procesos y resultados del aprendizaje; es formativa e integral porque se orienta a mejorar esos procesos y se ajusta a las características y necesidades de los estudiantes; habiéndose precisado que, en los casos en que se requiera, funcionarán programas de recuperación, ampliación y nivelación pedagógica;

Que, conforme al artículo 22 del Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED, la evaluación es un proceso continuo de carácter pedagógico, orientado a identificar los logros de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que necesiten para mejorarlos; evalúa las competencias, capacidades y actitudes del currículo, considerando las características del estudiante. Asimismo, entre otros aspectos, dicho artículo señala que el Ministerio de Educación establece las normas nacionales de evaluación, promoción, recuperación y nivelación pedagógica, tomando en cuenta la diversidad;

Que, en el artículo 34 del precitado Reglamento se establece que la evaluación de aprendizajes en la Educación Básica es permanente, continua, formativa y flexible, se concreta en la práctica pedagógica del docente para mejorar los logros de aprendizajes de los estudiantes. Asimismo, se señala que dicha evaluación asume formas diversas (autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación) e identifica logros, avances y dificultades en los aprendizajes de los estudiantes para tomar decisiones que aporten a su mejoramiento continuo;

Que, considerando el marco normativo antes expuesto, mediante Resolución Viceministerial N° 033-2020-MINEDU, se dispuso la publicación del proyecto normativo denominado "Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica", a fin de recibir las sugerencias y aportes de las entidades públicas y privadas, y de la ciudadanía en general;

Que, mediante los Informes N° 00301-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR, N° 00306-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR, N° 00403-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR y N° 00411-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR, remitidos por la Dirección General de Educación Básica Regular al Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica, se sustenta la necesidad de aprobar el documento normativo denominado "Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica"; así como, de derogar la Norma Técnica denominada "Disposiciones que orientan el proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones y programas educativos de la Educación Básica", aprobada por el artículo 4 de la Resolución Viceministerial N°

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

**DECRETO DE URGENCIA
N° 029-2020**

**DICTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
DESTINADAS AL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y
PEQUEÑA EMPRESA Y OTRAS MEDIDAS PARA LA
REDUCCIÓN DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA
ECONOMÍA PERUANA**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado la alerta por el COVID-19 "nivel muy alto" en todo el mundo tras los casos de brote que se han detectado en más de ciento veinte (120) países. El organismo ha decidido elevar la alerta por "el aumento continuo en el número de casos y de países afectados";

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y control del COVID-19;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 083-2020-PCM, se conforma el Grupo de Trabajo denominado "Comisión Multisectorial de Alto Nivel que conduzca las labores de coordinación y articulación orientadas a la prevención, protección y control del Coronavirus (COVID-19)", dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros; cuyo objeto es conducir las labores de coordinación y articulación orientadas a la prevención, protección y control del Coronavirus (COVID-19);

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las perspectivas de crecimiento de la economía global, y en particular, la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación del virus (COVID-19) en el territorio nacional; en especial, los factores que conllevarían a la afectación de la actividad económica son los menores precios de las materias primas, la volatilidad de los mercados financieros, la disminución del comercio internacional y el menor dinamismo de algunas actividades claves en la economía local; razón por la cual, de continuar la expansión del virus COVID-19, podría afectar los sectores vinculados con el comercio, turismo, transporte aéreo y terrestre, entre otros;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 039-2020/MINSA, el Ministerio de Salud aprobó el Documento Técnico: "Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-nCoV", cuya finalidad es reducir el impacto sanitario, social y económico en el país ante el riesgo de introducción del 2019-nCoV, y tiene como objetivo reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria frente al riesgo de introducción de dicho virus; y, mediante Resolución Ministerial N° 084-2020/MINSA se ha aprobado el Documento Técnico "Atención y manejo clínico de casos de COVID-19, escenario de transmisión focalizada";

Que, las micro y pequeñas empresas (MYPE) constituyen un sector que se encuentra en una situación de desventaja o vulnerabilidad debido a un menor acceso al financiamiento, el cual representa uno de los principales factores que limita la mejora de sus niveles de productividad; sumado a dicha situación, el contexto atípico y de emergencia como el actual incidiría negativamente sobre las MYPE, generando que éstas afronten problemas de liquidez en el corto plazo; razón por la cual, resulta necesario establecer medidas extraordinarias, en materia económico financiera, que promuevan su financiamiento para mantener e impulsar su desarrollo productivo;

Que, de otro lado, habiéndose detectado casos confirmados de la enfermedad causada por el virus del COVID-19 en el territorio nacional y existiendo el riesgo de su alta propagación, resulta necesario establecer medidas adicionales extraordinarias que permitan adoptar las acciones preventivas, de respuesta y de financiamiento, para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, en el territorio nacional; que de no adoptarse podrían afectar la economía nacional y con ello el cumplimiento de las metas fiscales previstas para el presente año fiscal;

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República:

DECRETA:

Artículo 1. Objeto

El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, que promuevan el financiamiento de las micro y pequeñas empresas (MYPE), que se vean afectadas por el contexto internacional y local adverso, producto de la propagación del COVID-19 en el territorio nacional; así, como establecer medidas que permitan adoptar las acciones preventivas, de respuesta y de financiamiento, para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el citado virus.

TÍTULO I

**MEDIDAS FINANCIERAS A FAVOR DE LAS MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPE)**

Artículo 2. Alcance

Las disposiciones contenidas en el presente título tienen como objetivo promover el financiamiento de las micro y pequeñas empresas (MYPE), a través de créditos para capital de trabajo, así como para reestructurar y refinanciar sus deudas, a fin de mantener e impulsar su desarrollo productivo.

**Artículo 3. Creación del Fondo de Apoyo
Empresarial**

3.1 Créase el Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) que tiene por objeto garantizar los créditos para capital de trabajo otorgados a las MYPE, así como reestructurar y refinanciar sus deudas.

3.2 Para efectos de financiar el Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) creado por el presente Decreto de Urgencia, autorizase al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General del Tesoro Público, durante el Año Fiscal 2020, a transferir directamente al citado fondo hasta por la suma de S/ 300 000 000,00 (TRESCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES), conforme a los mecanismos que se establezcan en el Reglamento Operativo al que se refiere el artículo 10.

Artículo 4. Límite de la garantía del FAE-MYPE

4.1 Junto con la garantía del FAE-MYPE, la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE otorga créditos a las empresas del sistema financiero y Cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público que se encuentren en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguro y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (COOPAC), a las que se refiere la Ley N° 30822 y la Resolución SBS N° 480-2019. La garantía del FAE-MYPE para COFIDE es por el 100% de la cartera honrada.

4.2 Las operaciones otorgadas por COFIDE y garantizadas por el FAE MYPE se realizan bajo la forma de cartera de créditos.

4.3 El límite de la garantía individual que otorga el FAE-MYPE a los créditos destinados a la reprogramación y/o refinanciamiento de cartera vigente, así como a los



créditos para capital de trabajo, otorgados por COFIDE a las empresas del sistema financiero y COOPAC para las MYPE se aplica de acuerdo con la siguiente cobertura:

- a) Hasta S/ 30 000,00 (TREINTAMIL Y 00/100 SOLES) con un 70% de cobertura de la cartera por deudor, que se hace efectiva previo al castigo.
- b) Desde S/ 30 001,00 (TREINTA MIL UNO Y 00/100 SOLES) hasta S/ 60 000,00 (SESENTA MIL Y 00/100 SOLES) con un 50% de cobertura de la cartera por deudor, que se hace efectiva previo al castigo.
- c) Desde S/ 60 001,00 (SESENTA MIL UNO Y 00/100 SOLES) hasta S/ 90 000,00 (NOVENTA MIL Y 00/100 SOLES) con un 30% de cobertura de la cartera por deudor, que se hace efectiva previo al castigo.

4.4 El financiamiento de COFIDE a las empresas del sistema financiero y COOPAC es hasta por el 100% del requerimiento de dichas entidades.

4.5 El FAE –MYPE puede otorgar garantías por hasta cinco (5) veces los recursos disponibles.

Artículo 5. Recursos del FAE-MYPE

Son recursos del FAE-MYPE, los siguientes:

- a) Recursos señalados en el numeral 3.2 del artículo 3.
- b) Donaciones de personas jurídicas privadas y recursos provenientes de convenios de cooperación técnica y/o financiera internacional no reembolsable, los cuales son registrados en el marco de la normatividad vigente.
- c) Ingresos financieros derivados de la administración o inversión de los anteriores recursos.

Artículo 6. Criterios de elegibilidad de los beneficiarios del FAE-MYPE

Son elegibles como beneficiarios del FAE-MYPE, las MYPE que desarrollen actividades de producción, turismo, comercio y servicios conexos, que:

- a) Obtengan créditos para capital de trabajo a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia, según los parámetros establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para créditos a microempresas y pequeñas empresas; o,
- b) Cuenten con un crédito vigente y se encuentren clasificadas en la central de riesgo de la SBS en la categoría "Normal" o "Con Problemas Potenciales" (CPP) a febrero de 2020 y requieran una reprogramación o refinanciamiento a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia.

Artículo 7. Contrato de canalización de recursos del FAE-MYPE

Las empresas del sistema financiero supervisadas por la SBS y COOPAC que accedan a la facilidad crediticia de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE celebran el contrato de canalización de recursos.

Artículo 8. Plazo de los créditos garantizados y de acogimiento al FAE-MYPE

- 8.1 El plazo de los créditos para capital de trabajo no puede exceder de treinta y seis (36) meses.
- 8.2 El plazo de las reprogramaciones o refinanciamientos de la cartera vigente no puede exceder de treinta y seis (36) meses.
- 8.3 Autorízase a las empresas del sistema financiero y COOPAC a incluir en los plazos señalados en los numerales precedentes un periodo de gracia de hasta seis (6) meses.
- 8.4 Los recursos del FAE-MYPE pueden ser utilizados para créditos otorgados hasta el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 9. Administración del FAE-MYPE

9.1 Con los recursos del FAE-MYPE previstos en el numeral 3.2 del artículo 3, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General del Tesoro

Público, constituye un patrimonio fideicometido, para lo cual transfiere dichos recursos a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE en dominio fiduciario, para su administración.

9.2 Para lo dispuesto en el numeral precedente, se autoriza a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir un contrato de fideicomiso con la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, el mismo que debe ser aprobado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo no mayor de cinco (05 días) hábiles contados desde la entrada en vigencia del Reglamento Operativo al que se refiere el artículo 10, teniendo en cuenta la propuesta de contrato de fideicomiso que remita la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado del Ministerio de Economía y Finanzas.

9.3 A la fecha de culminación de la vigencia del FAE-MYPE, la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE debe revertir los recursos al Tesoro Público.

Artículo 10. Reglamento Operativo del FAE-MYPE

Mediante Reglamento Operativo se establecen disposiciones complementarias que resulten necesarias para el adecuado funcionamiento del FAE-MYPE, incluyendo el plazo de vigencia de dicho fondo. El referido Reglamento se aprueba mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia.

Artículo 11. Facultad de COFIDE y autorización al Banco de la Nación del FAE-MYPE

11.1 Autorízase a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE a participar como fiduciario y fideicomisario del FAE-MYPE, en tanto no altere su calidad de banco de desarrollo de segundo piso.

11.2 Lo señalado en el numeral precedente, implica una excepción temporal a lo establecido en el numeral 1 del artículo 258 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, por lo que todos los actos que realice COFIDE, como fiduciario del FAE-MYPE, en beneficio propio como fideicomisario del referido fondo, no se encuentran restringidos durante el plazo vigencia del FAE-MYPE.

11.3 Autorízase al Banco de la Nación a otorgar una línea de crédito a COFIDE para facilitar la liquidez temporal del FAE-MYPE.

Artículo 12. Participación de COFIDE en el Fondo CRECER

12.1 De manera excepcional, autorízase a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, hasta el 31 de diciembre de 2020, a participar como fideicomisario del Fondo CRECER, en tanto no altere su calidad de banco de desarrollo de segundo piso.

12.2 Lo señalado en el numeral precedente, implica una excepción temporal a lo establecido en el numeral 1 del artículo 258 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, por lo que todos los actos que realice COFIDE, como fiduciario del Fondo CRECER, en beneficio propio como fideicomisario del referido fondo, no se encuentran restringidos durante el plazo a que se refiere el numeral precedente.

12.3 Asimismo, durante esta excepción temporal COFIDE es considerada (i) Empresa del Sistema Financiero (ESF), bajo del ámbito de la aplicación del reglamento del Decreto Legislativo N° 1399 y en el contrato de fideicomiso del Fondo CRECER; o (ii) Beneficiario de las coberturas que otorga el Fondo CRECER a las ESF.

TÍTULO II

MEDIDAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE ACCIONES ANTE LOS EFECTOS DEL COVID-19

Artículo 13. Alcance

Las disposiciones contenidas en el presente título

tienen como objeto establecer medidas que permitan adoptar las acciones preventivas, de respuesta y de financiamiento, para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, en el territorio nacional.

Artículo 14. Transferencia de recursos de FONAFE

14.1 Autorízase al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) a transferir progresivamente al Tesoro Público hasta por la suma de S/ 1 500 000 000,00 (UN MIL QUINIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES). Esta transferencia es adicional a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto de Urgencia N° 015-2019, Decreto de Urgencia para el equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

14.2 Los recursos a los que se refiere el numeral precedente, se incorporan en el presupuesto institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Año Fiscal 2020, vía crédito suplementario, a favor de la Reserva de Contingencia, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. Dichas incorporaciones se aprueban mediante decreto supremo refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas.

Artículo 15. Transferencia de los recursos de libre disponibilidad del Tesoro Público del ejercicio fiscal 2019

15.1 Autorízase al Poder Ejecutivo a reorientar y transferir, de manera excepcional, los recursos de libre disponibilidad del Tesoro Público al cierre del Año Fiscal 2019 a favor de la Reserva de Contingencia.

15.2 Los recursos de libre disponibilidad del Tesoro Público al cierre del Año Fiscal 2019 a los que se refiere el numeral precedente, se incorporan en el presupuesto institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Año Fiscal 2020, vía crédito suplementario, a favor de la Reserva de Contingencia, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. Dichas incorporaciones se aprueban mediante decreto supremo refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas.

Artículo 16. Saldos del Fondo para la continuidad de la Reconstrucción con Cambios

16.1 Autorízase a la Presidencia del Consejo de Ministros - Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a partir del 1 de abril de 2020, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, con cargo a los créditos presupuestarios del "Fondo para la continuidad de la Reconstrucción con Cambios", que no hubieran sido transferidos en el marco de lo señalado en el numeral 49.6 del artículo 49 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Dichos recursos se utilizan para el financiamiento de las intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, y de los gastos para el funcionamiento de dicha Unidad Ejecutora. La transferencia de dichos recursos se realizará conforme a lo establecido en el segundo párrafo del numeral 49.2, del artículo 49 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

16.2 Déjase sin efecto lo establecido en el numeral 49.7 del artículo 49 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

16.3 A fin de poder implementar lo señalado en el numeral 16.1, ampliase el destino del saldo pendiente de colocación de la emisión de bonos soberanos aprobada con el artículo 6 de la Ley N° 30881, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2019, con la finalidad de destinarlos al financiamiento de todas las intervenciones y/o proyectos incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios.

Artículo 17. Saldos del Fondo para la continuidad de las inversiones por Recursos Ordinarios

Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, a partir del 20 de abril de 2020, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático a favor de la Reserva de Contingencia a la que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, con cargo a los créditos presupuestarios del "Fondo para la continuidad de las inversiones" que no hubieran sido transferidos en el marco de lo señalado en el numeral 1 de la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 del mencionado Decreto Legislativo.

Artículo 18. Ampliación del plazo para la aprobación de operaciones de endeudamiento en trámite

Ampliase hasta el segundo trimestre del Año Fiscal 2020 el plazo establecido en el artículo 15 del Decreto de Urgencia N° 016-2019, Decreto de Urgencia para el endeudamiento del sector público para el Año Fiscal 2020, para la aprobación de operaciones de endeudamiento que al 31 de diciembre de 2019 se encontraban en trámite.

Artículo 19. Ampliación del plazo para solicitar facilidad financiera a Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

Ampliase hasta el 31 de mayo de 2020 el plazo establecido en el numeral 3 de la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 021-2020, Decreto de Urgencia que establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones, para la presentación de solicitudes para acceder a la facilidad financiera que se establece en la mencionada disposición complementaria final.

Artículo 20. Sobre convenios en el marco de transferencias de partidas

20.1 Autorízase, de manera excepcional, a las entidades del Gobierno Nacional para aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, sin contar con la previa suscripción del convenio respectivo entre las entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y/o los Gobiernos Locales, debiendo suscribirse los convenios correspondientes en un plazo máximo de hasta treinta (30) días calendarios posteriores a la publicación del decreto supremo que aprueba las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, bajo responsabilidad del Titular.

20.2 Para la aplicación del numeral precedente, es necesario que la entidad del Gobierno Nacional cuente con una solicitud y compromiso firmado por parte de las autoridades de los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales que asegure la ejecución de los recursos a ser transferidos y el cumplimiento de los compromisos acordados por la entidad.

Artículo 21. Medidas de eficiencia del gasto público para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria

21.1 Con la finalidad de mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud debido a la existencia del COVID-19, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Año Fiscal 2020, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, con cargo a los recursos del presupuesto institucional de las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la Reserva de Contingencia a la que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, las que se aprueban utilizando sólo el mecanismo establecido en el artículo 54

del mencionado Decreto Legislativo. Para tal fin, exceptúese a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales de lo establecido en el artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1440.

21.2 Autorízase, durante el Año Fiscal 2020, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, con cargo a los recursos a los que se refiere el numeral 21.1 del presente artículo transferidos a favor de la Reserva de Contingencia, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar la mitigación de los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud debido a la existencia del COVID-19 así como para financiar otros gastos que requieran los pliegos presupuestarios para el cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios a su cargo, las que se aprueban utilizando sólo el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo N° 1440.

21.3 Déjase sin efecto lo establecido en los numerales 19.1, 19.2 y 19.3 del artículo 19 del Decreto de Urgencia N° 039-2019, Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia presupuestaria que contribuyan a la ejecución del gasto público en los años fiscales 2019 y 2020, y aprueban otras medidas.

21.4 Para la implementación de lo establecido en el presente artículo, los Titulares de cada pliego bajo los alcances del presente artículo deben disponer medidas que fueran necesarias, garantizando la prestación de los servicios, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas habilita al Titular del Pliego los accesos informáticos que se requieran para las modificaciones presupuestarias correspondientes en el marco de la normatividad vigente.

Artículo 22. Financiamiento para la implementación de medidas de bioseguridad en el Instituto Nacional Penitenciario

22.1. Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia, a favor del Instituto Nacional Penitenciario, hasta por la suma de S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), para financiar la implementación de medidas de bioseguridad que se requieran para reforzar el sistema de prevención y contención frente al COVID-19, de acuerdo al detalle siguiente:

DE LA:	En Soles
SECCION PRIMERA	: Gobierno Central
PLIEGO	009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA	001 : Administración General
CATEGORIA	
PRESUPUESTARIA	9002 : Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
ACTIVIDAD	5000415 : Administración del Proceso Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE	
2.0 Reserva de Contingencia	10 000 000,00
TOTAL EGRESOS	10 000 000,00
A LA:	En Soles
SECCION PRIMERA	: Gobierno Central
PLIEGO	061 : Instituto Nacional Penitenciario
CATEGORIA	
PRESUPUESTARIA	9002 : Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
ACTIVIDAD	5006269 : Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE	
2.3 Bienes y Servicios	10 000 000,00
TOTAL EGRESOS	10 000 000,00

22.2 El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia de Partidas aprueba mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral precedente, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia de la presente norma legal. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

22.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

22.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 23. Asistencia y repatriación de connacionales en el marco de la emergencia por COVID-19.

23.1 Dispóngase al Ministerio de Relaciones Exteriores que realice asistencia y repatriación de connacionales que se encuentran en el exterior que requieran retornar al Perú en el actual contexto de emergencia sanitaria global por las medidas aplicadas en los distintos países en donde se encuentran. Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Relaciones Exteriores se aprueban los lineamientos para el otorgamiento de la asistencia y repatriación a las que se refiere el presente numeral.

23.2 Para dicho fin, autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia, hasta por la suma de S/ 12 960 000,00 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL Y 00/100 SOLES) a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores para financiar lo dispuesto en el numeral anterior, de acuerdo al detalle siguiente:

DE LA:	En Soles
SECCION PRIMERA	: Gobierno Central
PLIEGO	009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA	001 : Administración General
CATEGORIA	
PRESUPUESTARIA	9002 : Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
ACTIVIDAD	5000415 : Administración del Proceso Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE	
2.0 Reserva de Contingencia	12 960 000,00
TOTAL EGRESOS	12 960 000,00
A LA:	En Soles
SECCION PRIMERA	: Gobierno Central
PLIEGO	008 : Ministerio de Relaciones Exteriores
CATEGORIA	
PRESUPUESTARIA	9002 : Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
ACTIVIDAD	5006269 : Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE	
2.3 Bienes y Servicios	12 960 000,00
TOTAL EGRESOS	12 960 000,00

23.3 El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia de Partidas aprueba mediante Resolución,

la desagregación de los recursos autorizados en el numeral precedente, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia de la presente norma legal. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

23.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

23.5 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 24. Protección de población vulnerable en el marco de la emergencia por COVID-19.

24.1 Dispóngase que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con la finalidad de proteger a la población vulnerable que se encuentra en abandono en las vías públicas otorga refugio temporalmente a dicha población vulnerable en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y control del COVID-19.

24.2 Para dicho fin, autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia, hasta por la suma de S/ 3 446 501,00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UNO Y 00/100 SOLES) a favor del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para financiar lo dispuesto en el numeral anterior, de acuerdo al detalle siguiente:

DE LA:		En Soles
SECCION PRIMERA	: Gobierno Central	
PLIEGO	009 : Ministerio de Economía y Finanzas	
UNIDAD EJECUTORA	001 : Administración General	
CATEGORIA		
PRESUPUESTARIA	9002 : Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	
ACTIVIDAD	5000415 : Administración del Proceso Presupuestario del Sector Público	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1 : Recursos Ordinarios	
GASTO CORRIENTE		
2.0 Reserva de Contingencia		3 446 501,00
TOTAL EGRESOS		3 446 501,00

ALA:		En Soles
SECCION PRIMERA	: Gobierno Central	
PLIEGO	039 : Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	
CATEGORIA		
PRESUPUESTARIA	9002 : Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	
ACTIVIDAD	5006269 : Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1 : Recursos Ordinarios	
GASTO CORRIENTE		
2.3 Bienes y Servicios		3 446 501,00
TOTAL EGRESOS		3 446 501,00

24.3 Los Titulares de los pliegos habilitados en la presente Transferencia de Partidas aprueban mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral precedente, a nivel programático, dentro de

los cinco (05) días calendario de la vigencia de la presente norma legal. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

24.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

24.5 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo.

TITULO III

MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE PROPAGACIÓN DEL COVID-19

Artículo 25. Modificación de turnos y horarios de la jornada laboral

Autorízase a los empleadores del sector público y privado para que, durante el plazo de vigencia de la emergencia sanitaria, puedan modificar y establecer de manera escalonada los turnos y horarios de trabajo de sus trabajadores y servidores civiles como medida preventiva frente al riesgo de propagación del COVID-19, sin menoscabo del derecho al descanso semanal obligatorio.

Artículo 26. Medidas aplicables durante la vigencia del estado de emergencia nacional en el sector público y sector privado

26.1 Durante la vigencia de la declaratoria de estado de emergencia nacional efectuada mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, los empleadores deben adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de garantizar la adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales regulados en el numeral 4.1 del artículo 4, en el numeral 8.3 del artículo 8 y en el numeral 9.3 del artículo 9 de dicha norma, y que resultan estrictamente necesarios para evitar la propagación del COVID-19.

26.2 En el caso de las actividades no comprendidas en el numeral precedente y, siempre que no se aplique el trabajo remoto, los empleadores otorgan una licencia con goce de haber a los trabajadores y servidores civiles, de acuerdo a lo siguiente:

a) En el caso del sector público, se aplica la compensación de horas posterior a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, salvo que el trabajador opte por otro mecanismo compensatorio.

b) En el caso del sector privado, se aplica lo que acuerden las partes. A falta de acuerdo, corresponde la compensación de horas posterior a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional.

Artículo 27. Medidas extraordinarias en materia de personal del sector público

27.1 En materia de pago de planillas, se establece lo siguiente:

a) En los casos de creación y/o actualización de registros en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), que no puedan ser atendidos en virtud de las medidas restrictivas establecidas en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, las entidades del Sector Público quedan exoneradas de la obligación de contar con dicho registro, efectuando el pago de la planilla que corresponda, a través del Módulo de Control de Pago de Planillas (MCP) bajo la denominación "Otros".



b) Culminado el Estado de Emergencia Nacional, las entidades del Sector Público remiten la documentación correspondiente a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH), para la evaluación de la creación y/o actualización de los registros respectivos en el AIRHSP, conforme a la normatividad vigente.

c) La máxima autoridad administrativa de cada entidad del Sector Público, es responsable de velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el numeral precedente, así como por el pago de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público que se generen durante el periodo de Estado de Emergencia Nacional.

27.2 En materia de personal destinado a la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus, se establece lo siguiente:

a) Durante el plazo de vigencia del presente Decreto de Urgencia, para garantizar las medidas establecidas en el mismo, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales a la contratación de personal bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, que preste servicios para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus en los establecimientos de Salud. Para tal efecto, se les exonera de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales.

b) Todas las afectaciones de créditos presupuestarios vinculados a la aplicación de lo dispuesto en el presente numeral deben realizarse con cargo a la actividad 5006269: Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus.

c) Los contratos administrativos de servicios que se suscriban en virtud al literal a) del presente numeral tienen naturaleza estrictamente temporal y quedan resueltos automáticamente una vez culminada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud debido a la existencia del COVID-19. Los ingresos de personal extraordinarios relacionados a las actividades destinadas a la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus no son registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

27.3 La implementación de los numerales precedentes se financian con cargo al presupuesto institucional de cada Pliego.

Artículo 28. Suspensión de plazos en procedimientos en el sector público

Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia.

Artículo 29. Autorización al PRONATEL para transferir al MINSA equipos informáticos para la prevención y atención de la emergencia producida por el COVID-19

29.1 Facúltase al Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL a transferir, en calidad de donación, la propiedad de dos mil (2000) tabletas de su patrimonio a favor del Ministerio de Salud, las que serán entregadas en los lugares que el MINSA indique.

29.2 El cumplimiento del procedimiento establecido en la Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", aprobada mediante

Resolución N° 046-2015/SBN, será regularizado dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes de finalizada la entrega de los bienes.

29.3 PRONATEL deberá entregar en los lugares que el MINSA indique cada una de las tabletas con un dispositivo de internet activo, para lo cual realizará, con cargo a su presupuesto institucional, contrataciones de bienes y servicios que resulten necesarias. Las contrataciones que, para cumplir con la entrega oportuna de las tabletas, se realicen en el marco del literal b) del artículo 27 del texto único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se regularizarán en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo a lo previsto en el citado reglamento.

Artículo 30. Supervisión de Limpieza a cargo de Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU)

Dispóngase que los recursos autorizados por el numeral 3.4 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 026-2020 podrán ser utilizados para contratar la supervisión de las acciones de prevención, limpieza y desinfección establecidas en los numerales 3.1 y 3.2 de ese mismo artículo.

Artículo 31. Vigencia

El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo aquellos plazos distintos establecidos expresamente en la presente norma.

Artículo 32. Refrendo

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de la Producción, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, la Ministra de Salud, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Ministra de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

MARÍA ANTONIETA ALVALUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ROCIO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores

MARIA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones

Anexo 7: Carta de Presentación



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 26 de julio de 2021
Carta P. 0797-2021-UCV-VA-EPG-F01/J

Licenciada
Nelly Rufina Cunza Principe
Directora
Unidad de Gestión Educativa Local N° 04

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, para presentar a MONTAÑEZ PAUCAR, JACQUELINE DEYSY; identificada con DNI N° 70033781 y con código de matrícula N° 6700261736; estudiante del programa de MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA quien, en el marco de su tesis conducente a la obtención de su grado de MAESTRA, se encuentra desarrollando el trabajo de investigación titulado:

Impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020

Con fines de investigación académica, solicito a su digna persona otorgar el permiso a nuestra estudiante, a fin de que pueda obtener información, en la institución que usted representa, que le permita desarrollar su trabajo de investigación. Nuestra estudiante investigador MONTAÑEZ PAUCAR, JACQUELINE DEYSY asume el compromiso de alcanzar a su despacho los resultados de este estudio, luego de haber finalizado el mismo con la asesoría de nuestros docentes.

Agradeciendo la gentileza de su atención al presente, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,



Dr. Carlos Ventura Orbegoso
Jefe
ESCUELA DE POSGRADO
UCV FILIAL LIMA
CAMPUS LIMA NORTE

Somos la universidad de los
que quieren salir adelante.



ucv.edu.pe



PERÚ

Ministerio
de Educación

Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana

Unidad de Gestión
Educativa Local N° 04

"Decenio de la igualdad de oportunidad para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

mejor
educación
mejores
peruanos

OFICIO N° 0750-2021-MINEDU-VMGI-DRELM-UGEL.04/DIR

SEÑORA:
JACQUELINE DEYSY MONTAÑEZ PAUCAR
jackimontanez.01@gmail.com

Presente.

Asunto : Se otorga permiso

Referencia: Carta P. 0797-2021-UCV-VA-EPG-F01/J

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarla y, en atención al documento de la referencia, en lo que respecta a *"otorgar el permiso a la estudiante, a fin de que pueda obtener información, en la institución que usted representa, que le permita desarrollar su trabajo de investigación, en el marco de su tesis conducente a la obtención de su grado de MAESTRA, se encuentra desarrollando el trabajo de investigación titulado: "Impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020"*.

En ese sentido, se otorga el permiso a la Srt. Jacqueline Deysy Montañez Paucar, estudiante de la escuela de Posgrado de la Maestría de Gestión Pública, a efectos que pueda desarrollar su trabajo de investigación, en esta institución de la UGEL, 04.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



[Firma]
LIZBET RUIFINA CUNZA PRINCIPE
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 04 – COMAS